



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**CONTRADICCIÓN DE TESIS 388/2018.
(AMPAROS EN REVISIÓN [REDACTED])**

OFICIO.- 6293. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

EN LOS AUTOS DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 388/2018, SE DICTÓ EL SIGUIENTE PROVEÍDO:

"Monterrey, Nuevo León, a dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho.

V I S T O lo de cuenta, agréguese a los presentes autos, la documentación con números de folio electrónico 74211/2018, y 74221/2018, enviados a través del **Módulo de Intercomunicación entre los Órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (MINTERSCJN)**, mediante los cuales comunican el proveído de doce de noviembre del año en curso, por el que se admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis **388/2018**, firmado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del que se advierte, en lo que al caso interesa, que solicita la versión digitalizada del original o, en su caso, copias certificadas de las ejecutorias dictadas en los **amparos en revisión [REDACTED]** del índice de este Tribunal Colegiado; y se informe si los criterios sustentados en los citados asuntos judiciales, se encuentran vigentes, o en el caso que se tengan por superados o abandonados, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, se deberán remitir versión digitalizada de las ejecutorias en las que se sustenten el nuevo criterio; lo anterior para estar en posibilidad de integrar el expediente respectivo, además de su envío a la cuenta de correo electrónico sentenciastccscjnssga@mail.scjn.gob.mx.

En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Supremo del País, remítasele la versión digitalizada del original o en su caso, de las copias certificadas de las ejecutorias dictadas en los **amparos en revisión [REDACTED]**, del índice de este órgano jurisdiccional a través de los medios solicitados; **e infórmeseles que los criterios ahí sustentados se encuentran vigentes**, sin omitir informar, que a partir de esa fecha no ha sido resuelto por este tribunal colegiado, otro asunto sobre los temas en cuestión, aunado a que, este órgano jurisdiccional cuenta con una nueva integración de su Pleno.

Cumplase.

Así lo acordó y firma el magistrado Jesús R. Sandoval Pinzón, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con la secretaria de Acuerdos Celia Luz Garza García, que da fe." RÚBRICAS. - LO QUE ME PERMITO COMUNICARLE PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES A QUE SE CONTRAE EL PRESENTE PROVEIDO INSERTO.- PROTESTO A USTED MI ATENTA CONSIDERACION.

Monterrey, Nuevo León a 26 de noviembre de 2018.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, NUEVO LEÓN

**LA SECRETARIA DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO**

Celia Luz Garza García
LIC. CELIA LUZ GARZA GARCÍA



34

POTESTAD JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN No. [REDACTED]

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO

NÚMERO [REDACTED]

ADMINISTRATIVO

RECURRENTES: [REDACTED]

POR SUS PROPIOS DERECHOS Y EN
REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO

[REDACTED]

MAGISTRADO PONENTE:

ANTONIO CEJA OCHOA

SECRETARIA:

PRISCILA PONCE CASTILLO

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León, acuerdo del
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa,
del Cuarto Circuito, correspondiente al día siete de
noviembre de dos mil catorce.

V I S T O, para resolver los autos del
toca número [REDACTED], relativo al recurso de revisión
interpuesto por [REDACTED], por sus
propios derechos y en representación de su menor hijo
[REDACTED]; en
contra de la sentencia de cinco de septiembre de dos

mil trece, que se terminó de engrosar el tres de marzo de dos mil catorce, dictada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, dentro del juicio de amparo indirecto número [REDACTED]

RESULTANDO

PRIMERO. [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED], por sus propios derechos y en representación de su menor hijo [REDACTED]

[REDACTED], mediante escrito que presentó el veinticinco de junio de dos mil trece, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, y turnado ese mismo día al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León; promovió juicio de amparo indirecto, por violación de las garantías contenidas en los artículos 1, 3, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 28 y 29 y demás relativos del Convención sobre los Derechos del Niño y; 3, 4, 6, 7, 32 y demás relativos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; contra actos del Secretario de Educación del Estado de Nuevo León y otras autoridades, que hizo consistir en:



PODER JUDICIAL DE
PRIMER TRIBUNAL COL
ADMINISTRATIVA DEL
MONTERREY, P

**III.- AUTORIDAD o AUTORIDADES RESPONSABLES.-**

- C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
- C. SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
- C. DIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

IV.- ACTO RECLAMADO.-

Se reclama la Resolución de fecha 20 (veinte) de Mayo del año emitida con motivo del Procedimiento Administrativo instruido por la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León en contra del Colegio Particular American School Foundation of Monterrey A.C., generado a raíz de la denuncia y/o queja presentada por el suscrito ante la Autoridad Responsable.

A su vez se reclaman también todas las consecuencias legales que se desprendan del acto anteriormente citado.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
COLEGIADOS EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

SEGUNDO. El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, a quien correspondió el conocimiento del presente juicio de garantías, dictó sentencia en la que, decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías.

TERCERO. Inconforme, [REDACTED], por sus propios derechos y en representación de su menor hijo [REDACTED], interpuso recurso de revisión, que se remitió para su trámite a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

CUARTO. Por auto de veintitrés de abril de dos mil catorce, el Presidente de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, lo admitió, formándose el toca número [REDACTED]; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; quien no formuló pedimento alguno y, por diverso de nueve de mayo de dos mil catorce, se ordenó turnar los autos al magistrado Antonio Ceja Ochoa, para formular proyecto de resolución.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso b), 84, 86, 88, 91 de la Ley de Amparo en vigor; en relación con el diverso numeral 37 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los acuerdos generales 84/2000 y 3/2013, dictados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de dos mil y quince de febrero de dos mil trece, respectivamente y, el Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el veintiuno de mayo de dos



PODER JUDICIAL D
PRIMER TRIBUNAL CO
ADMINISTRATIVA DE
MONTERREY.



mil trece, por tratarse de una sentencia emitida en audiencia constitucional, en la que, se decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías.

SEGUNDO. Normatividad de la materia aplicable. Dado que la interposición de la demanda de amparo ante la responsable se realizó el veinticinco de junio de dos mil trece, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de conformidad con lo que establece el artículo primero transitorio de la misma, para efectos de esta ejecutoria resulta aplicable dicho ordenamiento.



LA FEDERACIÓN
PODERO EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
DE VOLEON

TERCERO. El recurso de revisión fue interpuesto dentro del término previsto por el artículo 86, de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que la sentencia combatida le fue notificada a la recurrente, el cinco de marzo de dos mil catorce (foja 63 del juicio de amparo indirecto), por lo que, el término para la interposición del recurso transcurrió del siete al veinticuatro de marzo de dos mil catorce, descontando el día de la notificación y el que surtió efectos, así como los inhábiles a saber ocho, nueve, quince, dieciséis, diecisiete, veintiuno, veintidós y veintitrés de marzo de dos mil catorce; por lo que al

haber presentado el recurso de revisión el veinticuatro de marzo de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, y turnado al día siguiente al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, por lo que, es inconcuso que los recursos fueron presentados en tiempo.

CUARTO. La sentencia recurrida se apoya en las siguientes consideraciones:

SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consisten los actos reclamados, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: **"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"**¹ y **"ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE INTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS"**².

Del estudio íntegro de la demanda, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama:

- La resolución de veinte de mayo de dos mil trece, emitida dentro del procedimiento

¹ Registro: 181810, Novena Época, Instancia: Pleno, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia(s): Común, Tesis: P. VI/2004, Página: 255. **ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.** El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe atenderse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hacen sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen confusión o ambigüedad. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.

² Registro: 188745, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 53/98, Página: 227. **ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE INTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.** Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenerse como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.



PODER JUDICIAL DE
PRIMER TRIBUNAL COL
ADMINISTRATIVA DEL
MONTERREY, N



37

administrativo instruido por la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León en contra del Colegio Particular American School Foundation of Monterrey, asociación civil, generado a raíz de la denuncia y/o queja presentada por el quejoso ante la autoridad responsable.

- Todas las consecuencias legales que se desprendan de dicho acto.

TERCERO. Inexistencia de actos reclamados.

El Director Jurídico y la Subsecretaría de Educación Básica, ambos de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León [fojas 25 y 26], negaron categóricamente los actos que se les reclaman.

En esa tesitura, se tienen por **inexistentes** los referidos actos reclamados a las autoridades en mención, ya que no hay en autos prueba suficiente alguna presentada por la parte quejosa que desvirtúe las negativas de las citadas responsables, por tanto, se procede a **sobreseer** el presente juicio por cuanto a los actos reclamados antes precisados se refiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor.

Sustenta el anterior argumento la tesis emanada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación³, de rubro y texto siguientes:

ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto

³ Registro: 321446, Quinta Época, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XC, Materia(s): Común, Tesis: Página: 748.

que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado.

También, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito⁴, que textualmente dice:

ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo.

CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama del Secretario de Educación en el Estado de Nuevo León, consistente en la emisión de la resolución de veinte de mayo de dos mil trece, por así haberlo manifestado en su informe justificado [fojas 25 y 26], y remitir las constancias que así lo acreditan.

Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁵, de rubro y texto:

⁴ Registro: 803111, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 18-21, Julio-Septiembre de 1989, Materia(s): Común, Tesis: VI.2o.J/18, Página: 154.

⁵ Registro: 917812, Quinta Época, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 2000, Torno VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Común, Tesis: 278, Página: 231.



PODER JUDICIAL DE
PRIMER TRIBUNAL COLE
ADMINISTRATIVA DEL
MONTERREY, N



38

PO. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.

QUINTO. Análisis de oficio de causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, los tribunales federales debe analizar si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, lo aleguen o no las partes, toda vez que tal análisis constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y, además, porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de la Materia en vigor⁶.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁷, que establece:

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.

En el presente caso, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso **carece de interés jurídico** para impugnar la resolución que constituye el acto reclamado.

El artículo en comento es del tenor siguiente:

⁶ Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.

⁷ Registro: 395571, Quinta Época, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1985, Parte VIII, Materia(s): Común, Tesis: 158, Página: 262.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CIRCUITO DE LA MATERIA
ARTÍCULO CIRCUNTO
CIRCUITO LEÓN

9

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

(...)

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 50 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;

(...)"

Conforme a la reforma del artículo 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se amplió el concepto de interés de parte agraviada bajo el que se definía el interés jurídico para promover el juicio de amparo, incorporando - en lo que interesa - el concepto de interés legítimo, cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Ley Suprema y con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Por interés legítimo se entiende aquel interés - individual o colectivo-, de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico, es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra, resultando



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL C
ADMINISTRATIVO
MONTERRE



39

intrascendente que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo.

En ese tenor, al resolverse la contradicción de tesis 69/2002-SS por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hizo referencia a las características que permiten identificar el interés legítimo y que son las siguientes:

- a. Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante.
- b. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo.
- c. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular.
- d. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho.
- e. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante.
- f. La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado.

Es particularmente relevante lo anterior, en virtud de que de la interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales en cita, se colige que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de



ESTADO DE LA FEDERACIÓN
GOBIERNO EN MATERIA
DISTRITO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma, que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso.

En ese tenor, el titular del derecho [ya sea subjetivo o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico] que se estima violentado puede acudir de forma personal o a través de un representante, a solicitar la protección de la justicia federal en un juicio de amparo.

Bajo ese contexto, la Segunda Sala del Alto Tribunal estableció al resolver el amparo en revisión 256/2013, que para probar el interés legítimo debe acreditarse:

- a) Que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada.
- b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o
- c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad.

Refiere además, que los elementos constitutivos son concurrentes, de modo que el incumplimiento con cualquiera de los requisitos apuntados deriva en su falta de interés.

En la especie, se estima sumamente relevante precisar que de la demanda de amparo y las constancias de autos, se desprende que la causa de pedir del quejoso consiste en la resolución de veinte de mayo de dos mil trece, en la que el Secretario de Educación en el



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL C
ADMINISTRATIVO
MONTERREY



Estado de Nuevo León, determinó que el [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [aquí tercero perjudicado], no incurrió
en infracciones a las disposiciones contenidas en los
artículos 57, 75 y demás relativos de la Ley General de
Educación, 106, 107, 109, 112, 113, 120, 121 y demás
relativos de la Ley de Educación del Estado, que
motivaron el procedimiento administrativo iniciado en
contra de dicha asociación con motivo de los hechos
denunciados por el hoy quejoso [REDACTED]
y, por tanto, no se sancionó a la citada asociación en
contra de la cual se interpuso la queja administrativa
correspondiente.

Y además, refiere el quejoso, que la responsable
Secretaría de Educación omitió emitir pronunciamiento
alguno en la referida resolución, con relación a la ex-
servidora pública [REDACTED] [REDACTED], quien se
desempeñaba como Coordinadora de Educación Media
Superior de la Secretaría de Educación.

Bajo ese contexto, procede analizar si acorde a la
normatividad aplicable el denunciante o promovente de
una queja administrativa tiene o no interés suficiente
para promover el juicio de amparo contra la resolución
que a ésta recaiga respecto a la denuncia presentada
inicialmente en contra de la institución privada [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED],
asociación civil, y de [REDACTED] [REDACTED]; y
posteriormente en contra de [REDACTED]
estas últimas quienes se desempeñaban,
respectivamente, como Consejera Escolar de Primaria, y
Coordinadora de Educación Media Superior de la
Secretaría de Educación.

Para tal efecto, resulta necesario el análisis de diversos artículos de los ordenamientos que rigen el acto reclamado, vigentes en la época en que se presentó la denuncia materia de la litis, que dicen:

• **Ley General de Educación**

Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

(...)

II. Participar a las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que aquellas se aboquen a su solución.

• **Ley de Educación del Estado de Nuevo León.**

Artículo 122. Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del servicio, o que haya otorgado la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, considere que existen causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones, se llevará a cabo el siguiente procedimiento:

I. Se le notificará por escrito, debidamente fundado y motivado, al presunto infractor o infractora, la conducta atribuida para que dentro de un término de quince días hábiles, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de su representante legal, y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos; y

II. La autoridad, una vez transcurrido el plazo señalado en la fracción anterior, dictará la resolución que corresponda dentro de los quince días hábiles siguientes, con base en los datos aportados por el presunto infractor o infractora y las demás constancias

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTERR



41

que obren en el expediente, según la existencia de las infracciones y en su caso se impondrán al infractor las sanciones correspondientes.

Para determinar la sanción económica se considerarán las circunstancias en que se cometió la infracción, los daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse al alumnado, la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor o infractora, el carácter intencional o no de la infracción y si se trata de reincidencia.

• **Reglamento Interior de la Secretaría de Educación.**

Artículo 15. A la Subsecretaría de Educación Básica, le compete:

(...)

XXXIX. Emitir dictámenes para recomendar que se otorgue o retire la autorización, o para la aplicación de las sanciones correspondientes, a las instituciones privadas de educación básica, que no cumplan con las normas establecidas en las leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general emitidas por las autoridades educativas;

Artículo 59. A la Dirección de Control de Gestión, le compete:

(...)

III. Registrar, canalizar y dar seguimiento a las quejas, demandas y denuncias que se presenten en la Secretaría, dando vista de ello a la Dirección Jurídica;

Artículo 66. A la Dirección Jurídica, le compete:

(...)

IV. Registrar, radicar y dar seguimiento a las quejas, demandas y denuncias presentadas por y ante la Secretaría;

(...)

XXXI. Llevar a cabo la substanciación de los procedimientos en los casos y términos a que se refiere el artículo 122 de la Ley de Educación del Estado y ponerlo a consideración de la autoridad competente para que se emita la resolución respectiva;

(...)

XXXII. Las demás que le sean conferidas por el Secretario.

De conformidad con estos preceptos, cualquier interesado tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento administrativo correspondiente.

Sin embargo, la norma jurídica no estableció a favor de los particulares interesados alguna facultad o potestad de exigir a la autoridad determinada conducta, correlativa a una obligación de que ésta la realice o acceda a sus pretensiones.

En otras palabras, la normatividad aplicable concedió a los particulares interesados una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de las autoridades de las escuelas [públicas o privadas] en las que estén inscritos sus hijos o pupilos, sin otorgarles un poder de exigir de la autoridad la emisión de alguna resolución con un sentido sancionatorio específico.

Cabe destacar que el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores tiene como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio de



PODER JUDICIAL DE
PRIMER TRIBUNAL COL
ADMINISTRATIVA DEL
MONTERREY, N



42

que se trate, lo cual responde a intereses superiores de carácter público y, por tanto, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público o bien, a las autoridades escolares, sino con el de determinar con exactitud si cumplieron o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éstas resulta compatible o no con el servicio que se presta.

Sobre el particular, por analogía, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁸ ha sostenido la tesis 2a. CXXVII/2002, que dice:

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo

⁸ Registro: 185855, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Página: 473.

concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta.

En estas condiciones, el denunciante o promovente de una queja administrativa no tiene interés suficiente para impugnar en el juicio de amparo la resolución que al respecto se dicte en torno al servidor público o a la autoridad educativa a la cual se le instauró el procedimiento relativo, dado que el régimen de responsabilidades de los servidores no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino solo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, de ahí que el orden jurídico objetivo otorga al interesado una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos o miembros de las instituciones educativas [públicas o privadas], sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones.

Las anteriores consideraciones encuentran cabal sustento, por identidad jurídica, en la Jurisprudencia 1/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁹ que expresa:

⁹ Registro No. 176129. Contradicción de tesis 139/2005-S5, publicada en el la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el tomo XXIII, Enero de dos mil seis página 1120.



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL CC
ADMINISTRATIVA DE
MONTERREY



43

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa.

También resulta ilustrativa la tesis aislada I.4o.A.312 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito¹⁰, de rubro y texto:

QUEJA ADMINISTRATIVA, SU RESOLUCIÓN NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN LA DENUNCIÓ. Como la queja administrativa no constituye propiamente un medio de defensa por el que se pueda modificar o revocar alguna resolución, sino que el fin que se persigue con la misma, es establecer

¹⁰ Registro: 203299, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.12 K, Página: 471.

si el funcionario judicial ha o no cometido alguna falta en el ejercicio de su cargo; de tal suerte, que si la queja resulta fundada o infundada, con ello no se afecta el interés jurídico del denunciante, pues al dejarse intacta su esfera jurídica, es inconcuso que ningún perjuicio le depara la resolución que recae a la queja; y consecuentemente dicho denunciante carece de legitimación para promover en su contra juicio de amparo.

Finalmente, se invoca la tesis de jurisprudencia J/2, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito¹¹, que dice a la letra:

RESPONSABILIDAD OFICIAL, QUEJA ADMINISTRATIVA POR. EL DENUNCIANTE CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO. El denunciante de faltas oficiales de funcionarios públicos carece de interés jurídico para impugnar a través del juicio de amparo la resolución emitida en favor del funcionario en el procedimiento respectivo porque la ley de la materia no tutela intereses particulares, sino públicos, de tal suerte que, en forma análoga a lo que sucede en materia penal, la acción del particular se agota en la denuncia respectiva, cuyo destino final queda al arbitrio exclusivo de la autoridad que de ella conozca.

Es imperioso destacar que mediante ejecutoria de veintiuno de noviembre de dos mil doce, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la solicitud de modificación de Jurisprudencia 14/2012, a fin de determinar si la reforma del artículo 107, fracción I, de la Constitución, en la que se

¹¹ Registro: 204731, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1996, Materia(s): Común, Tesis: 1.2o.A. J/2, Página: 392.



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTERRE



44

incluyó el concepto de interés legítimo para promover el juicio de amparo, modifica las consideraciones que sirvieron de sustento de la jurisprudencia 1/2006, antes citada.

De inicio el Máximo Tribunal del País atendió a la reforma a la fracción I del Artículo 107 constitucional, que establece:

"(...)

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)"

Al respecto, la Superioridad sostuvo que de acuerdo a la reforma constitucional, el promovente del amparo deberá aducir ser titular de un derecho [interés jurídico] o de un interés legítimo individual o colectivo, lo cual excluye al interés simple.

Que con anterioridad a la reforma que se comenta, únicamente se consideraban dos tipos de interés, a saber, el jurídico y el simple, en la inteligencia de que solo el primero legitimaba el ejercicio de la acción constitucional de amparo en defensa de lo que

anteriormente se denominaba garantías individuales y, actualmente, derechos humanos.

Así las cosas, señaló que la reforma ha introducido un tercer tipo de interés [el legítimo] que todavía no ha sido definido con precisión por la doctrina o la jurisprudencia mexicana en el contexto de la acción de amparo.

Por lo que para estar en posición de definirlo, consideró necesario realizar el análisis de los conceptos de interés jurídico y simple, pues el legítimo se encuentra ubicado entre ambos y obviamente presenta semejanzas y diferencias entre éstos.

Enseguida, expuso brevemente el concepto que del "interés" y del "derecho subjetivo", por lo cual atendió al tratadista alemán Rudolf Von Ihering, por la influencia que ha tenido en nuestra legislación dice:

"Dos elementos constituyen el principio del derecho: uno sustancial, que reside en el fin práctico del derecho, que produce la utilidad, las ventajas, las ganancias que esto aseguran; otro formal, que se refiere a ese fin únicamente como medio, a saber: protección del derecho, acción de la justicia. Los derechos son intereses jurídicamente protegidos".¹²

En atención a lo expuesto sostuvo que deben distinguirse, conforme a esta teoría dos clases distintas de intereses: Los no protegidos y los protegidos jurídicamente por medio de la acción judicial.

Los primeros llamados intereses simples, consisten en "la utilidad, el bien, el valor, el goce o el interés, que

¹² Ihering, Rudolf von, El Espíritu del Derecho Romano en las Diversas Fases de su Desarrollo, T. IV, De Bailly-Ballière e Hijos, Madrid, 1892, pág. 365.



45

PG OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

son las diversas ideas que entran en juego en el concepto que estamos definiendo, por lo que señaló que Ihering comprende no solo los bienes y valores materiales, sino bienes de carácter moral: la personalidad, la libertad, el honor, los lazos de familia, etc.

Así, se tuvo que el interés no es concebido con base en las normas positivas: el interés es un fenómeno psicológico, económico o de cualquier otra índole, cuando Ihering señala este primer elemento sustancial del concepto del derecho subjetivo se coloca fuera del ámbito normativo y no lo determina con arreglo a él. Si el concepto del derecho subjetivo es un concepto jurídico, entonces debe ser determinado de manera normativa.

Observó a Kelsen en el sentido de que esta definición no es adecuada, porque se posee un derecho aunque no se tenga un interés concreto en él. La existencia de un derecho subjetivo solamente puede afirmarse con base en el derecho positivo.¹³ Por lo que siguiendo con el criterio que ha seguido la doctrina para la construcción del concepto de los derechos subjetivos, lo ha expresado Kelsen con toda claridad con las siguientes palabras.

"[...] pues para aquellos desde cuyo punto de vista fue desarrollada toda la teoría del derecho subjetivo - el punto de vista que afirma un titular del interés, situado frente al orden jurídico; el punto de vista que se pregunta: ¿hasta qué punto me interesa el orden jurídico considerado como un medio útil para el logro de mis fines?; un punto de vista, por tanto, no inmanente sino trascendente al Derecho -, la norma jurídica que estatuye un deber de obediencia a los

¹³ Cf. Kelsen, Teoría General del Estado, pág. 73.



DE LA FEDERACIÓN
OLEGIADO EN MATERIA
EL CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

A

mandatos de la autoridad, no es considerada en modo alguno como "su" derecho.¹⁴

En esta línea argumentativa, hizo las siguientes precisiones adicionales:

1) Los derechos subjetivos son y deben ser contenidos de las normas jurídicas;

2) Como ya fue observado, el elemento determinante del concepto es el de la protección jurídica por medio de la acción ante los tribunales y;

3) Hay derechos subjetivos establecidos de manera abstracta y general [en las leyes] y de manera individual en los actos jurídicos configuradores de la esfera jurídica concreta de los individuos, estos actos jurídicos se encuentran en la base de la pirámide jurídica.

Recordó que el término interés admite varias acepciones, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, y citó una que resulta útil para abordar el tema que nos ocupa:

"Interés: Inclinação del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc."

Esta definición otorga al interés un contenido fundamentalmente psicológico en tanto se refiere a una inclinación del ánimo, aunque ocasionalmente el ánimo se vea inclinado a cuestiones jurídicas. Pero no basta este último tipo de inclinación, pues el ánimo, por sí solo, no es susceptible de producir consecuencias

¹⁴ Kelsen, Op. cit., pág. 75.



PODER JUDICIAL DE
PRIMER TRIBUNAL COL.
ADMINISTRATIVA DEL
MONTERREY, N



46

PO: JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

jurídicas; para ello, resulta indispensable la existencia de normas que otorguen consecuencias de derecho a las manifestaciones externas de ese ánimo.

En otros términos, el interés adquiere el carácter de jurídico cuando el objeto al cual se inclina el ánimo se encuentra tutelado por normas jurídicas, por lo que el interés simple podrá ser de muy diversa índole en la medida en que el ánimo puede verse inclinado a cierta finalidad por motivos culturales, económicos, sociales, artísticos, religiosos o de cualquier otra índole distinta de la jurídica.

Atento a lo anterior, la Segunda Sala consideró al interés jurídico como elemento esencial de la acción procesal conjuntamente con la pretensión, ya que obedece a las siguientes consideraciones:

1. Si se entiende que la acción consiste en la facultad de instar al órgano jurisdiccional a emitir, previos los trámites correspondientes, una sentencia que resuelva un conflicto o controversia del orden jurídico, únicamente pueden plantearse a través de ella aspectos del orden jurídico, por quien justifica ser titular del derecho subjetivo que aduce como fundamento de la sentencia cuyo dictado solicita.

2. El análisis y resolución de las acciones son propios de los órganos jurisdiccionales del Estado, pudiendo entender a éste en el sentido de orden jurídico como lo concibe Kelsen, quien sostiene la unidad de Estado y Derecho al afirmar que "la esfera existencial del Estado posee validez

normativa y no eficacia causal".¹⁵ No es aceptable, pues, que sea función propia del Estado resolver conflictos ajenos al derecho.

3. Solo quien es titular del derecho que pretende deba prevalecer mediante el dictado de la sentencia, se encuentra legitimado para ejercer la acción.

En conclusión, señaló que es titular de un interés jurídico la persona cuyo ánimo se encuentra inclinado a ejercer una acción procesal y cuenta con el derecho subjetivo que con ese motivo pretende aducir.

Se definió la "pretensión" como el contenido de la acción con el objeto de que en la sentencia que dicte el juez se anulen las irregularidades mencionadas cuando se habla de la violación del derecho subjetivo del actor, por lo que para que la acción resulte procedente, debe existir una relación lógica entre el interés jurídico y la pretensión, pues, por una parte, para que pueda prosperar la pretensión [obtener sentencia concordante con la pretensión] debe estar apoyada por el interés y, por otra, no puede aceptarse la existencia de interés jurídico cuando el logro de la pretensión resulta jurídicamente imposible, pues lo contrario llevaría al absurdo de estimar que es eficaz un interés en lograr lo que es imposible.

Por ello llegó a la conclusión de que a diferencia del jurídico, el interés simple no legitima el ejercicio de la acción, pues si frecuentemente podrá darse, en un mismo asunto, una coincidencia entre los dos tipos de interés,

¹⁵ Kelsen, Hans, Teoría General del Estado, cit., pág. 21.



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL CO
ADMINISTRATIVA DE
MONTERREY.



47

Amparo en Revisión

PO: JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

pero el determinante para justificar el ejercicio de la acción es únicamente el jurídico.

En materia de amparo dijo, la demostración del interés jurídico plantea un tema de procedencia, pues de no darse aquélla, la consecuencia será el sobreseimiento en el juicio y, en el caso contrario, una sentencia de fondo que podrá o no otorgar el amparo, pues ello dependerá de que se haya acreditado o no una violación a derechos humanos.

A reserva de encontrar el significado de interés legítimo, señaló que desde el momento en que la Constitución lo considera apto para legitimar el ejercicio de la acción de amparo, le atribuye el carácter de jurídico pues solo este último puede tener ese efecto según las consideraciones que anteceden.

Según precisó la Sala, esto es así porque al atribuírse al legítimo ciertas consecuencias de derecho – legitimación al promovente del amparo –, se le eleva a la categoría de jurídico. De ahí que resulte posible hablar de un interés jurídico en sentido amplio que abarca tanto al interés jurídico en sentido estricto o restringido como al interés legítimo; en otras palabras, el interés legítimo resulta ahora ser un tipo de interés jurídico. Pero teniendo presente el segundo párrafo, fracción I del artículo 107 constitucional, que establece que “tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa”, lo que significa que, por hacerse referencia a la titularidad de un derecho subjetivo, tratándose de esos actos, no opera el interés legítimo sino solamente el

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FEDERACIÓN
JUDICIAL EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
EVO LEÓN

A

jurídico, por lo que aquél sigue siendo considerado por la Constitución interés simple en tanto no legitima el ejercicio de la acción.

Así, el Máximo Tribunal llegó a determinar que desde el momento en que se emplea el término "legítimo" debe entenderse que se trata de un interés legalmente tutelado, en lo que coincide con el interés jurídico en sentido estricto y se distingue del interés simple que no supone esa tutela.

En otros términos señaló que por legitimación debe entenderse la justificación jurídica de algo, como puede ser la de un interés que amerite jurídicamente ser protegido.

En esta tesitura, arribó que si tanto el interés jurídico como el legítimo se encuentran tutelados por normas jurídicas generales, es factible establecer su diferencia atendiendo al tipo de normas que a cada uno de ellos tutelan, por lo que sostuvo que las normas que tutelan al interés jurídico son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas; pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el status jurídico de la persona; y que en cambio, las relativas al interés legítimo no tienen la capacidad de generar derechos subjetivos.

Por ello, consideró que estas últimas normas son las que establecen los llamados intereses difusos y que se encuentran encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos núcleos o grupos que la integran y que, como ella, carecen de personalidad jurídica, tienden a regular o a proteger a entidades



PODER JUDICIAL DE L
PRIMER TRIBUNAL COLEG
ADMINISTRATIVA DEL CU
MONTERREY, NUI



48

sociales más o menos amplias pero que carecen del atributo de la personalidad jurídica.

Mediante estas normas se pretende tutelar intereses colectivos, en la inteligencia de que no otorgan derechos subjetivos al grupo social por la sencilla razón de que éste carece de personalidad jurídica ni a sus integrantes porque no son ellos, en lo individual, los destinatarios de la norma. Las normas en cuestión tutelan intereses de una colectividad que carece de personalidad jurídica sin otorgar derechos subjetivos a sus integrantes.

De lo anterior se desprendió que el interés jurídico supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo [derecho subjetivo], es decir, que se encuentra dentro de su status jurídico; en cambio, el interés legítimo no supone una afectación directa al status jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico que le permite accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual.

Además, de estimarse que la afectación al interés legítimo se da en la medida en que el sujeto forma parte de un ente colectivo que, de manera abstracta, tiene interés en que el orden jurídico opere de manera efectiva, lo que explica que se hable de un interés individual o colectivo, pero en el entendido en que la afectación individual solo podrá darse en la medida en que se forme parte de una colectividad interesada, pues, de lo contrario, se estaría en presencia de un interés jurídico o de un interés simple.

En esta línea argumentativa, explicó y le dio sentido a la terminología usada en la reforma constitucional, al decir que la regulación del interés legítimo como condición de procedibilidad de la acción de amparo, lo que hace es extender el derecho subjetivo auténtico, no reflejo, consistente, como ya se dijo, en el ejercicio de la acción procesal.

Para explicar que el interés legítimo siempre supone una idea de pertenencia a una colectividad no obstante que el precepto constitucional habla de un interés legítimo individual o colectivo, señaló que independientemente de la afectación al grupo al que pertenece el quejoso, podría producirse una más ubicada o concreta respecto de él.

En otros términos dijo, que si el agravio jurídico es susceptible de individualizarse en persona concreta independientemente de su pertenencia o no a un grupo, se está en presencia de un Interés jurídico; pero si el agravio únicamente se da en la medida en que se pertenece a un grupo, entonces se estará frente a un interés legítimo.

De todo lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegó a la conclusión de que la reforma del artículo 107, fracción I, de la Constitución, por medio de la cual se incorporó el concepto de interés legítimo, no genera la modificación de la jurisprudencia 1/2006.

Lo anterior, en razón de que el denunciante de una queja administrativa, no se ubica dentro de los supuestos de interés legítimo para instar el juicio de amparo, pues no lo hace con la finalidad de proteger intereses colectivos o difusos encaminados a regular o



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL CC
ADMINISTRATIVA DE
MONTERREY



49

PO. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

a proteger a entidades sociales más o menos amplias pero que carecen del atributo de la personalidad jurídica.

En esta línea argumentativa, concluyó que continúa vigente la consideración en el sentido de que el denunciante o promovente de una queja administrativa no tiene interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo la resolución favorable al servidor público, que ordena el archivo del expediente, por ser improcedente la queja o no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa, dado que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino solo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, de ahí que el orden jurídico objetivo otorga al interesado una mera facultad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto a sus pretensiones.

Por esto motivos, la Segunda Sala no encontró motivo por el cual se debía modificar o aclarar la jurisprudencia 1/2006, por lo que sostuvo que debían mantenerse en sus términos, y además tomo en consideración los anteriores argumentos para la emisión de la Tesis 2a. XVIII/2013 (10a.)¹⁶, que a la letra dispone:

INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por

¹⁶ Registro: 2003067, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Tesis 2a. XVIII/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Pág. 1736, Tesis Aislada (Común).



EL LA FEDERACIÓN
LEGADO EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

9

parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el juicio como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad,



PODER JUDICIAL D
PRIMER TRIBUNAL COI
ADMINISTRATIVA DEL
MONTERREY,



50

POT JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella.

Así las cosas, y en estricto acatamiento de los criterios emitidos por la normatividad, debe establecerse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en este juicio de acuerdo a la fracción V del diverso numeral 63 del mismo ordenamiento legal de referencia.

Sin que escape a la vista del suscrito juzgador que de autos se advierte la copia certificada del acta de nacimiento del menor quejoso [REDACTED] [foja 16]; sin embargo, si bien dicha documental acredita que aquél es menor de edad, y que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, procede la suplencia de la queja en toda su amplitud en atención a esa minoría de edad; también es cierto que, en la especie, no se advierte queja deficiente que suplir, aunado a que dicha suplencia no puede tener los alcances de hacer procedente un juicio que por su naturaleza intrínseca no lo es, pues la queja que fue interpuesta por la parte quejosa, se insiste, **únicamente tuvo por finalidad el que se sancionara a los hoy terceros perjudicados**, lo cual, en forma alguna implica que se desconozcan los derechos del referido menor, los cuales se encuentran garantizados al margen de las normas legales aplicables, máxime cuando de la referida queja se advierte que el demandante no pretendía lograr la inscripción de su hijo quejoso en el referido colegio, sino, por el contrario, que el personal directivo de dicho plantel educativo reubicara a diverso menor en otro colegio.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

Sirve de apoyo a las consideraciones apuntadas por identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia 50/98¹⁷, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra versa:

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, NO IMPLICA EL HACER PROCEDENTE UN RECURSO QUE NO LO ES. La suplencia de la deficiencia de la queja que existe en la materia penal sólo tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación o agravios, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente, se prive de la libertad de manera injustificada a una persona, pero de ninguna manera llega al extremo de admitir juicios o recursos no permitidos por la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan. Conforme al artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, en materia penal, aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios. Suplir implica en este caso integrar lo que falta o subsanar una imperfección, completar lo parcial o incompleto, y únicamente opera sobre conceptos de violación o agravios en el caso de que éstos sean materia de estudio ante la inexistencia de una causa de improcedencia, por lo que la suplencia sólo opera una vez que es procedente el juicio o recurso, pero no significa actuar al margen de la ley declarando

¹⁷ Registro: 195585, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Septiembre de 1998, Materia(s): Penal, Tesis: 1A./J. 50/98, Página: 228.

ESTADOS
PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTERREY



5

PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

procedente lo improcedente.

En mérito de lo expuesto, se **RESUELVE**:

ÚNICO. Se ~~sobresee~~ el juicio de amparo promovido por [REDACTED], por sus propios derechos y en representación de su hijo menor de edad [REDACTED], respecto de los actos precisados en los considerandos tercero y quinto de este fallo, por las razones allí expuestas.

Notifíquese personalmente a las partes, por oficio a las autoridades responsables y lístese.

Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, quien actúa con la licenciada Rosaura Fuentes Limón, Secretaria que autoriza, en tres de marzo de dos mil catorce, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.

RFL



JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO EN MATERIA
DEL CUARTO CIRCUITO
EY, NUEVO LEÓN

QUINTO. Como agravio presentado

por la recurrente, se aduce lo siguiente:

AGRAVIOS

Primeramente es de advertirse que de las constancias emitidas por la Autoridad Responsable en alcance a su informe justificado, se desprende lo siguiente:

Antes de abordar la temática referente a los Agravios que en líneas posteriores esgrimiré, me permito hacer mención que el asunto que se expone encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 79 bis fracción VI el cual me permito citar a continuación a la letra:

Ley de Amparo

Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

I. ...

II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia;

...

En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplenia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.

2014 MAR 25
SECRETARÍA DE JUSTICIA
ESTADO DE N. LEÓN
J. MILLÁN ESCALERA
J. FUENTES LIMÓN

PRIMERO:

FUENTE DEL AGRAVIO: La resolución de fecha 3 (tres) de Marzo de la presente anualidad, dentro del Juicio de Amparo Número 1135/2013 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León, donde se decreta el sobreseimiento del juicio.

DISPOSICIONES LEGALES VIOLADAS: Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 74 de la Ley de Amparo vigente, principios de congruencia y exhaustividad, el diverso 61 fracción XII del cuerpo de leyes en cita, así como los artículos 10., 30., párrafos primero, segundo, tercero, fracción II, inciso c) y 40., párrafos cuarto, octavo, noveno y décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70., fracciones VI y XVI, 80., fracción III y 30 de la Ley General de Educación; 3, puntos A y E, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 5 de la Ley General de Víctimas y 20, fracción III, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

CONCEPTO DE AGRAVIO: Causa agravio tanto al suscrito como a los intereses de mi menor hijo de nombre [REDACTED] la resolución emitida por el A quo en donde se decreta el sobreseimiento del juicio por considerar que el acto reclamado no depara perjuicio alguno ni al suscrito ni a mi primogénito.

ON
RIA
O Lo anterior es así dado que como quedo expuesto en la narrativa de mi demanda de amparo, mi menor hijo de nombre [REDACTED] curso sus estudios de educación básica (primaria) en las instalaciones del [REDACTED]

En ese sentido durante la temporalidad en la cual mi menor hijo cursaba sus estudios de primaria (sexto grado), fue objeto de acoso escolar conocido como Bullying, sufriendo mi menor hijo en reiteradas ocasiones maltrato psicológico, verbal y físico, siendo los principales agresores los alumnos que responde a los nombres de [REDACTED], quienes inclusive orillaron a mi hijo a tratar de quitarse la vida a consecuencia del miedo que sufría a raíz del maltrato perpetrado por los citados agresores.

Por tal motivo en fecha 4 (cuatro) de Noviembre de 2009 (dos mil nueve), el suscrito comparecí ante la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León a fin de presentar formal queja y/o denuncia en contra del [REDACTED]

Como consecuencia de lo anterior, la institución educativa en mención a través de su Director C. [REDACTED] el Consejo Directivo y Comité de Admisiones decidieron no volver a admitir como alumno a mi menor hijo [REDACTED] por lo cual retuvieron la inscripción y el ingreso de mi hijo al siguiente nivel educativo, no obstante que como se ha venido narrado mi menor hijo fue víctima de abuso físico, verbal y psicológico que casi lo llevan a la muerte por parte de los [REDACTED] situación que no tuvieron a bien en sancionar dichos órganos que integran el [REDACTED], simplemente se limitaron a sancionar con la interrupción de sus estudios a la víctima de las agresiones quedando los victimarios impunes de todas sus actuaciones.

Previo a diversos trámites de ley en fecha 20 (veinte) de Mayo del año en curso la Autoridad Responsable C. Director Jurídico de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León emitió la resolución que se impugna a través del juicio de amparo, en la cual, por una parte evita estudiar y pronunciarse con la motivación y



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE
MONTERREY



52

Amparo en Revisión

PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

fundamentación que amerita el caso en concreto respecto al tema de las irregularidades con las que se detectó a la C. [REDACTED], por otro lado y toda vez que se acredita el comportamiento de Bullying perpetrado por el alumno [REDACTED] en contra de mi menor hijo no existe consecuencia y/o sanción alguna en contra de este, de la institución educativa o de quienes ejercen la patria potestad del citado menor, así como también deslindan al Colegio de cualquier responsabilidad con motivo de los actos de Bullying acaecidos dentro de sus instalaciones.

Una vez manifestado lo anterior, es menester referir, que se respeta el criterio del A quo sin embargo el mismo no se comparte, atento a que el suscrito en mi calidad de padre de familia y mi menor hijo [REDACTED], nos sentimos afectados jurídica, económica y psicológicamente afectados por el actuar de la responsable, dado que como se expone en el presente recurso mi hijo fue víctima de bullying, es decir fue víctima de violencia escolar, no encontrando razón de ser, el por qué él A quo sobreescribió el Juicio de Amparo dado que, como se expone en el apartado correspondiente se considera que con dicha determinación él A quo transgrede en perjuicio tanto del suscrito como de mi menor hijo los artículos 1o., 3o., párrafos primero, segundo, tercero, fracción II, inciso c) y 4o., párrafos cuarto, octavo, noveno y décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7o., fracciones VI y XVI, 8o., fracción III y 30 de la Ley General de Educación; 3, puntos A y E, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 5 de la Ley General de Víctimas y 20, fracción III, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales se citan a la letra a continuación:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado - Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios -, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la



LA FEDERACION
LEGADO EN MATERIA
EL CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEON

A

Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

I. ...

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

a) ...

b) ...

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y

...

Art. 4o.-

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

...

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

ARTICULO 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I.- ...

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

...

XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de

ESTADO

PODER JUDIC
PRIMER TRIBUNA
ADMINISTRATIV
MONTERE



53

POD. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.

ARTICULO 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos; las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos y la discriminación, especialmente la ejercida en contra de las mujeres. Además:

III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Artículo 30. Las instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, otorgarán a las autoridades educativas todas las facilidades y colaboración para la evaluación a que esta sección se refiere.

Para ello, proporcionarán oportunamente toda la información que se les requiera; tomarán las medidas que permitan la colaboración efectiva de alumnos, maestros, directivos y demás participantes en los procesos educativos; facilitarán que las autoridades educativas, incluida la Secretaría, realicen exámenes para fines estadísticos y de diagnóstico y recaben directamente en las escuelas la información necesaria.

Sin menoscabo de lo señalado en los párrafos anteriores, las instituciones a que se refiere este artículo están obligadas a generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia, con la finalidad de que sean sujetas a evaluación sobre la materia. Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los medios disponibles.

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:

A. El del interés superior de la infancia.

E. El de tener una vida libre de violencia.

LEY GENERAL DE VICTIMAS

Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

UNIDOS MEXICANOS
AL DE LA FEDERACIÓN
LOS DERECHOS EN MATERIA
DEL CUARTO CIRCUITO
LEY, NUEVO LEÓN

Dignidad.- La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares.

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es Parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona.

Buena fe.- Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas, no deben criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deben brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.

Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial, los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente, entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación.

Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable, para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.

El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas.

Enfoque diferencial y especializado.- Se reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros.

Las distintas autoridades comprometidas en la aplicación de esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, defensoras y defensores de derechos humanos y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor. Todas las normas, instituciones y actos que se desprendan de la presente Ley deberán integrar un enfoque transversal de género y de protección de personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad.

Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad.



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL C
ADMINISTRATIVO
MONTERREY



B4

Enfoque transformador.- Las distintas autoridades comprometidas en la aplicación de la presente Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.

Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima.

Igualdad y no discriminación.- En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.

Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.

Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y reparación integral a las víctimas se realizará de forma multidisciplinaria y especializada.

Máxima protección.- Entendido como la obligación de cualquier autoridad de los tres órdenes de gobierno de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad.

No criminalización.- Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima, ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.

Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.

Victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición, ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.

Participación conjunta.- Para superar la vulnerabilidad de las víctimas es necesario trabajar de manera conjunta. En ese sentido el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral; la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas, podrán ejecutar planes o medidas que aporten a la consecución de dichos objetivos.

Garantizados sus derechos, la víctima deberá colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar su condición de vulnerabilidad, dentro de sus posibilidades, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos.

Progresividad y no regresividad.- Las autoridades comprometidas en la aplicación de esta Ley adquieren la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no

POW JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
D. J. FEDERACION
OLLO EN MATERIA
EL CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEON

A

podrán retroceder o supeditar aquellos derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.

Publicidad.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección.

El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías, y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible.

Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como los planes y programas que esta ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación en donde debe contemplarse la participación pública, incluidas las víctimas y los colectivos de víctimas.

Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve adelante el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.

Las autoridades deberán tener mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación de las políticas, planes y programas que se instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas.

Trato preferente.- Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 20.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tendrá, como principales atribuciones:

I. ...

III. Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las Instituciones de Seguridad Pública, en los tres órdenes de gobierno para:

- a) Prevenir la violencia infantil y juvenil;
- b) Promover la erradicación de la violencia especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;
- c) Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol, y
- d) Garantizar la atención integral a las víctimas.

...

Derivado de los numerales señalados con antelación, se desprende que los niños y adolescentes tienen derecho a una educación libre de violencia en el centro escolar, ello como expresión o resultado del derecho a la educación, a la salud, al respeto a su dignidad humana y al principio del interés superior de la niñez.

En ese sentido debe señalarse que el derecho de los niños y adolescentes a una educación libre de violencia implica que en los centros escolares públicos o privados no se ejerza en contra de niños y adolescentes violencia física, sexual, psicoemocional o verbal, ya sea directa o indirectamente, o a través de las tecnologías de la información y comunicación, generada por otros alumnos, docentes o personal directivo.

ERACIÓN
MATERIA
RCUITO
EON



DER JU... ALI
PRIMER TRIBUNAL CO
ADMINISTRATIVA DE
MONTERREY.



54

Poder Judicial de la Federación

Amparo en Revisión

Por lo tanto, como consecuencia de lo anterior, todos los órganos del Estado tienen la obligación ineludible de promover, respetar, proteger y garantizar ese derecho a través de las acciones que sean necesarias para reconocerlo, atenderlo, erradicarlo y prevenirlo, con la debida diligencia, esto es, con respuestas eficientes, eficaces, oportunas y responsables.

Sirve de apoyo la siguiente tesis que a continuación se cita:

Tesis: XXVII.10.(VIII Región) 18 K (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2004202 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3 Pág. 1630 Tesis Aislada (Constitucional)

DERECHO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES A UNA EDUCACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA EN EL CENTRO ESCOLAR.

CIÓN
TERIA
UITO

Conforme a los artículos 1o., 3o., párrafos primero, segundo, tercero, fracción II, inciso c) y 4o., párrafos cuarto, octavo, noveno y décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7o., fracciones VI y XVI, 8o., fracción III y 30 de la Ley General de Educación; 3, puntos A y E, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 5 de la Ley General de Víctimas y 20, fracción III, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los niños y adolescentes tienen derecho a una educación libre de violencia en el centro escolar, como expresión o resultado del derecho a la educación, a la salud, al respeto a su dignidad humana y al principio del interés superior de la niñez. El citado derecho implica que en los centros escolares públicos o privados no se ejerza en contra de niños y adolescentes violencia física, sexual, psicoemocional o verbal, ya sea directa o indirectamente, o a través de las tecnologías de la información y comunicación, generada por otros alumnos, docentes o personal directivo. Como consecuencia de lo anterior, todos los órganos del Estado tienen la obligación ineludible de promover, respetar, proteger y garantizar ese derecho a través de las acciones que sean necesarias para reconocerlo, atenderlo, erradicarlo y prevenirlo, con la debida diligencia, esto es, con respuestas eficientes, eficaces, oportunas y responsables.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN.

Lo subrayado es propio del suscrito.

De lo anteriormente fundamentado, se desprende que el derecho a una educación libre de violencia en el centro escolar, es un derecho fundamental, ello por estar protegido tal derecho en diversos numerales de nuestra Carta Magna, así como leyes de observancia general, por lo tanto, todos los órganos del Estado tienen la obligación ineludible de promover, respetar, proteger y garantizar ese derecho a través de las acciones que sean necesarias para reconocerlo, atenderlo, erradicarlo y prevenirlo, con la debida diligencia, esto es, con respuestas eficientes, eficaces, oportunas y responsables.

En ese sentido se considera que el A quo al emitir el sobreseimiento del Juicio de Amparo por considerar que la resolución no genera ningún menoscabo en la esfera jurídica del suscrito como de mi menor hijo, esta transgrediendo los diversos dispositivos enunciados con antelación, así como está haciendo nugatorio el acceso precisamente al derecho fundamental de todos los niños, en el caso concreto de mi menor hijo a una educación escolar libre de violencia, dado que como se desprende de la demanda de amparo así como de las diversas manifestaciones hechas por el suscrito durante el trámite del juicio de garantías, la Autoridad Responsable omitió, no obstante estaba demostrado el comportamiento de bullying o violencia escolar perpetrado en perjuicio de mi hijo, imponer sanciones en contra de la institución educativa o del menor [REDACTED] o de quienes ejercen la patria potestad del citado menor, así como también deslindan al Colegio de cualquier responsabilidad con motivo de los actos de Bullying y/o violencia escolar acaecidos dentro de sus instalaciones.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE LA FEDERACIÓN
RECIPIENTE EN MATERIA
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO
NUEVO LEÓN

Por lo anterior se considera que la resolución del A quo es contraria a derecho y en el caso en concreto no se surte la hipótesis normativa contenida en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, ya que es evidente que mi hijo es titular del derecho fundamental a la educación libre de violencia, por lo que al materializarse diversos actos de violencia en perjuicio de mi menor hijo, tal y como se ha expuesto en el presente recurso, en el escrito inicial de demanda de amparo y queda acreditado en autos del sumario, es que cualquier resolución que recaiga con motivo de la denuncia y/o queja presentada a raíz, precisamente, de dichos actos de violencia y/o bullying, tiene un impacto en la esfera jurídica tanto de mi menor hijo, como del suscrito dado que ostento la patria potestad del menor.

En ese sentido se acude ante este H. Tribunal Colegiado a fin de poner de manifiesto que no se comparte el criterio tomado por el A quo, mismo que se respeta, sin embargo se considera que en el caso justiciable y toda vez que se trata de violencia escolar, si se encuentra acreditado el interés por lo menos legítimo del suscrito y de mi menor hijo para acudir a reclamar cualquier acto de autoridad ocasionado con motivo de la denuncia y/o queja formada a raíz de que mi hijo fue víctima de violencia verbal y psicológica, por lo que se solicita la revocación de lo resuelto por el A quo y se decrete la protección de la Justicia Federal en favor de los imponentes, para que con esto se vean respetados los Derechos Fundamentales de Tutela Judicial Efectiva y Acceso a la Justicia.

SEXTO. Aspecto de la sentencia que debe quedar firme.

Debe quedar firme por falta de impugnación, el sobreseimiento decretado en el considerando tercero del fallo impugnado, con respecto a los actos reclamados al Director Jurídico y la Subsecretaría de Educación del Estado de Nuevo León, dado que negaron categóricamente los actos reclamados, únicamente en lo que respecta a la emisión de la resolución reclamada sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decretó el sobreseimiento en el juicio.

Tiene aplicación la jurisprudencia 251, publicada en la página 427, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, Quinta Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo parte VIII, que dice:

"REVISIÓN EN AMPARO. Comprende sólo los puntos de la sentencia que han sido recurridos, quedando el fallo del juez de Distrito, firme en la parte que no fue impugnada."



PODER JUDICIAL DE
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
ADMINISTRATIVO DEL
MONTERREY, N



54

Asimismo, este Tribunal Colegiado se reserva el estudio, en cuanto a la omisión en que haya incurrido el Director Jurídico de la Secretaría de Educación del Estado, por lo que hace a su actuación en la decisión previa de la resolución impugnada.

SÉPTIMO. Antecedentes.

Los principales antecedentes son los siguientes:

1. [REDACTED] por sus propios derechos y en representación de su menor hijo [REDACTED] promovió juicio de amparo indirecto, en donde señaló como acto reclamado:

"Se reclama la resolución de fecha 20(veinte) de Mayo emitida con motivo del Procedimiento Administrativo instruido por la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León en contra del [REDACTED] generado a raíz de denuncia y/o queja presentada por el suscrito ante la autoridad responsable."

En los antecedentes de la demanda y bajo protesta de decir verdad, el impetrante del amparo manifestó:

Todo lo anterior a fin de justificar interés y la representación con la cual es suscrito comparece.

"1.-Mi menor hijo de nombre [REDACTED] cursó sus estudios de educación básica

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FEDERACIÓN
JUDICIAL EN MATERIA
CIVIL CIRCUITO
DE NUEVO LEÓN

9

"(primaria) en las instalaciones del [REDACTED]
[REDACTED]

"2.- En fecha 4 (cuatro) de Noviembre de 2009 (dos
"mil nueve), el suscrito comparecí ante la Dirección Jurídica de la
"Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León a fin de
"presentar formal queja y/o denuncia en contra del [REDACTED]
[REDACTED]

"Encontrando justificación lo anterior, toda vez que
"en esa temporalidad mi menor hijo al cursar el sexto de educación
"primaria, en dicho Colegio, fue objeto de acoso escolar conocido
"como Bullying, sufriendo mi menor hijo en reiteradas ocasiones
"maltrato psicológico, verbal y físico, siendo los principales agresores
"los alumnos que responde a los nombres de [REDACTED]
[REDACTED] quienes
"inclusive orillaron a mi hijo a tratar de quitarse la vida a
"consecuencia del miedo que sufría a raíz del maltrato perpetrado por
"los citados agresores.

"3.- El día 9 (nueve) de Marzo del 2012 (dos mil doce)
"derivado de la inactividad procesal por parte de la Secretaría de
"Educación del Estado de Nuevo León en darle seguimiento a mi
"queja planteada hace más de 28 (veintiocho) meses, acudí ante dicha
"dependencia a fin de solicitar copias de todo lo actuado en la queja
"de mérito, manifestando además en dicha comparecencia que, se
"tenía conocimiento de que la señora [REDACTED]
[REDACTED] (quien es madre del agresor [REDACTED]
[REDACTED]), al momento de que acontecieron los hechos denunciados
"por el suscrito ante la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo
"León, ella ostentada el cargo de servidora pública ante dicha
"dependencia gubernamental y que no obstante de dicha situación la
"referida señora [REDACTED] se beneficiaba por
"el puesto que ejercía con dobles sueldos, bonos, compensaciones y
"sobre todo con becas escolares que se otorgaban por la institución



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL C
ADMINISTRATIVO
MONTERREY



57

PO. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

"educativa en comento, lo que se tachó de ilegal, tal y como lo deje
"asentado en mi comparecencia de mérito.

"...

"6.- Así bien, acabo de tener conocimiento de que en
"fecha 20 (veinte) de Mayo del año en curso la Autoridad
"Responsable C. Director Jurídico de la Secretaría de Educación del
"Estado de Nuevo León, emitió la resolución que por este medio se
"impugna, considerando que la misma es ilegal, dado que por una
"parte evita estudiar y pronunciarse con la motivación y
"fundamentación que amerita el caso en concreto respecto al tema de
"las irregularidades con las que se detectó a la C. [REDACTED]
[REDACTED] por otro lado y toda vez que se acredita el
"comportamiento del Bullying perpetrado por el alumno Francisco
"González Ballesteros Herrera en contra de mi menor hijo no existe
"consecuencia y/o sanción alguna en contra de este, de la Institución
"educativa o de quienes ejercen la patria potestad del citado menor,
"así como también deslindan al Colegio de cualquier responsabilidad
"con motivo de los actos de Bullying acaecidos dentro de sus
"instalaciones.

"..."

2. El Juez Primero de Distrito en Materia
Administrativa en el Estado, admitió la demanda de
garantías con el número de expediente [REDACTED],
seguido el juicio por sus demás trámites legales el
cinco de septiembre de dos mil trece, celebró la
audiencia y resolución constitucional, en donde se
dictó la sentencia definitiva que se terminó de
engrosar el tres de marzo de dos mil catorce, en
donde decretó el sobreseimiento en el juicio.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE LA FEDERACIÓN
COLEGIO EN MATERIA
EL CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

En dicha resolución el Juez de Amparo consideró que se actualizaba la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso carece de interés jurídico.

3. Inconforme con la resolución de tres de marzo de dos mil catorce, [REDACTED], interpuso recurso de revisión, al tenor de los agravios que quedaron precisados en el considerando quinto de esta ejecutoria y que constituyen los motivos de esta instancia constitucional.

OCTAVO. Sistematización de los agravios.

Aduce el recurrente en sus agravios que el asunto que se expone encuadra en la hipótesis establecida por el artículo 79 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo.

En el primer agravio señala el inconforme, que la resolución emitida por el a quo, donde decreta el sobreseimiento en el juicio, por considerar que el acto reclamado no le depara perjuicio alguno, no se comparte el criterio del juzgador, atento a que en su calidad de padre de familia y de su menor hijo [REDACTED] se sienten afectados



PODER JUDICIAL D
PRIMER TRIBUNAL COI
ADMINISTRATIVA DEL
MONTERREY.



57

jurídica, económica y psicológicamente por el actuar de la responsable, dado que su hijo fue víctima de bullying, es decir víctima de violencia escolar.

Agregó el recurrente, que no encontró razón de, por qué el a quo sobreseyó el amparo, que con dicha determinación se transgrede en su perjuicio y de su menor hijo los artículos 1º, 3º, párrafos, primero, segundo, tercero, fracción II, inciso c) y 4º, párrafos cuarto, octavo, noveno y décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7º, fracciones VI y XVI, 8º, fracción III y 30 de la Ley General de Educación; 3, puntos A y E, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 5 de la Ley General de Víctimas y 20, fracción III, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SEGIADO EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

Señaló el inconforme, que de los numerales señalados con antelación, se desprende que los niños y adolescentes tienen derecho a una educación libre de violencia en el centro escolar, ello como expresión o resultado del derecho a la educación, a la salud, al respeto a su dignidad humana y al principio del interés superior de la niñez.

Precisó el recurrente, que como consecuencia todos los órganos del Estado tiene la

obligación ineludible de promover, respetar, proteger y garantizar ese derecho, a través de las acciones que sean necesarias para reconocerlo, atenderlo, erradicarlo y prevenirlo, con la debida diligencia, esto es con respuestas eficientes, eficaces, oportunas y responsables.

Estableció el inconforme, que el a quo al emitir el sobreseimiento del juicio de amparo, por considerar que la resolución no generó ningún menoscabo en la esfera jurídica del quejoso como de su menor hijo, está transgrediendo los diversos dispositivos enunciados con antelación, así como, está haciendo nugatorio el acceso precisamente al derecho fundamental de todos los niños, en el caso concreto de su menor hijo a una educación escolar libre de violencia.

PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTERREY

Señaló el recurrente, como se desprende de la demanda de amparo, la autoridad responsable omitió, no obstante estaba demostrado el comportamiento de bullying o violencia escolar perpetrado en perjuicio de su hijo, imponer sanciones en contra de la Institución Educativa o del menor [REDACTED] o de quienes ejercen la patria potestad del citado menor, así como



5a

también deslindan al colegio de cualquier responsabilidad.

Añadió el recurrente, que la resolución del a quo es contraria a derecho y en el caso concreto, no se surte la hipótesis normativa contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que es evidente que su hijo es titular de un derecho fundamental a la educación libre de violencia, por lo que al materializarse diversos actos de violencia en perjuicio de su menor hijo, tal como se ha expuesto en el presente recurso y en el escrito de demanda, queda acreditado que cualquier resolución que recaiga con motivo de la denuncia y/o queja presentada, precisamente de dichos actos de violencia y/o bullying, tienen impacto tanto en la esfera jurídica del recurrente como de su hijo.



DE LA FEDERACIÓN
DELEGADO EN MATERIA
EL CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

NOVENO. Estudio de los agravios.

El Juez de Distrito decretó el sobreseimiento en el juicio, al estimar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

A
Estableció el juzgador de Amparo, que la causa de pedir del quejoso consiste en la resolución de veinte de mayo de dos mil trece, en la que el Secretario de Educación en el Estado de Nuevo León,

determinó que el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] no
incurrió en infracciones a las disposiciones contenidas
en los artículos 57, 75 y, demás relativos a la Ley
General de Educación, 106, 107, 109, 112, 113, 120,
121 y demás relativos a la Ley de Educación del
Estado, que motivaron el procedimiento
administrativo iniciado en contra de dicha asociación,
con motivo de los hechos denunciados por el hoy
quejoso, por tanto, no se sancionó a la citada
institución, en contra de la cual se interpuso la queja
administrativa, correspondiente.

Precisó el a quo, que además el quejoso
refiere, que la autoridad responsable Secretaría de
Educación del Estado de Nuevo León, omitió
pronunciarse en la referida resolución, con relación a
la ex servidora pública [REDACTED] quien
se desempeñaba como Coordinadora de Educación
Media Superior de la Secretaría de Educación del
Estado de Nuevo León.

Señaló el juzgador de Derechos
Fundamentales, que la normatividad aplicable
concedió a los particulares interesados una mera
facultad o potestad de formular quejas o denuncias
por incumplimiento de las obligaciones de las



JUDICIAL DE
NUEVO LEÓN
ADMINISTRATIVA DEL C
MONTERREY, NI



autoridades de las escuelas [públicas o privadas] en las que están inscritos sus hijos o pupilos, sin otorgarles un poder de exigir de la autoridad la emisión de alguna resolución con un sentido sancionatorio específico.

Agregó el a quo, que el denunciante o promovente de una queja administrativa no tiene interés suficiente para impugnar en el juicio de amparo la resolución que al respecto se dicte en torno al servidor público o a la autoridad educativa de la cual se instauró el procedimiento relativo dado que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate de ahí que el orden jurídico objetivo otorga al interesado una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias, por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos o miembros de instituciones educativas, sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones.

Apoyó su determinación en la tesis de jurisprudencia 1/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro

AFEDERACIÓN
ADO EN MATERIA
ARTO CIRCUITO
EVOLEÓN

dice: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
"PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA
"ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO
"PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE
"LA DECLARA IMPROCEDENTE."

Señaló el Juez de Derechos Fundamentales, que en razón de lo anterior el denunciante de una queja administrativa, no se ubica dentro de los supuestos de interés legítimo para instar al juicio de amparo, pues no lo hace con la finalidad de proteger intereses colectivos o difusos encaminados a regular o proteger entidades sociales más o menos amplias pero que carece del atributo de la personalidad jurídica.

Los agravios del recurrente son fundados, al ser suplidos en sus deficiencias en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo.

Resulta aplicable la tesis aislada con número de registro 240392, que al respecto sostuvo la entonces, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 175-180, Cuarta Parte, página 178, que dice:

"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA
"QUEJA. LOS JUECES DE PRIMER GRADO Y LOS DE
"SEGUNDO DEBEN REALIZARLA EN ASUNTOS EN LOS



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JEFATURA DEL PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL COLECTIVO DE AMPARO
ADMINISTRATIVO DE MONTERREY



61

POL. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

"QUE SE CONTROVIERTEN DERECHOS DE UN
"MENOR. Del estudio sistemático de los artículos 107, fracción II,
"párrafo cuarto, de la Constitución, 76, párrafo cuarto, 78, párrafo
"tercero, y 79 de la Ley de Amparo, se infiere que la obligación de
"suplir la deficiencia de la queja y aportar de oficio las pruebas que se
"estimen pertinentes, cuando se reclaman actos que afecten derechos
"de menores o incapaces, así como cuando estos figuren como
"quejosos, se encuentra dirigida directamente a las autoridades
"jurisdiccionales que conocen de esa materia en juicio ordinario y en
"los recursos procedentes, pues además de que en el juicio de amparo
"el acto reclamado debe examinarse tal y como aparezca probado ante
"la responsable, lo que impide que en él se recaben nuevas pruebas,
"las normas de la Ley de Amparo, no sólo son reglamentarias de los
"artículos 103 y 107 constitucionales, sino de todas las garantías
"individuales y, por lo mismo, son de superior jerarquía de las
"disposiciones de los Códigos de Procedimientos del Distrito y de las
"entidades federativas, debiendo acatarse preferentemente sus
"preceptos."



EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JEFATURA DE LA FEDERACIÓN
JEFATURA DE LA FEDERACIÓN
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

Contrariamente a lo que sostuvo el Juez
de Distrito en la especie no se actualiza la causal de
improcedencia prevista por el artículo 61, fracción
XII, de la Ley de Amparo, precepto que dice:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"[...]

"XII. Contra actos que no afecten los intereses
"jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la
"fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas
"generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio
"de su vigencia;

"[...]"

La normatividad establece que el juicio de amparo es improcedente, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en términos establecidos en la fracción I, del artículo 5º, de la Ley de Amparo.

El artículo 5, fracción I, de la Ley de la Materia dice:

"Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo:

"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser
"titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o
"colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión
"reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la
"presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su
"esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial
"situación frente al orden jurídico.

"El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse
"como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés
"legítimo.

"[...]"

El numeral reseñado dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución para su protección, así como los tratados internacionales en los que México sea parte.



PODER JUDICIAL DE
PRIMER TRIBUNAL COLE
ADMINISTRATIVA DEL
MONTERREY, N



62

POD. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

Del mismo modo, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone, que debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, la disposición legal señala:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

"..."

La fracción I, del artículo 107 Constitucional, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera

LA FEDERACIÓN
GRUPO EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar:

a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y,

b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente.

En la especie opuestamente a lo que sostuvo el Juez de Distrito, se acredita el interés jurídico, toda vez que el impetrante del amparo demuestra ser titular de un derecho legítimamente tutelado que le afecta de manera personal y directa, a su menor hijo [REDACTED]

En efecto el acto reclamado lo constituye una resolución dictada el veinte de mayo de dos mil trece, emitida con motivo de un procedimiento administrativo instruido por la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, en contra de un [REDACTED]

[REDACTED], a raíz de una queja presentada por [REDACTED], en donde se determinó que el citado colegio no incurrió en infracciones a la Ley General de Educación y



PODER JUDICIAL D
PRIMER TRIBUNAL CO
ADMINISTRATIVA DE
MONTERREY.



63

demás relativos a la Ley de Educación del Estado, por lo que no era procedente aplicar alguna sanción.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el denunciante de una queja administrativa carece de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que declara improcedente la queja, en virtud de que cualquier persona tiene derecho a presentar quejas o denuncias por incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos, con lo cual se inicia un procedimiento, empero la resolución que se dicte en el sentido de no sancionar al servidor público, no puede ser impugnada en el juicio de amparo por el promovente de la queja administrativa, dado que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares o individuales mediante el procedimiento sancionador, sino lograr una prestación adecuada y óptima del servicio.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FEDERACIÓN
EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

Así se estableció en la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, con número de registro 176129, que al respecto sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 139/2005-SS, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo

XXIII, Enero de 2006, Materia Administrativa, página 1120, que dice:

**"RESPONSABILIDADES DE LOS
"SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA
"QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS
"JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA
"RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.** De
"conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de
"Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona
"tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de
"las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en
"su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin
"embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene
"como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares
"mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una
"prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden
"jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular
"quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los
"servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una
"determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél
"carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución
"que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o
"por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa."

En esta caso particular motivo de estudio, la jurisprudencia resulta inaplicable, porque el impetrante del amparo que acude en representación de su menor hijo, tiene un interés jurídico para reclamar la resolución de veinte de mayo de dos mil trece, emitida con motivo de un procedimiento administrativo instruido por la Secretaría de



PODER JUDICIAL I
PRIMER TRIBUNAL CC
ADMINISTRATIVA DE
MONTERREY



Educación del Estado de Nuevo León, en contra de un [REDACTED], a raíz de una queja presentada por [REDACTED], en donde se determinó que el citado colegio no incurrió en infracciones a la Ley General de Educación y demás relativos a la Ley de Educación del Estado, por lo que no era procedente aplicar alguna sanción.

Toda vez que la resolución reclamada no solamente comprende una queja o denuncia por el incumplimiento de obligaciones por parte de un servidor público de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, sino que comprende el interés superior del niño, como es el derecho a la educación, el derecho a la no discriminación y el derecho a la dignidad que tiene un principio de rango constitucional contenido en los artículos 1º, 3º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que en la parte que interesa dice:

"Artículo 1o.

"Queda prohibida toda discriminación motivada por
"origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
"condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones,
"las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
"contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
"los derechos y libertades de las personas.

"..."



DE LA FEDERACIÓN
LEGISLADO EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

"Artículo 3o.- Todo individuo tiene derecho a recibir
"educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y
"Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y
"media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria
"conforman la educación básica; ésta y la media superior serán
"obligatorias.

"(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

"La educación que imparta el Estado tenderá a
"desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y
"fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos
"humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la
"independencia y en la justicia.

"...

"(REFORMADA, D.O.F. 5 DE MARZO DE 1993)

"II. El criterio que orientará a esa educación se basará
"en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia
"y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

"...

"(REFORMADO, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE
"2013)



PODER JUDICIAL DE LA
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADA
ADMINISTRATIVA DEL CUI
MONTERREY, NUE

"c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin
"de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la
"dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del
"interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de
"derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de
"grupos, de sexos o de individuos, y

"..."

"(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE
"DE 1974)

"Artículo 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la
"ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

"[...]



65

POT JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

"(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 2000)

"Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción
"de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
"esparcimiento para su desarrollo integral.

"(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 2000)

"Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber
"de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para
"propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de
"sus derechos.

"(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 2000)

"(F. DE E., D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2000)

"El Estado otorgará facilidades a los particulares para
"que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

"[...]"

Cobra aplicación la tesis 1a. XLVII/2011,
con número de registro 162354, que al respecto
sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXXIII, Abril de 2011, Materia Constitucional,
página 310, que dice:

"INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN
"PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO
"EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS
"MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o.
"CONSTITUCIONAL. De acuerdo a una interpretación
"teleológica, el interés superior del niño es principio de rango
"constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma
"constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o., se
"reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano

FEDERACIÓN
O EN MATERIA
TO CIRCUITO
D LEÓN

"reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo
"interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro
"país en materia de protección de los derechos del niño. En este
"sentido, el interés superior del niño es uno de los principios rectores
"más importantes del marco internacional de los derechos del niño.
"En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha entendido
"que el interés superior es un principio que está implícito en la
"regulación constitucional de los derechos del niño, ya que es
"reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los
"Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un principio rector
"de los derechos del niño."

Ello es así, porque del contenido de la
resolución reclamada de veinte de mayo de dos mil
trece, emitida por el Secretario de Educación, se
advierte que inició el procedimiento con una queja
administrativa, por la demanda presentada por [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] en contra del [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED], y otros
funcionarios de la Secretaría de Educación del Estado
de Nuevo León, por acoso escolar en contra de su
menor hijo [REDACTED]. Sin
embargo, de las constancias que obran en ese
expediente, mismas que fueran relacionadas en la
propia resolución, también se desprende que el
Director del citado Colegio, el Consejo Directivo y el
Comité de Admisión del Colegio, decidieron no
admitir en el ciclo escolar siguiente como alumno al

PODER JUDICIAL DE
PRIMER TRIBUNAL COLE
ADMINISTRATIVA DEL C
MONTERREY, NI



66

PODERE JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

menor [REDACTED] pues así se indicó en el resultando séptimo de dicha resolución en la parte que dice:

"Que comparece en su calidad de Director General "del Colegio American School Foundation of Monterrey, A.C., y al "respecto ya se encontraban enterados de la problemática que plantea "el señor Jaime González Páez, con motivo del Bullying que "menciona fue objeto su menor hijo Jaime Alberto González "Martínez, por parte de los alumnos Francisco González Ballesteros "Herrera y Jorge Arechavaleta Zambrano, puesto que durante "aproximadamente un año estuvo atendiendo de manera personal la "problemática entre la familia del quejoso, la familia de la señora [REDACTED] y otras familias. Sigue manifestando el de la "voz que inclusive existe una intervención de un Padre de la Iglesia "Católica bajo el consentimiento de las familias, y una vez que se "atendió el asunto fue el compareciente y del Consejo Directivo y "Comité de admisión quienes decidieron no volver a admitir como "alumno al menor Jaime Alberto González Martínez, atendiendo las "Condiciones de Admisión del Colegio, por lo que no se encuentra en "posibilidades de llegar a una conciliación con el quejoso."

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FEDERACIÓN
JUDICIAL DE LA
REPUBLICA
CIRCUITO
MONTERREY

De igual modo, en la misma resolución en el considerando cuarto, foja 374, referida a una comparecencia de [REDACTED] se estableció:

"...en la cual se instrumentó un acta circunstanciada, "firmada por los C.C. [REDACTED] "en su carácter de Director General del [REDACTED] [REDACTED] en donde quedó hecho constar la "voluntad de las partes, entre ellas la manifestación del Director del "Colegio, en el sentido de que se encontraban enterados de la "problemática planteada por el señor [REDACTED] con "motivo del bullying que fue objeto su menor hijo [REDACTED]

"[REDACTED] por parte de los alumnos [REDACTED]
"[REDACTED] puesto que
"durante aproximadamente un año estuvo atendiendo de manera
"personal la problemática entre la familia del quejoso, la familia de la
"señora [REDACTED] y otras familias, ya que inclusive
"existió una intervención de un Padre de la Iglesia Católica bajo el
"consentimiento de las familias, y a vez que se atendió el asunto fue el
"Dr. [REDACTED] el Consejo Directivo y Comité de
"admisión quienes decidieron no volver admitir como alumno al
"menor [REDACTED], atendiendo las reglas de
"admisión del colegio, por lo que el Sr. [REDACTED], se
"manifestó en el sentido de que la problemática no había sido
"atendida debidamente, que su menor hija [REDACTED] se quedó
"sin amigos al no ser atendido el bullying por el [REDACTED] y
"que una madre de familia de nombre [REDACTED], fue la
"que incitó a los alumnos [REDACTED] y
"[REDACTED] para que le infirieran bullying,
"proponiendo como solución al caso, se les expidiera a sus hijos una
"constancia personalizada en la que se les hiciera saber que no fueron
"expulsados por parte del Colegio, se les impusiera por parte del
"Colegio una sanción a los alumnos denunciados por su hijo, se les
"negara su reinscripción en el [REDACTED]
"[REDACTED] y se le reintegre las aportaciones que en su
"momento pagó al [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
"[REDACTED], quedando así demostrado en dicha documental la
"intervención y voluntad por parte de la Secretaría para la solución de
"un conflicto personal entre padre de familia y menores alumnos."

De lo anterior se pone de relieve que el
Director General del [REDACTED]
[REDACTED], el
Consejo Directivo y el Comité de Admisión,



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL C
ADMINISTRATIVO
MONTERRE



67

Amparo en Revisión

POT. OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

decidieron no admitir al alumno el menor [REDACTED]

Entonces, si se encuentra demostrado que el menor [REDACTED], tenía el carácter de alumno del [REDACTED]

[REDACTED], incorpora en su esfera jurídica un conjunto específico de derechos y obligaciones, por lo que la determinación mediante la cual el [REDACTED]

[REDACTED], decide no admitir como alumno al menor [REDACTED], que le

impide continuar disfrutando de dicha situación jurídica, constituye un acto de autoridad impugnabile a través del juicio de amparo, ya que se traduce en el ejercicio de una potestad administrativa, expresión de una relación de supra a subordinación, que tiene su origen en una disposición integrada al orden jurídico nacional y que implica un acto unilateral, lo cual hace innecesario acudir previamente a los tribunales ordinarios.

En esa tesitura se puede concluir, que el acto reclamado consistente en la resolución de veinte de mayo de dos mil trece, emitida por el Secretario de Educación del Estado, que resolvió el procedimiento

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CIRCUITO DE AMPARO
NUEVO LEÓN

administrativo seguido en contra del [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], con motivo de la denuncia
por acoso escolar presentada por [REDACTED]
[REDACTED], involucra dos conductas, una la sanción
administrativa que se persigue en contra de la
Institución Educativa por no dar trámite adecuado a
una denuncia de acoso escolar, y la segunda, que
derivado de ese procedimiento administrativo, las
autoridades educativas del colegio particular
decidieron no aceptar al siguiente ciclo escolar al
menor [REDACTED], lo que
vulnera su esfera jurídica de derechos al negársele el
derecho fundamental a la educación, a la no
discriminación a la dignidad y, ello sin duda alguna le
da el derecho a promover el juicio de amparo, para
que se examine la actuación de la autoridad
responsable.

Sobre el particular en un caso donde se
expulsó a un alumno de la Universidad, la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
sostuvo el siguiente criterio en la jurisprudencia
2ª./J.102/2002, publicada en la página 320, del Tomo
XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

ESTADO DE GUAYMAS
PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTERREY



"UNIVERSIDADES

PÚBLICAS

"AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA
"CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE
"UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN
"AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE
"ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD
"IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. Las
"universidades públicas autónomas son organismos descentralizados
"que forman parte de la administración pública y, por ende, integran
"la entidad política a la que pertenecen, esto es, la Federación o la
"correspondiente entidad federativa; además, se encuentran dotadas
"legalmente de autonomía, en términos del artículo 3o., fracción VIII,
"de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo
"que gozan de independencia para determinar por sí solas,
"sujetas a los principios constitucionales que rigen la actuación
"de cualquier órgano del Estado, los términos y condiciones en que
"desarrollarán los servicios educativos que presten, los requisitos de
"ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la
"forma en que administrarán su patrimonio, destacando que en la ley
"en la que se les otorga la referida autonomía, con el fin de que
"puedan ejercerla plenamente, se les habilita para emitir disposiciones
"administrativas de observancia general. En ese tenor, una vez que un
"gobernado cumple con los requisitos que le permiten adquirir la
"categoría de alumno previstos en las respectivas disposiciones
"legislativas y administrativas, incorpora en su esfera jurídica un
"conjunto específico de derechos y obligaciones, por lo que la
"determinación mediante la cual una universidad pública autónoma lo
"expulsa, o por tiempo indefinido le impide continuar disfrutando de
"dicha situación jurídica, constituye un acto de autoridad impugnabile
"a través del juicio de amparo, ya que se traduce en el ejercicio de una
"potestad administrativa, expresión de una relación de supra a
"subordinación, que tiene su origen en una disposición integrada al

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE LA FEDERACIÓN
DE JUICIO EN MATERIA
DE AMPARO
CIRCUITO
NUEVO LEÓN

"orden jurídico nacional y que implica un acto unilateral, lo cual hace
"innecesario acudir a los tribunales ordinarios para que surtan efectos
"las consecuencias jurídicas impuestas por el órgano decisor sin el
"consenso del afectado."

Ahora bien, debe destacarse que también
resultó afectada indirectamente la hermana del menor
quejoso de nombre [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], en virtud de que de la resolución impugnada
a foja 374, se advierte:

"...y a su vez que se atendió el asunto fue el Dr.
"[REDACTED], el Consejo Directivo y Comité de admisión
"quienes decidieron no volver admitir como alumno al menor [REDACTED]
"[REDACTED], atendiendo las reglas de admisión del
"colegio, por lo que el Sr. [REDACTED], se manifestó en el
"sentido de que la problemática no había sido atendida debidamente,
"que su menor hija [REDACTED] se quedó sin amigos al no ser
"atendido el bullying por el Colegio Americano y que una madre de
"familia de nombre [REDACTED], fue la que incitó a los
"alumnos [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
"para que le infirieran bullying, proponiendo
"como solución al caso, se les expidiera a sus hijos una constancia
"personalizada en la que se les hiciera saber que no fueron expulsados
"por parte del Colegio, se les impusiera por parte del Colegio una
"sanción a los alumnos denunciados por su hijo, se les negara su
"reinscripción en el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
"[REDACTED], y se le reintegre las aportaciones que en su
"momento pagó al [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
"[REDACTED], quedando así demostrado en dicha documental la
"intervención y voluntad por parte de la Secretaría para la solución de
"un conflicto personal entre padre de familia y menores alumnos."



PODER JUDICIAL
REPUBLICA DE EL SALVADOR
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MONTEPEPEY



09

POD. J. FEDERAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

Como puede observarse, la hermana del menor quejoso de nombre [REDACTED], sufrió un daño colateral, ya que no fue inscrita al siguiente año escolar, causándole un perjuicio, pues sin ser parte interesada en el problema que motivo la queja, fue relegada por sus propios compañeros y la Institución Educativa no hizo nada al respecto, pues se negó la inscripción al menor [REDACTED], por hechos derivados de una queja por acoso escolar, sin justificación alguna, aspecto que no fue analizado por la autoridad responsable.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESTADO DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA

En ese orden de ideas, si bien es cierto que en términos generales el denunciante de una queja administrativa carece de interés jurídico para impugnar la resolución con la que concluye el procedimiento iniciado por la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, en contra del [REDACTED], con motivo de los hechos denunciados por [REDACTED], también es verdad que esa regla admite como excepción aquellos casos en que se involucran derechos fundamentales, como en el caso que es la Educación del menor agraviado, la discriminación y la dignidad humana.

En efecto, en el caso no solamente se persigue la sanción correspondiente a las autoridades educativas denunciadas, por no haber actuado protegiendo al menor [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], del acoso escolar del que estaba siendo víctima por parte de sus compañeros del mismo colegio.

Sino además, la resolución de las propias autoridades educativas de no aceptar al alumno [REDACTED] [REDACTED], al siguiente año escolar, con esa decisión también se afectó de manera colateral a la menor [REDACTED], hermana del menor quejoso, quien como consecuencia no fue inscrita al siguiente ciclo escolar, al ser señalada indirectamente como parte del conflicto.

Esta última decisión, es la que otorga al menor de edad el interés jurídico para interponer el juicio de amparo, debido a que de manera directa se vulneraron sus derechos fundamentales a la educación, a la no discriminación y a la dignidad humana, consagrados en los artículos 1 °, 3 ° y 4 ° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



PODER JUDICIAL DE
PRIMER TRIBUNAL COLE
ADMINISTRATIVA DEL C
MONTERREY, N



70

POD. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

En esa virtud, se encuentra demostrado con la resolución reclamada, que la autoridad responsable no examinó adecuadamente la conducta del [REDACTED]

[REDACTED] que decidió no admitir como alumno al siguiente ciclo al menor [REDACTED]

[REDACTED] es inconcuso que con ello se le impide el derecho a la Educación, además al no atender adecuadamente a la [REDACTED] administrativa de Bullying por parte de la autoridad responsable la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, se trasgredió en perjuicio del menor el derecho a la no discriminación y a la dignidad humana, son actos que pueden examinarse, válidamente, a través del juicio de amparo por ser, por antonomasia, este procedimiento el garante de los derechos fundamentales que establece la Constitución Federal.

Por tanto, no se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

Por consiguiente, al no advertirse una diversa causal de improcedencia, que hagan valer las partes o que de oficio advierta este Tribunal, con fundamento en el artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo, corresponde atender el fondo del

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FEDERACION
EN REVISION
CIRCUITO
NUEVO LEON

planteamiento y analizar los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en representación de su menor hijo.

DÉCIMO. Cabe precisar, que no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que indirectamente se causó daño a la hermana del quejoso de nombre [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], quien sin ser parte en el problema que motivó la queja administrativa ante la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, fue afectada en sus intereses personales, ya que fue relegada por sus compañeras de escuela y como consecuencia del problema, el padre del menor decidió no inscribirla en el siguiente ciclo escolar.



PODER JUDICIAL DE L
PRIMER TRIBUNAL COLEC
ADMINISTRATIVA DEL CI
MONTERREY, NU

Sin embargo, ello no será materia del amparo, porque [REDACTED], interpuso la demanda de garantías, solamente en representación de su menor hijo [REDACTED], y únicamente por los hechos acontecidos en perjuicio de este menor, por lo que tomando en cuenta que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un interés legítimo, individual o colectivo que afecta su esfera jurídica.



71

Por tanto, no serán materia del amparo los hechos por los que indirectamente se causó daño a la hermana del quejoso de nombre [REDACTED] [REDACTED], porque no se le puede dar al juicio de amparo un alcance que no tiene, en tal virtud el estudio se concretará solamente en lo referente al menor [REDACTED], que fue objeto de representación y parte específica dentro del juicio de amparo.

DÉCIMO PRIMERO. Conviene señalar que el acto reclamado es la resolución de veinte de mayo de dos mil trece, con motivo del procedimiento administrativo instruido por la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, en contra del [REDACTED] [REDACTED] generado a raíz de la denuncia y/o queja presentada por [REDACTED] [REDACTED].

Ahora bien, la demanda de garantías fue presentada el veinticinco de junio de dos mil trece, como se advierte del sello impreso a foja 2 del juicio de amparo, misma que se presentó dentro del término establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo.

En razón de que la resolución reclamada le fue notificada el tres de junio de dos mil trece, al

RECEPCIÓN
DE MATERIA
CIRCUITO
LEÓN

impetrante del amparo mediante instructivo que obra en el cuaderno de pruebas de la foja 1 a la 30, como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja 30 del cuaderno de pruebas, en donde el notificador le hizo entrega del instructivo a una persona de nombre

La notificación, en términos del artículo 1º de la Ley de Educación del Estado, y del artículo 56, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, aplicable supletoriamente, surtió efectos al día siguiente, es decir, el cuatro de junio del citado año, por lo que el término transcurrió del cinco al veinticinco de junio de dos mil trece, por tanto, si la demanda de garantías se presentó el veinticinco de junio del citado año, es inconcuso que se encuentra en tiempo.



PODER JUDICIAL DE
PRIMER TRIBUNAL COLE
ADMINISTRATIVA DEL O
MONTERREY, NL

DÉCIMO SEGUNDO. Los conceptos de violación son del tenor siguiente:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

PRIMERO.- Antes que nada me permito citar a la letra el contenido, en lo que interesa, del artículo 1º Constitucional, dado que en él se esboza de manera amplia las obligaciones de todas las autoridades (judiciales y administrativas) de velar por el cumplimiento y protección de los Derechos Humanos de toda persona por imperativo categórico de nuestra Carta Magna así como de los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, mismo fundamento que sirve de base para la argumentación de los conceptos de violación próximos a estructurar.

Lo anterior en aras del principio pro homine (para el hombre), conforme al cual, y en términos del párrafo segundo del dispositivo constitucional 1º, así como los ordinales 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe favorecerse en todo tiempo a las personas la protección más amplia, situación que debe tomar en cuenta Usía para que no se vean soslayados mis Derechos Humanos fundamentales como lo son su el derecho a la presunción de inocencia y a la legalidad y certeza jurídica.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley...



72

Amparo en Revisión

POC JEFECIAL DE LA FEDERACIÓN

Del texto del artículo 1o de la Constitución Política de nuestro país, vigente a partir de junio del año antepasado, se desprende la obligación, por parte de cualquier autoridad tratase de una autoridad jurisdiccional o administrativa como lo es en el caso concreto, de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos a partir del principio pro personae o pro homine, que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios.

Sobre el particular, tiene aplicación la tesis aislada del contenido siguiente:

Época: Décima Época
Registro: 2000263
Instancia: PRIMERA SALA
TipoTesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localización: Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. XXVI/2012.(10a.)
Pag. 659

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.E. y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1; Pág. 659

PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUEL.

El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagra el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro.

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lucía Segovia.

Ahora bien al respecto del tema que nos merece, es de señalarse en primera instancia, toda vez que se actúa en representación de un menor, lo atinente al principio del interés superior del menor el cual se encuentra consagrado en el artículo 4 octavo párrafo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos numerales 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y los artículos 3, 4, 6 y 7 de Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los cuales se reproducen a continuación a mayor ilustración.

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 4o.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:

- A. El del interés superior de la infancia.
- B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.
- C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.
- D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.
- E. El de tener una vida libre de violencia.
- F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad.
- G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.

Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 6. A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en los tratados internacionales en los términos del artículo 133 de la



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL CC
ADMINISTRATIVA DE
MONTERREY.



73

POD. J. C. FEDERAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

Constitución, se estará a los principios generales que deriven de dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los principios generales del derecho.

Artículo 7. Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin perjuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.

El Gobierno Federal promoverá la adopción de un Programa Nacional Para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, en el que se involucre la participación de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como del sector privado y social, para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley y garanticen el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes.

Así bien de los artículos transcritos anteriormente, podemos tener una idea más clara de lo que quiere decir el principio de interés superior del menor, pudiendo definir de manera amplia dicho concepto en función de que el mismo implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de los derechos de los menores de edad deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.

Encontrando soporte todo lo anterior al tenor del siguiente criterio jurisprudencial que a continuación me permito presentar:

[J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo I; Pág. 334

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.

En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1996) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño".

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.

Amparo directo en revisión 1475/2008. 15 de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Dolores Rueda Aguilaz.

Amparo en revisión 648/2008. 29 de octubre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan W. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Amparo directo en revisión 1187/2010. 1o. de septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Javier Mijangos y González.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2076/2012. 19 de septiembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alejandro García Núñez.

FEDERACIÓN
EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

Tesis de jurisprudencia 25/2012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintiuno de noviembre de dos mil doce.

Atento a todo lo anterior y trayéndolo a colación al caso justiciable, es menester hacer alusión en que la Autoridad Responsable al momento de darle trámite a la denuncia y/o queja presentada por los actos de maltrato psicológico, físico y verbal (bullying) a los que fue objeto mi menor hijo en las instalaciones del [REDACTED] por parte del alumnado de dicha institución, no velo por el principio jurídico de tutela en mención.

Lo anterior es así dado que como se expuso en el proemio del presente concepto de violación es obligación por Imperativo categórico de la Constitución el que toda autoridad, sin distinción de grado, función o materia, ya sea administrativa o judicial, el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ahora bien, también queda demostrado que el principio intitulado interés superior del menor es un derecho fundamental y/o humano, por lo que las autoridades en el ámbito de sus competencias deben velar por el respecto y aplicación a cabalidad de dicho principio en pro de los menores de edad.

Encontrándose que en concreto que la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León en ningún momento protegió, respeto, promovió ni garantizó el Interés superior de mi menor hijo, dado que como se advertirá al momento de que Usía tenga todas las constancias que integran el acto reclamado, la Responsable nunca llevo su actuación a un plano proteccionista en pro de los derechos e intereses de mi menor hijo, ya que como se viene exponiendo mi hijo fue víctima de bullying, el cual casi lo lleva a la muerte, y nunca se realizó una investigación formal, ni se sancionó a los responsables de tales actos, ni a los victimarios, ni a los que ejercen sobre ellos patria potestad, ni mucho menos al Colegio que permitió tales actos deplorables en perjuicio de la integridad de mi hijo, atento a que nunca se impuso sanción alguna es pertinente hacer alusión de nueva cuenta la obligación por parte de la Autoridad Educativa, en función de lo antes expuesto, de investigar a detalle cualquier acto que implique un menoscabo en los intereses, desarrollo y protección de cualquier menor, situación que en el caso justiciable no acontece, dado que la autoridad simplemente de una manera pasiva tuvo detenido el expediente más de 28 (veintiocho) meses sin llevar a cabo actuación alguna, hasta que el suscrito en aras de defender los Intereses de mi hijo seguí accionando y empujando la queja para que se resolviera conforme a derecho, sin embargo tales acciones fueron en vano, toda vez que la Responsable de una manera por demás simplista y fuera de todo marco legal decreta que no hay responsabilidad alguna o sanción a imponer al Colegio educativo.

Lo anterior sin valorar diversos aspectos esenciales de la queja y/o denuncia en mención, tales como, que no se desahogo por parte de la autoridad ninguna investigación formal para acreditar los hechos denunciados por el suscrito, en atención a que es obligación de la Autoridad Educativa llegar a la verdad de los hechos a través de sus atribuciones y facultades, en función de que los intereses en juego no son los del suscrito, si no los de mi menor hijo, así también la autoridad Responsable dictamina que no hay sanción que imponer al multicitado Colegio Privado, toda vez que existe un acuerdo privado convalidado por el suscrito en donde me tengo por satisfecho y renuncio a cualquier acción legal posterior, situación que es totalmente falsa, dado que como lo esboce en el apartado de los antecedentes si acudí a una junta o procedimiento conciliatorio, sin embargo, en dicha junta lo único a lo que accedí era al reembolso de los \$ 10,000. 00 USD (Diez Mil Dólares Moneda de Curso Legal de los Estados Unidos de Norteamérica) que por concepto de aportaciones escolares erogué para la reinscripción de mi menor hijo en la institución educativa en mención, sin que esto implicara que el suscrito renunciara a ninguna acción legal, ni me diera por satisfecho y desistiéndome de la queja y/o denuncia en mención o que convalidara las actuaciones por parte de la Institución Educativa, por lo cual no es dable el argumento planteado por la Responsable ni por la institución educativa en el

PROCESO ESTAD.

PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTERREY



74

Amparo en Revisión

PO: JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

sentido de que convalide y me tengo por satisfecho con las acciones tomadas; y por último es evidente que la Responsable pasa por alto la discriminación y la exclusión hecha por parte de los directivos del [REDACTED] en perjuicio de mi menor hijo, dado que esta comprobado en los autos que integran la queja en cita que dicho Colegio le negó el ingreso al periodo escolar 2009-2010 (dos mil nueve dos mil diez), es decir de manera unilateral, arbitraria y fuera de todo marco normativo, la Institución Educativa sancionó con no volver a aceptar a mi hijo víctima de bullying dentro de sus instalaciones y permitió la inscripción y acceso a la misma a los victimarios de mi menor hijo, situación que simplemente deja de estudiar y pasa por alto la Responsable al momento de emitir la resolución que por este medio se combate.

Es por lo que se considera contrario a Derecho al Resolución aquí impugnada, dado que la misma omite resolver todos los puntos vertidos por el suscrito en el trámite de la queja y/o denuncia presentada, así también omite allegarse de los elementos de prueba suficientes para esclarecer los hechos y con esto proteger la integridad y los intereses de mi menor hijo ello dado que era su obligación constitucional y debió de haberlo hecho de oficio sin soslayar el hecho de la grave discriminación y exclusión a la que fue objeto mi hijo víctima de bullying, por parte de la Institución Escolar al no permitirle su acceso, ni ingreso a sus instalaciones.

Encuentra sentido y tiene aplicación la siguiente tesis que me permito citar a continuación, dado que en la misma se resalta la obligación por parte de las Autoridades de allegarse de todas las pruebas necesarias para preservar el interés superior del menor, no escapando a los ojos del suscrito el hecho de que dicha jurisprudencia tiene un alcance jurisdiccional, sin embargo encuentra aplicación por analogía en el caso concreto en función de la obligación marcada por el artículo 1.º primer Constitucional el cual enmarca que todas las autoridades en ejercicio de sus funciones deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y al ser el interés superior del menor un derecho humano reconocido internacionalmente es que es dable la aplicación del presente criterio.

[31]. 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013. Tomo 1; Pág. 401

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS.

Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos.

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.

Amparo directo en revisión 2539/2010. 26 de enero de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Arturo Bárcena Zubieta.

Amparo en revisión 66/2011. 7 de diciembre de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien se reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FEDERACIÓN
JUDICIAL EN MATERIA
DEL CUARTO CIRCUITO
SAN ANTONIO, NUEVO LEÓN

Amparo directo 10/2011. 22 de febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2076/2012. 19 de septiembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alejandro García Núñez.

Tesis de jurisprudencia 30/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de febrero de dos mil trece.

Solicitando de Usía que al momento de resolver sea tomado en cuenta que en el presente asunto están en juego los intereses de un menor de edad, a fin de que se brinde la protección más amplia conforme a derecho proceda.

SEGUNDO: El acto reclamado consistente en la Resolución de fecha 20 (veinte) de Mayo del año emitida con motivo del Procedimiento Administrativo instruido por la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León en contra del [REDACTED] Monterrey y [REDACTED], generado a raíz de la denuncia y/o queja presentada por el suscrito ante la Autoridad Responsable es transgresora de los Derechos Humanos de Legalidad y Seguridad Jurídica establecidos por nuestros numerales 14 y 16 de nuestra Carta Magna así como el diverso numeral 17 de la Constitución el cual me permito citar en lo que interesa a continuación:

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

De lo anteriormente transcrito es de advertirse que el numeral 17 de la Constitución Política Federal enmarca el Derecho Fundamental a la Impartición de justicia pronta y completa, los cuales pueden definirse de la siguiente manera:

- **De justicia pronta**, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes;
- **De justicia completa**, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado.

Así bien es de colegirse que el numeral Constitucional invocado precisamente salvaguarda el Derecho a una impartición de Justicia Rápida y Completa, sirviendo de apoyo a lo anterior, lo establecido por nuestra Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

[3]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Octubre de 2007; Pág. 209

ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL C
ADMINISTRATIVO
MONTERREY

75

LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.

La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garantizan la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.

SEGUNDA SALA

Amparo directo en revisión 980/2001. Enlaces Radiotónicos, S.A. de C.V. 10 de marzo de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Ormaña Ramírez.

Amparo directo en revisión 821/2003. Sergio Mendoza Espinoza. 27 de junio de 2003. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Ormaña Ramírez.

Amparo en revisión 780/2006. Eleazar Los Loza. 2 de junio de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguirre Chávez Nava.

Amparo directo en revisión 1059/2006. Gilberto García Chevarría. 4 de agosto de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro.

Amparo en revisión 522/2007. Gustavo Achach Abud. 19 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Vñías.

Tesis de jurisprudencia 192/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de octubre de dos mil siete.

Ahora bien en el caso concreto es de llamar la atención que la Responsable de manera por demás sorprendente no emite pronunciamiento alguno respecto a la irregularidades con las cuales se venía desempeñando la C. [REDACTED] quien como se expuso en el apartado de antecedentes, es la madre de [REDACTED] quien es el agresor de mi hijo, y que al momento de que acontecieron los hechos denunciados por el suscrito ante la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, ella ostentaba el cargo de servidora pública ante dicha dependencia gubernamental y que no obstante de dicha situación la referida señora [REDACTED] se beneficiaba por el puesto que ejercía con dobles sueldos, bonos, compensaciones y sobre todo con becas escolares que se otorgaban por la institución educativa American School Foundation of Monterrey A.C., lo que es a toda luces ilegal, dado que es notoriamente cierto que la citada [REDACTED] en uso de sus atribuciones como ex coordinadora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación estatal obtuvo para su beneficio becas para que sus hijos estudiaran en el Colegio Privado en cita, situación que fue puesta del conocimiento de las Autoridades

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE LA FEDERACIÓN
DELEGADO EN MATERIA
EL CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

Escolares en su momento, sin embargo dichas autoridades en una actitud totalmente pasiva y omisiva, no dieron seguimiento alguna a dicho planteamiento esbozado por el suscrito lo que da como resultado que no se haya privilegiado el Derecho Fundamental del acceso a una justicia completa.

En el mismo contexto es de señalarse que la Responsable al momento de emitir la ilegal resolución que por esta acción constitucional se combate, de manera por demás simplista y evasiva, decreta que no cuenta con las facultades para imponer sanción alguna a la citada [REDACTED] proceder en su contra, situación que se considera por demás absurda, dado que es de explorado derechos que por una parte el patrimonio del estado, el gasto público y su ejercicio es de interés público, es decir es del intereses de toda la ciudadanía el saber cómo nuestros funcionarios gastan los dineros que se recaudan con el pago de impuestos, y al ser la ciudadanía, los que aportamos los ingresos que se van a ejercer, es que tenemos la legitimación para saber y denunciar algún mal manejo en el ejercicio de dicho gasto público, ahora bien por otra parte es obligación de toda autoridad el respeto a los derechos fundamentales de las personas, tal y como lo es el acceso a una justicia completa, sin que escape el hecho de que cualquier autoridad a la que se le haga conocimiento de alguna mala práctica o de algún hecho considerado por la ley como ilícito debe dar seguimiento oportuno y en su caso poner del conocimiento a la autoridad competente de tales hechos.

Ahora bien trayendo lo anterior y traduciéndolo al caso concreto no es válida, es ilegal la resolución de la responsable al decretar que la misma carece de atribuciones y facultades para sancionar, lo cual no es verdad dado que como máxima autoridad educativa y toda vez que tuvo a la multitudada [REDACTED] como servidora pública de dicha Secretaría es claro que la Responsable tiene atribuciones para sancionar las prácticas irregulares que durante la gestión como servidora pública de la C. HERRERA GARZA se hubiesen dado, sin embargo y al margen de lo anterior, también era obligación de la Responsable el poner del conocimiento de las autoridades competentes del desvío de recursos y/o aprovechamientos ilícitos con los que se beneficiaba LORENZA HERRERA GARZA a costa del gasto público, por lo tanto se considera que la Resolución emitida por la Autoridad Responsable violenta en perjuicio del suscrito los derechos fundamentales de una Justicia Completa, así como los Derechos de Legalidad y Certeza Jurídica.

TERCERO: El acto reclamado consistente la resolución de fecha 20 (veinte) de Mayo del año en curso, viola los derechos fundamentales del suscrito en los términos de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 Constitucionales y que en lo concerniente establecen:

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 14.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo 16.

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

La Resolución combatida la cual ilegalmente se decreta por la Responsable, transgrede los derechos fundamentales del suscrito ya que dicho acto de autoridad carece de toda racionalización, lo cual constituye un acto procesal indebido, pues adolecen de toda causa o razón que apoye tal determinación judicial misma que a

PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
CENTRAL



76

POI OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

su vez carece de la formalidad que establece la propia ley, y es claro que resulta ilegal tal resolución que se combate, porque en esta no explica jurídicamente la razón de tal determinación, dado que la Responsable que emite el auto en cuestión, indebidamente, ni funda ni motiva y por ende ni es congruente la resolución combatida, transgrediendo en un perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, como consecuencia de la omisión del cumplimiento de los requisitos de fundamentación, motivación y congruencia consustanciales de toda resolución.

Me permito citar el siguiente criterio emitido por nuestros más altos tribunales en el cual queda soportado lo anteriormente expuesto:

Novena Época

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: VI, Agosto de 1997

Tesis: XIV.2o. J/12

Página: 538

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO.

Al establecer el artículo 16 de nuestra Carta Magna que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, no alude únicamente a las resoluciones definitivas o que pongan fin a un procedimiento, sino que se refiere, en sentido amplio, a cualquier acto de autoridad en ejercicio de sus funciones, como sería, por ejemplo, la simple contestación recalcada a cualquier solicitud de otorgamiento, a la cual la ley no exige de cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación contenidos en tal precepto constitucional.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 155/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Roque C. Rodríguez Reyes). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre.

Secretario: Luis Manuel Vera Sosa.

Amparo en revisión 158/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Henry de J. Ortégón Aguilar). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Gonzalo Eolo Durán Molina.

Amparo en revisión 161/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Cecilio Chumba y Pérez). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Luis Armando Cortés Escalante.

Amparo en revisión 164/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Rubén A. Arcila Castellanos). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Gonzalo Eolo Durán Molina.

Amparo en revisión 168/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Julio C. Caballero Montero). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Luis Manuel Vera Sosa.

CUARTO: El acto señalado como reclamado viola el el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de nuestro país, sin que se siga un juicio ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho y atento a que se está molestando en su persona sin que medie mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Se hacen las afirmaciones que anteceden atento a que como es de verse, las autoridades responsables procedieron a resolver diversas situaciones que fueron planteadas por el ahora quejoso, quien junto con mi menor hijo tengo derecho de que se aplique la ley al caso concreto y a ser oído y vencido, pero

UNIDOS MEXICANOS
DE LA FEDERACIÓN
COLEGIADO EN MATERIA
DEL CUARTO CIRCUITO
REY, NUEVO LEÓN

contrario a derecho, se procedió a resolver respecto de las situaciones de hecho planteadas sin que se otorgará el derecho a ofrecer y desahogar pruebas y a formular alegatos.

QUINTO: Por otra parte, el acto reclamado es violatorio a los derechos humanos de mi menor hijo y del ahora amparista, atento a que en el mismo se deja de atender diversas cuestiones que fueron planteadas como queja en contra de los ahora terceros perjudicados, en el sentido de que las becas se otorgaran conforme a los reglamentos aplicables y ello contraviene el contenido del REGLAMENTO DE OTORGAMIENTO DE BECAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES PARA LOS TIPOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y ESPECIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 24 de septiembre de 2003, en el que se señalan una serie de requisitos que no fueron apreciados por las responsables para que se otorguen las becas y una vigilancia y supervisión que nunca se ejerció.

Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted **C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN**, atentamente pido:

ÚNICO: Tenerme por presentado demanda de garantías, admita a trámite el presente juicio de amparo, fijándose fecha para la respectiva audiencia constitucional, en la que se deberá resolver sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables y se me restituya al suscrito al estado que guardaba su situación antes de la violación de garantías. Asimismo me tenga por autorizando a las personas señaladas con antelación en los términos del artículos 13 de la Nueva Ley de Amparo.

PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO
Monterrey, Nuevo León, a 24 de Junio 2013.



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL CC
ADMINISTRATIVA DE
MONTERREY

DÉCIMO

TERCERO.

Sistematización de los conceptos de violación.

En el primer concepto de violación aduce el impetrante del amparo, que actúa en representación de un menor, y en atención al principio del interés superior del menor el cual se encuentra consagrado en el artículo 4º, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos numerales 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y los artículos 3, 4, 6, 7 de la Ley



77

POL. JANCIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Aduce el impetrante del amparo, que la autoridad responsable al momento de darle trámite a su queja presentada por los actos de maltrato psicológico, físico y verbal, a los que fue objeto el menor en las instalaciones del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] por parte del alumnado de esa institución, no se ve el principio jurídico de tutela en mención.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FEDERACIÓN
EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

Precisó que la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, en ningún momento protegió, respetó, promovió ni garantizó el interés superior de su menor hijo, ya que su hijo fue víctima de bullying, el cual casi lo lleva a la muerte, y nunca se llevó a cabo una investigación formal, ni se sancionó a los responsables, ni mucho menos al Colegio, la responsable de una manera por demás simplista y fuera de todo marco legal decretó que no hay responsabilidad alguna o sanción a imponer al Colegio educativo.

Agregó que no se valoraron los diversos aspectos esenciales de la queja y/o denuncia en mención, tales como que no se desahogó por parte de

la autoridad ninguna investigación formal para acreditar los hechos denunciados, en atención a que es obligación de la autoridad educativa llegar a la verdad de los hechos.

Estableció que la autoridad responsable dictaminó que no hay sanción que imponer al Colegio, toda vez que existe un acuerdo privado convalidado por el quejoso, en donde se tuvo por satisfecho y renunciando a cualquier acción legal, situación que es totalmente falsa, dado que sí acudió a la junta o procedimiento conciliatorio, sin embargo, en dicha junta lo único que accedió fue al reembolso de los \$10,000.00 (diez mil dólares) por concepto de aportaciones escolares que erogó.

Señaló que ello no implica que renunciara a su acción legal, ni que se diera por satisfecho y desistiéndose de la queja, por lo que no es dable el argumento planteado por la responsable. Que es evidente que la responsable pasó por alto la discriminación y la exclusión hecha por parte de los directivos del Colegio Particular, en perjuicio de su menor hijo.

Añadió, que está comprobado en autos que integran la queja en cita, que dicho Colegio le negó el ingreso al período escolar de 2009 – 2010 (dos



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL C
ADMINISTRATIVO
MONTERREY



78

PC. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

mil nueve a dos mil diez), es decir, de manera unilateral, arbitraria y fuera de todo marco normativo, la Institución Educativa sancionó con no volver aceptar a su hijo víctima de bullying, y permitió la inscripción y acceso a los victimarios de su menor hijo, situación que se dejó de estudiar y que pasó por alto la responsable.

Por lo que considera que la resolución es contraria a derecho, dado que omite resolver sobre todos los puntos vertidos por el quejoso, así también omite allegarse de los elementos de prueba suficientes para esclarecer los hechos y con esto proteger la integridad y los intereses de su menor hijo, dado que era su obligación constitucional.



DERACIÓN
LEG. EN MATERIA
EL CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

En el segundo de los conceptos de violación, aduce el impetrante del amparo, que la resolución reclamada transgrede los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica establecidos en los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, así como el artículo 17 Constitucional.

Agregó que en el caso concreto, la responsable no emitió pronunciamiento alguno respecto a las irregularidades que venía desempeñando [REDACTED], quien es madre de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], señalado como el

agresor de su hijo, y que al momento de los hechos ella ostentaba el cargo de servidora pública ante la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León

Precisó que la referida Garza, se beneficiaba del puesto que ejercía, como ex coordinadora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, ya que obtuvo para su beneficio becas para sus hijos, sin embargo, las autoridades no dieron seguimiento a dicho planteamiento.

Señaló el quejoso, que la responsable decreta que no cuenta con facultades para sancionar a la citada, lo cual no es verdad, dado que la responsable tiene atribuciones para sancionar las prácticas irregulares durante su gestión como servidora pública de, y al margen de lo anterior, también era obligación de la responsable el poner en conocimiento de las autoridades competentes el desvió de recursos.

En el tercer concepto de violación, aduce el peticionario del amparo que la resolución impugnada carece de toda racionalización, lo cual constituye un acto procesal indebido, pues adolece de toda causa o razón que apoye tal determinación, toda vez que carece de la formalidad que establece la ley,



PODER JUDICIAL DE
PRIMER TRIBUNAL COLE
ADMINISTRATIVA DEL E
MONTERREY, N



79

dado que la responsable emite el auto en cuestión indebidamente, ni funda ni motiva, y por ende, no es congruente la resolución combatida.

En el cuarto concepto de violación aduce el quejoso, que se está molestando en su persona sin que se medie mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

En el quinto concepto de violación aduce el impetrante del amparo, que el acto reclamado es violatorio de los derechos humanos de su menor hijo y del ahora amparista, ya que se dejó de atender diversas cuestiones que fueron planteadas, como la queja en contra de los ahora terceros perjudicados, en el sentido de que las becas se otorgaron conforme a los reglamentos aplicables y ello contraviene el contenido del Reglamento de Otorgamiento de Becas en Instituciones Educativas Particulares para los Tipos de Educación Básica y Especial en el Estado de Nuevo León.

Los argumentos anteriores se analizan conjuntamente en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo.

Los conceptos de violación son fundados y suficientes para conceder el amparo y

FEDERACION
EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEON

protección de la Justicia Federal, al ser suplidos en sus deficiencias en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo.

En razón de que, la demanda de amparo fue promovida por [REDACTED], por sus propios derechos y en representación de su menor hijo [REDACTED]

Ahora, de la copia certificada del acta de nacimiento del menor [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], que obra a foja 16 de juicio de amparo, se advierte que éste ocurrió el veinticinco de octubre de dos mil trece, por tanto, en el momento en que se promovió este juicio de amparo, el menor contaba con quince años ocho meses de edad, aproximadamente, además en el tiempo de la queja ante la responsable el menor contaba con doce años de edad aproximadamente.

La señalada copia certificada del acta de nacimiento, cuentan con pleno valor probatorio, atento a lo previsto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del numeral 2 de la Ley de Amparo.

En esas condiciones, conforme con lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, quinto



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTERRE



80

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso numeral 79 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se considera que en caso necesario, se debe suplir la deficiencia de la queja respecto de los conceptos de violación, en favor del menor de edad de que se trate.

Afirmación que se funda en que la suplencia de la queja, es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales, la cual debe ser total cuando se encuentran en litigio los derechos de menores; es decir, no se limita al carácter del promovente, ni a una sola instancia, ni a los conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia, en caso de que se conceda el amparo.



FEDERACIÓN
JUDICIAL DE LA
MATERIA
DEL CUARTO CIRCUITO
Y, NUEVO LEÓN

Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 191/200, con número de registro 5175053, que al respecto sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 106/2004-PS, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Civil, página 167, que dice:

"MENORES DE EDAD O INCAPACES.
"PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU
"AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS
"DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL
"PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya
"observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales;
"suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola
"instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la
"misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías,
"hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse
"el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de
"por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera
"jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea
"determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en
"controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de
"amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la
"circunstancia de que el interés jurídico en las controversias
"susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e
"incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la
"sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede
"definida para asegurar la protección del interés superior del menor
"de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la
"teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los
"criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así
"como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado
"mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de
"menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la
"suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la
"demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo
"omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y
"de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL DE
ADMINISTRATIVA DE
MONTERREY.



81

"actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el
"bienestar del menor de edad o del incapaz."

Para justificar la decisión judicial resulta
conveniente transcribir los siguientes preceptos
normativos.

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

"Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos
"todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
"esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
"Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
"protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
"en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

"Las normas relativas a los derechos humanos se
"interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los
"tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo
"tiempo a las personas la protección más amplia.

"(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus
"competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
"proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
"con los principios de universalidad, interdependencia,
"indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
"deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
"a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

"(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE
"2001)

"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos
"Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio

"nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección
"de las leyes.

"(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

"Queda prohibida toda discriminación motivada
"por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
"discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
"la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado
"civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
"tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades
"de las personas."

"Artículo 3º.- Todo individuo tiene derecho a recibir
"educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y
"Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y
"media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria
"conforman la educación básica; ésta y la media superior serán
"obligatorias.

"La educación que imparta el Estado tenderá a
"desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y
"fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos
"humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la
"independencia y en la justicia.

"El Estado garantizará la calidad en la educación
"obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la
"organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de
"los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de
"aprendizaje de los educandos.

"[...]

"II. El criterio que orientará a esa educación se basará
"en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia
"y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

"[...]



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL CO
ADMINISTRATIVO DE
MONTERREY.



82

POD: JEFECIA DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

"(REFORMADO, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE 2013)

"c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y..."

El artículo 4º, párrafos ocho, nueve y diez de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:

"Artículo 4º.

"[...]

"En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

"Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

"El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

"[...]"

La Convención sobre los Derechos del Niño en los artículos 3.1, 28. 1 a), b), y 37, a), señala:

"Artículo 3.-

"1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social,



FEDERACIÓN
JEFECIA EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

A

"los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
"legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el
"interés superior del niño.

"2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al
"niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
"teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u
"otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán
"todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas."

"Artículo 28.-

"1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño
"a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en
"condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en
"particular:

"a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y
"gratuita para todos;

"b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de
"la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional,
"hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y
"adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la
"enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de
"necesidad;"

"Artículo 37.-

"Los Estados Partes velarán porque:

"a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros
"tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la
"pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación
"por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;"

La Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en los
artículos 3, 4, 21, 32, A y B, establecen:



83

POD. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

"Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

"Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:

"A. El del interés superior de la infancia.

"B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.

"C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.

"D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.

"E. El de tener una vida libre de violencia.

"F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad.

"G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales."

"Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

"Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.



AL DE LA FEDERACIÓN
EL COLEGIADO EN MATERIA
A DEL CUARTO CIRCUITO
REY, NUEVO LEÓN

"La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este
"principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales
"reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
"Mexicanos."

"**Artículo 21.** Niñas, niños y adolescentes tienen el
"derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan
"afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a
"la educación en los términos establecidos en el artículo 3o.
"constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar
"estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean
"afectados por:

"A. El descuido, la negligencia, el abandono, el abuso
"emocional, físico y sexual.

"B. La explotación, el uso de drogas y enervantes, el
"secuestro y la trata.

"C. Conflictos armados, desastres naturales,
"situaciones de refugio o desplazamiento, y acciones de reclutamiento
"para que participen en conflictos armados."

"**Artículo 32.** Niñas, niños y adolescentes tienen
"derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para
"la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los
"términos del artículo 3o. de la Constitución. Las leyes promoverán
"las medidas necesarias para que:

"A. Se les proporcione la atención educativa que por
"su edad, madurez y circunstancias especiales requirieran para su
"pleno desarrollo.

"B. Se evite la discriminación de las niñas y las
"adolescentes en materia de oportunidades educativas. Se establecerán
"los mecanismos que se requieran para contrarrestar las razones
"culturales, económicas o de cualquier otra índole, que propicien
"dicha discriminación."

Ley General de Educación

SECRETARÍA DE JUSTICIA
Poder Judicial
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo
Monterrey, N.L.



"Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado,
"sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o
"con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de
"los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la
"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
"siguientes:

"[...]

"VI.- Promover el valor de la justicia, de la
"observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta,
"propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en
"cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de
"los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

"[...]

"XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a
"fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de
"dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de
"comprender el significado del hecho o para resistirlo.

"[...]"

"Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación
"que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como
"toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media
"superior, la normal y demás para la formación de maestros de
"educación básica que los particulares impartan- se basará en los
"resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus
"causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la
"formación de estereotipos, la discriminación y la violencia
"especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo
"implementar políticas públicas de Estado orientadas a la
"transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

"[...]

"III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana,
"tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el

LA FEDERACIÓN
JUDICIAL EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

"educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la
"integridad de la familia, la convicción del interés general de la
"sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales
"de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres,
"evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o
"de individuos, y

"[...]"

"Artículo 30.- Las instituciones educativas
"establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y
"por los particulares con autorización o con reconocimiento de
"validez oficial de estudios, así como las Autoridades Escolares,
"otorgarán a las autoridades educativas y al Instituto todas las
"facilidades y colaboración para las evaluaciones a que esta sección se
"refiere.

"Para ello, proporcionarán oportunamente toda la
"información que se les requiera; tomarán las medidas que permitan la
"colaboración efectiva de alumnos, maestros, directivos y demás
"participantes en los procesos educativos; facilitarán que el Instituto
"Nacional para la Evaluación de la Educación, las autoridades
"educativas, los evaluadores certificados y los aplicadores autorizados
"para tal efecto, realicen las actividades que les corresponden
"conforme a la normativa aplicable.

"Sin menoscabo de lo señalado en los párrafos
"anteriores, las instituciones a que se refiere este artículo están
"obligadas a generar indicadores sobre su avance en la aplicación de
"métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación
"y de violencia, con la finalidad de que sean sujetas a evaluación sobre
"la materia. Tales indicadores serán de dominio público y se
"difundirán por los medios disponibles."

"Artículo 42.- En la impartición de educación para
"menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la
"protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física,



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTERREY



85

"psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la
"aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.

"Se brindarán cursos a los docentes y al personal que
"labora en los planteles de educación, sobre los derechos de los
"educandos y la obligación que tienen al estar encargados de su
"custodia, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio,
"daño, agresión, abuso, trata o explotación.

"En caso de que las y los educadores así como las
"autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún
"delito en agravio de las y los educandos, lo harán del conocimiento
"inmediato de la autoridad correspondiente."

"Artículo 57.- Los particulares que impartan
"educación con autorización o ~~con~~ reconocimiento de validez oficial
"de estudios deberán:

"(REFORMADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE
"2013)

"I.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la
"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la
"presente Ley y demás disposiciones aplicables;

"[...]"

"Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan
"servicios educativos:

"I.- Incumplir cualesquiera de las obligaciones
"previstas en el artículo 57;

"[...]"

"XII.- Contravenir las disposiciones contempladas en
"el artículo 7o., en el artículo 21, en el tercer párrafo del artículo 42
"por lo que corresponde a las autoridades educativas y en el segundo
"párrafo del artículo 56;

"[...]"

"Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el
"artículo anterior se sancionarán con:



LA FEDERACIÓN
EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

"I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el
"salario mínimo general diario vigente en el área geográfica y en la
"fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán
"duplicarse en caso de reincidencia, o

"[...]"

Ley de Educación del Estado.

"**Artículo 109.** Los particulares que impartan
"educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial
"de estudios deberán:

"I.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la
"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la
"Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,
"en la Ley General, en la presente Ley y en las demás disposiciones
"aplicables;

" [...]"

"**Artículo 120.** Son infracciones de quienes prestan
"servicios educativos:

"I.- Incumplir cualesquiera de las obligaciones
"previstas en el Artículo 109 de esta Ley;

"[...]"

"**Artículo 121.** Las infracciones a la presente Ley,
"cometidas por particulares que presten un servicio educativo serán
"sancionadas por la autoridad educativa competente en la forma
"siguiente:

"I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el
"salario mínimo general vigente en la región del Estado donde se
"encuentra ubicada la institución educativa y en la fecha en la que se
"cometa la infracción;..."

"**Artículo 124.** Las sanciones del orden económico
"que sean impuestas conforme a esta sección, adquirirán la naturaleza
"de crédito fiscal, la autoridad fiscal estatal será la encargada de
"hacerlas efectivas conforme a la normatividad aplicable."

PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTERRE



86

POL. J. C. DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

Ley General de Víctimas

"Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

"En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona.

"La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

"La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante."

"Artículo 2. El objeto de esta Ley es:

"I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE LA FEDERACIÓN
LEGADO EN MATERIA
EL CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

"II. Establecer y coordinar las acciones y medidas
"necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el
"ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como
"implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el
"ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus
"obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación
"integral;

"III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de
"las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del
"debido proceso;

"IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos
"a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los
"procedimientos relacionados con las víctimas;

"V. Establecer las sanciones respecto al
"incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus
"disposiciones."

"**Artículo 4.** Se denominarán víctimas directas
"aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo
"económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta
"en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como
"consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus
"derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados
"Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

"Son víctimas indirectas los familiares o aquellas
"personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación
"inmediata con ella.

"Son víctimas potenciales las personas físicas cuya
"integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la
"víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la
"comisión de un delito.

"La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación
"del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL CO
ADMINISTRATIVO DEL
MONTERREY.



87

POC SOCIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

"en la presente Ley, con independencia de que se identifique,
"aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima
"participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

"Son víctimas los grupos, comunidades u
"organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos,
"intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión
"de un delito o la violación de derechos."

"Artículo 5. Los mecanismos, medidas y
"procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados,
"implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

"Dignidad.- La dignidad humana es un valor,
"principio y derecho fundamental base y condición de todos los
"demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto
"de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte
"del Estado o de los particulares.

"En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas
"las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a
"respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su
"actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están
"obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo
"existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo
"esencial de sus derechos.

"(REFORMADO, D.O.F. 3 DE MAYO DE 2013)

"En cualquier caso, toda norma, institución o acto
"que se desprenda de la presente Ley serán interpretados de
"conformidad con los derechos humanos reconocidos por la
"Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado
"Mexicano sea Parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la
"persona."

De los preceptos anteriores se advierte
que en el artículo 1º Constitucional, el Constituyente
Permanente incluyó el principio de interpretación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LA FEDERACIÓN
EC. EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

conforme, de acuerdo con el cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Además de que, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, el artículo 3º Constitucional, establece el derecho que tiene todo individuo a recibir educación, el Estado que imparta educación, tenderá al desarrollo armónico, de todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos, y la conciencia a la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Del contenido del artículo 4o. constitucional, se puede advertir que el interés superior del niño es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los

1974

PODER JUDICI
PRIMER TRIBUNA
ADMINISTRATIV.
MONTERE



88

PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

derechos de los menores previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

La Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en cualquier medida que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, los órganos legislativos deben tener en cuenta de forma primordial el interés superior del niño.

AL DE LA FEDERACIÓN
COLEGIO EN MATERIA
DEL CUARTO CIRCUITO
EY, NUEVO LEÓN

Los artículos 28 y 37 de la citada convención recogen dicho principio, al disponer que los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho.

Que los Estados Partes velarán porque ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece

en el artículo 3 que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Y como principios rectores se establecen:

A. El del interés superior de la infancia.

B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.

C. A tener una vida libre de violencia.

El artículo 4 de la Legislación en mención, señala que de conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

El artículo 21 de la Ley en consulta establece que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional.



PODER JUDICIAL DE LOS
PRIMER TRIBUNAL COLO
ADMINISTRATIVA DEL CO
MONTERREY, NUE



89

Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas, y se les protegerá cuando se vean afectados por: El descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual.

El artículo 32 de la Legislación de referencia, señala las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución.

Las leyes promoverán las medidas necesarias para que:

A. Se les proporcione la atención educativa que por su edad, madurez y circunstancias especiales requirieran para su pleno desarrollo.

B. Se evite la discriminación de las niñas y las adolescentes en materia de oportunidades educativas. Se establecerán los mecanismos que se requieran para contrarrestar las razones culturales, económicas o de cualquier otra índole, que propicien dicha discriminación.

El artículo 7, fracción VI, de la Ley General de la Educación, establece que la educación que imparta el Estado, sus organismos

FEDERACIÓN
DO EN MATERIA
TO CIRCUITO
O LEON

descentralizados y los particulares con autorización, tendrán los fines establecidos por el artículo 3º, párrafo segundo, Constitucional, y a promover el valor a la justicia, la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de manifestaciones, así como el respeto a los derechos humanos.

Las instituciones educativas realizarán acciones educativas y preventivas.

El diverso 30 y 42 de la Ley General de Educación, disponen que las instituciones están obligadas a generar indicadores sobre el avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia.

En la impartición de educación para menores de edad se tomarán las medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad.

De igual modo los numerales 75 y 76 establecen las infracciones a quienes presten servicios educativos, por incumplir con lo dispuesto en el artículo 3º Constitucional.



PODER JUDICIAL DE
PRIMER TRIBUNAL COLE
ADMINISTRATIVA DEL C
MONTERREY, NL



90

La Ley de Educación del Estado, en el numeral 109 dispone que los particulares que impartan educación deberán cumplir con lo dispuesto por el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y las demás disposiciones aplicables, y en los preceptos 120, 121 y 124, se establecen las infracciones por incumplir con la Ley.

La Ley General de Víctimas, que tiene por objeto velar por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral, siendo el objeto de dicha ley reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a derechos humanos.

En el entendido que se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

Los preceptos anteriores ponen de relieve el marco legal de protección para los derechos de las

A FEDERACION
ADO EN MATERIA
ARTO CIRCUITO
VO LEON

niñas, niños y adolescentes, en donde en el ámbito interno, se ha entendido que el interés superior del niño es un principio que está implícito en la regulación constitucional y en la Ley de los Derechos de los niños.

Este principio es reconocido expresamente en la Constitución Federal en el artículo 4º Constitucional, en La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en el ámbito internacional en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Sobre el tópico en cuestión la expresión "interés superior del niño" implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.

Así los ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), con número de registro 159897, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, página 334, dice:

"INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de "la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la



a1



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

"Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y
 "publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de
 "1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de
 "Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas
 "que tomen relacionadas con los menores, deben atender
 "primordialmente al interés superior del niño; concepto que
 "interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya
 "competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de
 "diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés
 "superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio
 "pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios
 "rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en
 "todos los órdenes relativos a la vida del niño."



LA FEDERACIÓN
 JALISCO EN MATERIA
 JUICIO CIRCUITO
 EVO LEON

Asimismo, tratándose de los
 procedimientos que directa o indirectamente
 trascienden a los menores y a fin de velar por su
 interés superior, previsto en la Constitución Política
 de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención
 sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la
 Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
 Adolescentes, el juez y las autoridades están facultadas
 para recabar y desahogar de oficio las pruebas
 necesarias para preservar dicho interés, practicando las
 diligencias que considere oportunas y conducentes
 para el conocimiento de la verdad respecto de los
 derechos controvertidos.

Lo anterior tiene su apoyo en la
 jurisprudencia 1a./J. 30/2013 (10a.), con número de

registro 2003069, que al respecto sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Materia Constitucional, página 401, que dice:

"INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos."

En consecuencia, en toda contienda legal en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse atendiendo a un principio básico: "el interés superior del niño" derivado de la adopción del Estado Mexicano, de la referida Convención Internacional y de la cual, surge la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

PODER JUD CI
PRIMER TRIBUNA
ADMINISTRATIVA
MONTERREY



98

La Ley de referencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de mayo de dos mil, con el fin de desarrollar los lineamientos que derivan del artículo 4o. constitucional, y así atender la necesidad de establecer principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habría de proteger que niñas, niños y adolescentes, ejercieran sus garantías y sus derechos, estableciendo para tal efecto, como principio central el del "interés superior de la infancia".



DE LA FEDERACIÓN
COLEGIO EN MATERIA
EL CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

Conforme a lo dispuesto en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, implica que las políticas, las acciones y la toma de decisiones relacionadas con ese período de la vida, tienen que darse de tal manera que en primer término y antes de cualquier otra consideración, se busque el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, señalándose en esa Convención que las instituciones de bienestar social, tanto públicas como privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, deberán responder viéndolo como prioritario, a ese interés superior del menor, de modo y manera tales que quien pretenda fundamentar una decisión o medida en el interés superior del niño, deberá regirse por la

interpretación que se desprende del conjunto de las disposiciones tanto del derecho interno como en el orden internacional.

En este caso particular, es deber del Estado salvaguardar los derechos del menor que viene representado por su progenitor, y que se respete el derecho fundamental del menor que es la dignidad, contenido en el artículo 1º Constitucional, que establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Velar por el interés superior del niño como es el derecho a la educación, tutelado por el artículo 4º de la Constitución General de la República.

En la especie cabe recordar que los actos reclamados son la resolución de veinte de mayo de dos mil trece, emitida por el Secretario de Educación del Estado, al resolver el procedimiento administrativo instruido por la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, en contra del



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL CI
ADMINISTRATIVA DE
MONTERREY



93

Amparo en Revisión

PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

[REDACTED]

[REDACTED] generado a raíz de la queja y/ o denuncia presentada por [REDACTED], en representación de su menor hijo [REDACTED] [REDACTED] en donde se determinó que la institución educativa no incurrió en las infracciones contenidas en la Ley General de Educación y Ley de Educación del Estado.

La resolución emitida por la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, es contraria a derecho porque transgredió en perjuicio del menor [REDACTED], sus derechos fundamentales a la dignidad humana a la educación libre de toda violencia y a la no discriminación.

Esto es así, porque contrario a lo que resolvió la autoridad responsable Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, el menor fue objeto de violación a su derecho fundamental de la dignidad humana, a través de acoso escolar pues se violó su derecho a la no discriminación y a su dignidad, conducta que debió de haber sido sancionada por las autoridades responsables.

Para arribar a dicha conclusión, es importante destacar que la violencia escolar se ha incrementado en los últimos años, al grado de que se



DE LA FEDERACIÓN
LEGADO EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

tiene como un problema de política pública, lo que ha provocado que diversas autoridades tanto del ámbito federal como estatal hayan implementado diversas acciones y programas con el fin de identificar, prevenir y atender aquellas conductas relativas a la violencia escolar.

Así que, la conducta de maltrato escolar, acoso, intimidación u hostigamiento entre estudiantes, misma que también puede definirse como una conducta de persecución física o psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques.

Es una conducta que se presenta entre pares, es decir, entre niños o jóvenes de edades semejantes que tiene consecuencias serias para la víctima y para el agresor, y que siempre provoca un daño emocional, que puede empezar con sintomatologías físicas, en las cuales se percibe como la angustia, se transforma en dolores de cabeza, de estómago, insomnio, ansiedad, etcétera, síntomas por los que la víctima de la agresión intenta alejarse cada vez más de la escuela e inclusive a veces en pensar en la muerte.

El hostigamiento puede empezar de manera sutil, con insultos y burlas, e ir creciendo hasta

ESTADO
DE NAYARIT

PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTERREY



at

convertirse en violencia física y persecución, quienes hostigan o intimidan son por lo general grupo de jóvenes que abusan de los demás, se burlan de ellos, les ponen apodos, los golpean, insultan o amenazan, les quitan sus cosas. Sin embargo, es importante señalar que las agresiones se pueden dar entre alumnos, de maestros hacia alumnos, de estudiantes a profesores y de padres de familia a maestros y alumnos.

De acuerdo con lo anterior, este tipo de discriminación tiene diversos tipos, puede ser de exclusión social, cuando se ignora, se aísla y se excluye al otro; es verbal cuando se insulta, amenaza, menosprecia, realizan acciones de exclusión, discriminación, etcétera; psicológico, cuando existe una persecución, intimidación, tiranía, chantaje, manipulación y amenazas al otro; físico cuando hay golpes, empujones o maltratos físicos.

En cuanto al comportamiento de la víctima en caso de discriminación, comúnmente se presentan las siguientes características: Son frecuentemente niños tímidos y poco sociables. Ante un acoso constante, lógicamente se sienten angustiados, tensos y con mucho miedo a tal grado

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE LA FEDERACIÓN
COLEGIADO EN MATERIA
EL CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

que en algunos casos puede llevarlos a consecuencias devastadoras.

En algunos casos, el niño o adolescente se muestra agresivo con sus padres o maestros; comienzan a poner pretextos y diversos argumentos para no asistir a clases, ni participar en actividades de la escuela; se presenta un bajo rendimiento escolar; la víctima comienza a perder bienes materiales sin justificación alguna, o piden más dinero para cubrir chantajes del agresor; en los casos más severos presentan moretones o agresiones evidentes en la cara y el cuerpo.

La exclusión social agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación al niño acosado. El "tú no", es el centro de estas conductas con las que el grupo que acosa segrega socialmente al niño. Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su expresión, impedir su participación en juegos, se produce el vacío social en su entorno.

En el caso particular como ya se adelantó, las responsables de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, incurrieron en una deficiente valoración de pruebas en la queja administrativa que presentó el padre del menor [REDACTED]



PODER JUDICIAL D
PRIMER TRIBUNAL COL
ADMINISTRATIVA DEL
MONTERREY, I



95

[REDACTED], por maltrato psicológico, verbal y físico, por parte de dos alumnos de la Institución Educativa

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED],
[REDACTED] de nombres [REDACTED]

[REDACTED], pues en el sumario existen los siguientes medios de convicción:

1. El acta levantada ante el Director Jurídico de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, el cuatro de noviembre de dos mil nueve, en donde [REDACTED] presentó una queja en contra del [REDACTED]

[REDACTED], Campus [REDACTED]
[REDACTED] de la profesora [REDACTED], quien se desempeña como Consejera Escolar de la Primaria, en donde manifestó que su menor hijo [REDACTED]

[REDACTED], que cursa el 6° grado de primaria, que desde hace treinta días su menor hijo y otros alumnos han sido objeto de acoso escolar conocido como Bullying, el cual consiste en maltrato psicológico, verbal y físico producido por los compañeros de escuela de forma reiterada en perjuicio de su menor hijo, siendo principalmente el agresor, un alumno de nombre [REDACTED], quien cursa en el mismo plantel el 6° grado,

CIRCUITO
NUEVO LEÓN

aconteciendo los hechos durante el recreo, en el período de espera del transporte escolar, en el trayecto del traslado a la casa, y a las afueras de la escuela, situación que en reiteradas ocasiones había hecho del conocimiento de la escuela y de las maestras, sin que hayan atendido y dado solución a su problemática. (foja 63 del cuaderno de pruebas).

2. Escrito de nueve de marzo de dos mil doce, presentado por [REDACTED], ante el Director Jurídico de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, en donde hace del conocimiento que no ha habido respuesta de la queja presentada el cuatro de noviembre de dos mil nueve.

Señaló además al margen de los hechos del acta administrativa, al Titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, se le hicieron saber diversas irregularidades en las que participó [REDACTED] [REDACTED] que son competencia de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, como lo es los sueldos, bonos o compensaciones que recibía, pero en especial lo referente a las becas que se le otorgaban por la Institución educativa.

Informó también que fue impedido por el Director del Colegio particular American Schcol, que se inscribiera su hijo en el período escolar 2010-2011,



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTERRE



96

PODERE JAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

caso contrario a la señora [REDACTED] a pesar de que no existió motivo alguno, sólo su hijo no fue aceptado al período escolar referido fojas, escrito de mérito que obra a fojas de la 162 a 163 del cuaderno de pruebas.

3. Reporte textual enviado a la Subsecretaría de Educación Básica, que comprende el informe solicitado con respecto a la atención psicosocial área de psicología, en donde se menciona la intervención llevada a cabo en la queja presentada [REDACTED], recibido por la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, el doce de julio de dos mil doce, en donde el área de psicología informó:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE LA FEDERACIÓN
LEGADO EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

"Intervención: Jaime Alberto González Martínez quien cursa el 6° grado de primaria, manifiesta resentimiento y tristeza debido a que un compañero del colegio (hijo de la Sra. [REDACTED] ex empleada de la Secretaría de Educación) lo molesta verbalmente de forma directa e indirecta desde el inicio del ciclo escolar. Algunas de las situaciones que menciona el niño donde se siente lastimado son:

"- Refiere que le deja de hablar y lo excluye del grupo.

"- Habla cosas negativas de él con los compañeros, diciendo que es chismoso y que actúa como niña.

"- Menciona que influye en sus compañeros para que no se junten con él.

"- Se burla del joven..."

"...Recomendaciones:

"- Proporcionar apoyo psicológico donde se le "brinden herramientas que le permitan desarrollar habilidades de "afrontamiento.

"- Desarrollar habilidades sociales para manejar la "violencia de tipo psicológica y verbal de que está siendo víctima, ya "que de no ser así su estado de ánimo melancólico podría "deteriorarse..."

Documental que obra a fojas de la 125 a 127 del cuaderno de pruebas.

4. Acta administrativa de dieciocho de septiembre de dos mil doce, en relación con la denuncia presentada por [REDACTED] en contra del [REDACTED], en donde el Director Jurídico de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, previene al colegio para que a través de su personal directivo, atiendan y cumplan cabalmente con las disposiciones de la Ley General de Educación, Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley de Educación del Estado, Ley de Protección de los Derechos de Las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, y Lineamientos Generales para la Convivencia Escolar en las Escuelas de Educación Básica Públicas y Particulares del Estado de Nuevo León, a fin de que atienda y resuelva la denuncia interpuesta por [REDACTED] [REDACTED], en representación de su menor hijo, y

ESTADO DE N. L.

PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTERRE



C7

se implementen las medidas preventivas que sean necesarias para que dejen de presentarse hechos como los que se han denunciado y se implementen los mecanismos para atender a los alumnos que sean víctimas de los mismos, y se le concede el término de cinco días hábiles, para que remita a la autoridad un informe de las acciones correspondientes. (fojas 174 a 186 del cuaderno de pruebas).

5. Escrito de veintiséis de septiembre de dos mil doce, dirigido a la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, por [REDACTED], en su carácter de representante legal de [REDACTED]



RECEBIDO EN MATERIA
DEL CUARTO CIRCUITO
Y, NUEVO LEÓN

[REDACTED] en donde informa que el veinticinco de agosto de dos mil doce, se llegó a un acuerdo satisfactorio con el señor [REDACTED] y su esposa y un finiquito total con la institución, en consecuencia dicha denuncia ha quedado resuelta. (foja 226 y 227 del cuaderno de pruebas).

6. Acta de cinco de octubre de dos mil doce, ante el Director de la Secretaría de Educación Estado de Nuevo León, en donde solicita al Director del Colegio, se sirva remitir en el término de cinco días hábiles, copia certificada de las constancias que acrediten lo expuesto en el escrito de veintiséis de

septiembre de dos mil doce, por el representante legal del colegio e informen las medidas implementadas para prevenir y atender los casos de Bullying en el colegio, acompañando los documentos que amparen su dicho. (foja 240 del cuaderno de pruebas).

7. Escrito de veinticinco de octubre de dos mil doce, presentado por [REDACTED], al Director Jurídico de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, en relación al escrito presentando por el Colegio particular, representado por [REDACTED], reitera que el veinticinco de agosto de dos mil doce, se llegó a un arreglo conciliatorio con el colegio, en el cual se reintegró las aportaciones (separación de un lugar en la institución) de sus dos hijos, pero no es una indemnización es un reembolso de las aportaciones por mal manejo del bullying de la Escuela, con esto se reconoce que se atendió mal el caso de Bullying. (foja 249 del cuaderno de pruebas).

8. Oficio número DJ-1655/2012-2013, de veintinueve de octubre de dos mil doce, por el Director Jurídico de la Secretaría de Educación, dirigido a la Subsecretaría de Educación Básica, en donde previo al análisis de las constancias que integran el expediente que adjunta, emita un dictamen



PODER JUDICIAL DEL
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
DE LO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
MONTERREY, N. L.




98

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

para recomendar la aplicación de sanción correspondiente que en su caso procedan contra la institución. (foja 251 del cuaderno de pruebas).

Para mejor claridad enseguida se reproduce digitalmente el oficio de mérito.

 **Nuevo León Unido**
Gobierno para todos

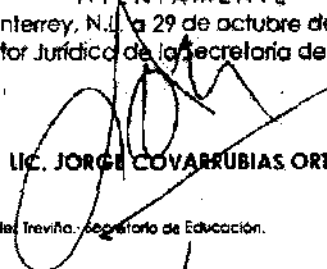
251
Oficio No: DJF1655/2012-2013
Asunto: Denuncia

C. PROFRA. RAMONA IDALIA REYES CANTÚ
Subsecretaria de Educación Básica
Presente.


Par este medio le envío un cordial saludo y a la vez con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 fracciones IV y XXXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, me permito remitirle a Usted fotocopia simple del expediente formado con motivo de la denuncia presentada por el C. Jaime González Pérez, en representación de su menor hijo Jaime Alberto González Martínez en Centro del Colegio American Schop Foundation of Monterrey; lo anterior para que gire las instrucciones que correspondan al personal a su cargo, y atento a lo dispuesto en el artículo 15 fracción XXXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, previo análisis de las constancias que integran el expediente que se adjunta, emita un dictamen para recomendar la aplicación de sanción correspondiente que en su caso proceda en contra de la institución denunciada.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

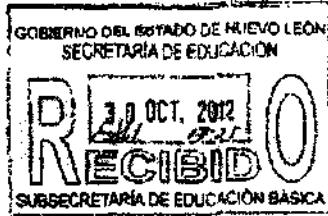
ATENTAMENTE
Monterrey, N.L. a 29 de octubre de 2012.
C. Director Jurídico de la Secretaría de Educación


LIC. JORGE COVARRUBIAS ORTIZ

C.c.p. C. Ing. José Antonio González Treviño, Secretario de Educación.
C.c.p. Archivo.
JCO/RH.

 **Nuevo León**
Gobierno de Estado

Secretaría de EDUCACIÓN NL



LA FEDERACIÓN
REGISTRADO EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

188



9. Oficio número SEB-0568/12-13, dirigido al Director Jurídico de la Secretaría de Educación, por la Subsecretaría de Educación Básica, en donde se solicita lo siguiente:

"...Primero: Emitir un acuerdo delegatorio para el "personal debidamente identificado de la Secretaría integrado por "representantes de las Direcciones de Educación Primaria, "Incorporación y de la instancia a su digno cargo, se constituya en el "plantel para verificar el seguimiento documental dado al caso, tanto "en las medidas de corrección adoptadas con el alumno o alumnos "agresores, como en el apoyo brindado al menor afectado.

"Segundo: De no encontrar evidencias documentales "de lo anterior, emplazar a la autoridad para que en un plazo "perentorio las presente.

"Tercero: De manera simultánea a lo anterior, solicitar "a la institución particular que su personal directivo y docente, así "como el de apoyo que labora directamente con el alumnado, con sus "propios medios adquiera los cursos o Taller que la Comisión Estatal "de Derechos Humanos imparte con el tema de discriminación, así "como los que se imparten en esta secretaría, relativos al manejo de la "violencia escolar y a la aplicación del Manual de Convivencia "Escolar." (foja 252 del cuaderno de pruebas).

10. Oficio número DEP-0317/012-013, de trece de noviembre de dos mil doce, emitido por la Encargada de la Dirección de Educación Primaria, a la Subsecretaría de Educación Básica, en donde se recomienda remitir al menor al Departamento de Atención Psicológica, con la finalidad de encontrar apoyo y respuesta a las necesidades que el alumno

PRIMER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL CO
ADMINISTRATIVO DE
MONTERREY,



PODEREJECIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

99

pudiese tener, como probables consecuencias de las vivencias experimentadas en el año dos mil nueve. (foja 253 a 255 del cuaderno de pruebas).

11. Acuerdo de cinco de febrero de dos mil trece, emitido por la Subsecretaría de Educación Básica, en donde se ordena la práctica de una visita de inspección en la institución educativa [REDACTED], en nivel de educación básica a fin de verificar el seguimiento documental dado al caso denunciado por [REDACTED] en lo referente a las medidas de corrección adoptadas con el alumno o alumnos agresores, como el apoyo brindado al menor afectado, debiendo proporcionar copias de las documentales respectivas que apoyen lo anterior entregadas a la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León. (foja 264 del cuaderno de pruebas).

DE LA FEDERACIÓN
LEGADO EN MATERIA
EL CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

12. Visita de inspección, practicada el doce de febrero de dos mil trece, en la Institución Educativa, por los servidores públicos facultados por la Secretaría de Educación Básica, con motivo de la queja presentada por [REDACTED], padre del menor [REDACTED]. En dicha diligencia se procedió a notificar mediante lectura integra del acuerdo de cinco de febrero de dos mil

trece, suscrito por la Subsecretaría de Educación Básica, haciéndole entrega del instructivo de notificación a [REDACTED] y como se indica en el mismo tiene cinco días hábiles para remitir a la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, la documentación que obra en los archivos del colegio.

13. Acta administrativa de veinte de abril de dos mil doce, ante el Director Jurídico de la Secretaría de Educación, en donde comparece [REDACTED] [REDACTED], y solicita se gire cédula citatoria a [REDACTED] [REDACTED] quien funge como director de la escuela [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], para que aclare la queja presentada y remita copia certificada del expediente escolar de sus hijos [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], y se le reintegre la cantidad de doce mil dólares, que en su momento pago a la escuela por concepto de aportación escolar, en virtud de no haber sido aceptados desde el ciclo escolar 2009-2010. (foja 104 del cuaderno de pruebas). Para mejor claridad enseguida se reproduce digitalmente el acta administrativa de mérito:





100



114

ACTA ADMINISTRATIVA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 12:00-doce horas, del día 20 de abril de 2012, en la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación, sito en el segundo piso del edificio ubicado en la calle Nueva Jersey No. 4038 Fraccionamiento Industrial Lincoln, de esta ciudad, ante la presencia del C. Lic. Jorge Covarrubias Ortiz, Director Jurídico de la Secretaría de Educación, y de los testigos de asistencia que al final de la presente se mencionan y firman para constancia, comparece voluntariamente el C. C.P. [REDACTED] quien bajo protesta de decir verdad manifiesta ser mexicano, mayor de edad, casado y con domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle Capitán Aguilar No. 480 en la Colonia Lomas de Chepevera en Monterrey, Nuevo León, con teléfono No. 89976388, quien se identifica mediante la credencial para votar folio número 000081886887 expedida por el Instituto Federal Electoral. Acto seguido se le hace saber al compareciente que el motivo de la presente diligencia es con relación a su escrito presentado el día 09 de marzo de 2012, ante esta unidad administrativa, a través del cual presenta una queja en contra del [REDACTED]. Acto seguido desea manifiestar el compareciente que acude a esta Dirección Jurídica a ratificar en todas y cada una de sus partes el escrito presentado en fecha 09 de marzo de 2012, y solicita se gire cédula de notoria al C. Dr. [REDACTED], quien funga como Director del American School Foundation of Monterrey, para que agite la queja presentada, remita copia certificada del expediente escolar a nombre de los hijos del compareciente Jaime Alberto y [REDACTED] González Martínez, y para que se le requiera la reintegración de los \$12,000.00 (DOCE MIL DOLARES) que en su momento pagó a la escuela por concepto de aportación escolar, el cual manifiesta debe entregarse en virtud de no haber sido aportados desde el ciclo escolar 2009-2010, ya que incluso en el caso de su hijo Olivia Cristina González Martínez pagó la cuota de inscripción de preparatoria, cuyo monto se precisa en los documentos que oportunamente presentará el día de la audiencia correspondiente, siendo todo lo que desea manifiestar. En este momento se le hace entrega al compareciente de fotocopia simple de todas las constancias que obran en el expediente que existe en los archivos de esta Dirección Jurídica formado con motivo de su queja presentada por comparecencia el día 04 de noviembre de 2009. Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, firmando en la presente los que en ella intervinieron y así lo hicieron.- Conste.

DE NUC.

C. JAIME GONZÁLEZ PÁEZ.
COMPARECIENTE.C. LIC. JORGE COVARRUBIAS ORTIZ
DIRECTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.LIC. FRANCISCO INZAR HERNÁNDEZ
TESTIGO DE ASISTENCIALIC. VÍCTOR H. BARRERA ALEMAN
TESTIGO DE ASISTENCIA.

Dirección Jurídica

www.nl.gob.mx

Nueva Jersey 4038
Fraccionamiento Industrial Lincoln, Monterrey, N.L.
C.P. 64310 | Tels. (0181) 2020 5021, Fax. 2020 5023.Secretaría de
EDUCACIÓN

14. Acta circunstanciada de veintiséis de abril de dos mil doce, celebrada ante el Director Jurídico de la Secretaría de Educación, donde comparece [REDACTED] y [REDACTED], y el primero manifestó que comparece en su carácter de Director del [REDACTED], y al respecto se encontraba enterado de la problemática, que plantea el señor [REDACTED], con motivo del Bullying de que fue objeto su hijo por parte de los alumnos [REDACTED], puesto que durante un año estuvo atendiendo de manera personal, que inclusive existió la intervención de un Padre de la Iglesia Católica, y que una vez que se atendió el asunto, fueron el compareciente, el Consejo Directivo y el Comité de Admisión, quienes decidieron no volver a admitir como alumno al menor [REDACTED].

En la misma acta comparece el quejoso [REDACTED], quien manifiesta que debido a que la problemática no fue atendida debidamente su menor hija [REDACTED] se quedó sin amigas al no haber sido atendido el bullying por el Colegio Americano, misma que obra a fojas de la 110 a la 112

PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTERRE



del cuaderno de pruebas y para mejor claridad enseguida se reproduce la parte conducente:

Nuevo León
Unido

GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA CIRCUNSTANCIADA

120

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 12:00 doce horas, del día 26 veintiséis de abril de 2012, en la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación, sito en el segundo piso del edificio ubicado en la calle Nueva Jersey No. 4038 Fraccionamiento Industrial Lincoln, de esta ciudad, ante la presencia del C. Lic. Jorge Covarrubias Ortiz, Director Jurídico de la Secretaría de Educación, y de los testigos de asistencia que al final de la presente se mencionan y firman para constancia, comparece el C. [REDACTED] quien manifiesta comparecer en representación del [REDACTED] y refiere ser originario de los Estados Unidos de América, mayor de edad, casado, profesionista y con domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle Marín de Zavala No. 510 sur en el centro de Monterrey, Nuevo León, quien se identifica mediante la vía folio No. 002116 expedida por el Instituto Nacional de Migración y el C. JAMES GONZALEZ PAEL, de generales ya conocidas dentro del expediente en que se actúa. Acto seguido se le hace saber al C. Donald Jeffrey Keller que el motivo de la presente diligencia es con motivo de la solicitud de intervención planteada por el C. [REDACTED] a través de su comparecencia de fecha 04 de noviembre de 2009, en su escrito presentado en fecha 09 de marzo de 2012, y en el acta administrativa de fecha 20 de abril de 2012, en donde se hizo constar que: "...que acude a esta Dirección Jurídica a ratificar en todas y cada una de sus partes el escrito presentado en fecha 09 de marzo de 2012, y solicita se gire cédula citatoria al C. Dr. [REDACTED], quien funge como Director del American School Foundation of Monterrey, para que aclare la queja presentada, remita copia certificada del expediente escolar al nombre de los hijos del compareciente [REDACTED], y para que se le requiera la reintegración de los \$12,000.00 (DOCE MIL DOLARES) que en su momento pagó a la escuela por concepto de aportación escolar, el cual manifiesta debe entregarse en virtud de no haber sido aceptados desde el ciclo escolar 2009-2010, ya que incluso en el caso de su hija [REDACTED] pagó la cuota de inscripción de preparatoria, cuyo monto se precisa en los documentos que oportunamente presentará el día de la audiencia correspondiente, siendo todo lo que desea manifestar. En este momento se le hace entrega al compareciente de fotocopia simple de todas las constancias que obran en el expediente que existe en los archivos de esta Dirección Jurídica formado con motivo de su queja presentada por comparecencia el día 04 de noviembre de 2009..., por lo que se procede a enterarle de manera íntegra de la queja y al respecto desea manifestar lo siguiente: Que comparece en su calidad de Director General del [REDACTED], y al respecto ya se encontraban enterados de la problemática que plantea el señor [REDACTED]

Coahuila de Zaragoza

Secretaría de EDUCACIÓN NL

48



DE LA FEDERACION
COLEGIADO EN MATERIA
DEL CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEON



Dirección Jurídica

www.nl.gob.mx

Nueva Jersey 4038
Fraccionamiento Industrial Lincoln, Monterrey, N. L.
C.P. 64310 • Tels. (0181) 2020 5021, Fax: 2020 5025



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

111

con motivo del Bullying que menciona fue objeto de una intervención por parte de los alumnos [REDACTED] puesto que [REDACTED] aproximadamente en una sesión de enseñanza de manera personal la problemática entre la familia del quejoso, la familia de la señora [REDACTED] y otras familias. Sigue manifestando el de la voz que inclusive existió una intervención de un Padre de la Iglesia Católica bajo el consentimiento de las familias, y una vez que se atendió el asunto fue el compareciente y del Consejo Directivo y Comité de admisión quienes decidieron no volver admitir como alumno al menor [REDACTED] atendiendo las Condiciones de Admisión del Colegio, por lo que no se encuentra en posibilidades de llegar a una conciliación con el quejoso. Acto seguido se le requiere al C. Dr. [REDACTED] para que haga entrega de fotocopia de las documentales que le fueron requeridas a través del oficio No. DJ-629/2011-2012, consistentes en los expedientes escolares y administrativos de los menores [REDACTED] y [REDACTED] y al efecto manifiesta que si existen en los archivos de la Dirección del Colegio, sin embargo no los presenta en cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales. En este momento se le concede el uso de la palabra al C. [REDACTED] al efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga y señala que la problemática no fue atendida debidamente y su menor hija [REDACTED] se quedó sin amigos al no ser atendido el Bullying por el [REDACTED] y otra de las compañeras estaba con problemas de Bullying. Sigue manifestando que una madre de familia de nombre [REDACTED] fue la que incitó a los alumnos [REDACTED] para que le invitaran Bullying al hijo del compareciente, y en virtud de no haber sido justa la decisión del Colegio es por lo que interpone la presente denuncia y propone como vía de solución al caso lo siguiente: 1.- Se les expida a sus hijos una constancia personalizada en la que se les haga saber que no fueron expulsados y/o suspendidos por parte del Colegio; 2.- Se aplique por parte del Colegio la sanción de la misma manera que a su hijo al alumno [REDACTED] y se le reanude su reinscripción en el [REDACTED] y 3.- Se le reintegre además las aportaciones que en su momento pagó por el [REDACTED] ya que no fue su voluntad que sus hijos salieran de la institución, siendo todo lo que desea manifestar. Acto seguido se le concede el uso de la palabra al C. Dr. [REDACTED] para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la propuesta conciliatoria planteada por el C. [REDACTED] y al respecto manifiesta que está a disposición de expedir las constancias señaladas en el punto 1 a efecto de hacerles saber a los menores [REDACTED] que no fueron expulsados y/o suspendidos del

PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL C
ADMINISTRATIVO
MONTERREY



Dirección Jurídica

www.nl.gob.mx

Nueva Jersey #036

Fraccionamiento Industrial Lincoln, Monterrey, N. L.
C. P. 64130 | Tels. (0181) 2020 5021 Fax: 2020 5023.

Secretaría de
EDUCACIÓN



108



PO:7 ALCAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión



Cada uno para todos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, pero en lo que respecta a lo planteado en los puntos 2 y 3, señala que no es posible acceder a su petición ya que es ir en contra de las DE NL y políticos y contratos que hace su representada con los padres de familia que desean ingresar al colegio y es por ello que hace entrega de copia de la hoja de Condiciones de Registro que en su momento firma cada padre de familia, siendo todo lo que desea manifestar. Desea manifestar el C. [REDACTED] que es su derecho preguntar en este momento al C. [REDACTED] si es cierto que a los hijos de la C. [REDACTED], quien fungía como empleada de la Secretaría de Educación, se les otorgaban becas de estudios; al respecto es voluntad del C. [REDACTED] dar respuesta a la pregunta del quejoso, y manifiesta que las becas se otorgan en base a los Reglamentos que existen en la Secretaría de Educación, hay un Comité de Becas en el Colegio integrados por Padres de Familia y miembros del Consejo Directivo, y que todos los alumnos mexicanos tienen derecho para aplicar a una solicitud de beca, invitando cada año a los padres de familia, quienes llenan un solicitud y posteriormente es el Comité quien decide a quienes y los porcentajes de beca, pero que no es procedente la solicitud del quejoso para entregarle copia de los expedientes de las solicitudes de becas de los alumnos, siendo todo lo que manifiesta al respecto. En este momento se les hace saber a los comparecientes que al no existir una solución conciliatoria de los actos que reclama el C. [REDACTED] en contra del [REDACTED] y el [REDACTED], se encuentran a salvo sus derechos para ejercitar las acciones legales que convenga. Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, firmando en la presente los que en ella intervinieron y así lo hicieron.- Conste.

C. [REDACTED]
COMPARECIENTE.

C. [REDACTED]
COMPARECIENTE.

C. LIC. JORGE COVARRUBIAS ORTIZ
DIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

LIC. FRANCISCO IRÍZAR HERNÁNDEZ
TESTIGO DE ASISTENCIA

LIC. VÍCTOR BRIONES ALEMÁN.
TESTIGO DE ASISTENCIA.



Dirección Jurídica

www.nl.gob.mx

Nueva Jersey 403A

Fraccionamiento Industrial Lincoln, Monterrey, N. L.
C.P. 64310 • Tels. (8141) 2020 5021. Fax: 2020 5023Secretaría de
EDUCACIÓN

Pruebas las anteriores que tiene valor probatorio pleno acorde con lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles por aplicación supletoria de la Ley de Amparo en términos del artículo 2º de la misma Ley.

De lo anterior se pone de relieve que se transgredió en perjuicio del menor [REDACTED] su derecho fundamental a la dignidad humana, que es reprochable las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado, por su desatención y descuido al no dictar las medidas necesarias, pues no obstante de haberse presentado una queja administrativa en contra de la institución educativa, la responsable no dictó las medidas necesarias para evitar el daño de que fue objeto el menor.

Lo que se acredita con la denuncia presentada por [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ante la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, en donde el cuatro de noviembre de dos mil nueve, acudió a presentar su queja, y no obstante de los esfuerzos que se hicieron por solucionar el conflicto, nunca se le dio el trámite y seguimiento adecuado a la queja presentada por el padre del menor por acoso



PODER JUDICIAL DEL
PRIMER TRIBUNAL CON
ADMINISTRATIVA DEL
MONTERREY, I



escolar llevado a cabo por alumnos del plantel

Lo que se corrobora con el informe solicitado al área de atención psicológica, que entrevistó al alumno [REDACTED], en donde revela que el menor se sintió lastimado porque le dejaron de hablar y lo excluyeron del grupo, hablaban cosas negativas de él diciendo que era chismoso y actuaba como niña, inclusive se recomendó apoyo psicológico al menor.

Aunado al acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil doce, en donde el director Jurídico de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, con motivo de la queja presentada por [REDACTED] previene al [REDACTED]

para que a través del personal directivo y Consejo, atendieran cabalmente y cumplan con las disposiciones de la Ley General de Educación, Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley de Educación del Estado, Ley de Protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y Lineamientos Generales para la Convivencia Escolar.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
E LA FEDERACIÓN
LEGIADO EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEON

Sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, nunca implementaron las medidas necesarias, para resolver la denuncia interpuesta por [REDACTED], sin que fuera suficiente que haya requerido a la Institución Educativa para que informara de las medidas adoptadas para prevenir y atender el caso de acoso escolar derivado de la discriminación del menor en el [REDACTED] [REDACTED], con lo cual nunca cumplió.

Además, el director Jurídico de la Secretaría de Educación, mediante oficio DJ-1665/2012-2013, de fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, solicitó a la subsecretaría de Educación Básica emitiera dictamen para recomendar la aplicación de las sanciones correspondientes en caso de que procedan a la institución denunciada, sin embargo, ello no fue suficiente para evitar el daño de que fue objeto el menor.

En esa tesitura, se puede concluir que las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, en la resolución impugnada, no analizaron adecuadamente los elementos probatorios que conformaban la queja administrativa, toda vez

PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTERRE



164

que existen pruebas que revelan de manera contundente que en perjuicio del menor [REDACTED] [REDACTED] se vulnero su derecho fundamental a la dignidad humana y no discriminación, al ser objeto de una conducta conocida como acoso escolar al ser víctima de discriminación, por alumnos del plantel [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y además la Secretaría de Educación del Estado, incurrió en una conducta omisa de no dar el seguimiento adecuado a la queja administrativa presentada en contra del plantel educativo, pues no dictó las providencias necesarias para evitar el daño sufrido por el menor, habida cuenta de que debió de sancionar al colegio, por su conducta negligente pues jamás tomó las medidas necesarias para protegerlo y reintegrarlo a la escuela, y brindarle el apoyo psicológico necesario por el daño de que fue objeto.

Por ende, las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, transgredieron los siguientes derechos fundamentales:

A Vulneraron, en perjuicio del menor los artículos 1º y 3º Constitucional, puesto que se transgredió un derecho humano reconocido en la

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JANCIAL DE LA FEDERACIÓN
COLEGIADO EN MATERIA
DEL CUARTO CIRCUITO
Y, NUEVO LEÓN

Constitución, como es el derecho a la dignidad humana, la no discriminación y la educación.

Además, las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, debieron de haber atendido adecuadamente dicha conducta dañina en perjuicio del menor, previniendo, investigando, sancionando y procediendo a reparar la violación a los derechos fundamentales, en virtud de la discriminación de que fue objeto el menor agraviado

Es importante destacar que el daño que sufrió el menor agraviado, debió de ser atendido y corregido por la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, pues no dictó las providencias necesarias, que establecen las legislaciones, tanto federal como local, inclusive las previstas en diversos tratados internacionales relacionados con los derechos humanos, para evitar, la no discriminación del menor, vulnerando en su perjuicio el derecho a su dignidad humana, reconocido por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primero y quinto párrafos, toda vez que se demostró que el menor fue objeto de opiniones de burlas y discriminación por parte de sus compañeros del colegio, debiendo actuar las



PODER JUDICIAL DE
PRIMER TRIBUNAL COLE
ADMINISTRATIVA DEL C
MONTERREY, NI



103

autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, de una manera más firme y contundente para evitar los daños que sufrió el menor.

El artículo 1o. de la Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la



LA FEDERACIÓN
GIADO EN MATERIA
UARTO CIRCUITO
JEVO LEÓN

propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal.

Derechos que se transgredieron en perjuicio del menor agraviado, por la actitud asumida por las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, por no atender y corregir la queja que fue presentada por el padre del menor y dictar las medidas y providencias necesarias para evitar el daño que sufrió el menor.

Por tanto, las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, vulnera en perjuicio del menor, los artículos 1º, primero y quinto párrafo, 3º, primer párrafo, fracción II, inciso c) y 4º, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que debió de respetar los derechos humanos del menor de no discriminación y el derecho a la dignidad humana y garantizar su educación. De igual manera, no se cumplió con el salvaguardar el principio del interés superior del menor, que tienen garantizados de manera plena los derechos de niños y las niñas a la educación.

Asimismo, las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, transgredieron la Convención sobre los Derechos del

PODER JUDIC
PRIMER TRIBUNA
ADMINISTRATIV
MONTERR



106

Niño contenidos en los artículos 3.1, 28.1, a), b) y 37, a), toda vez que en las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas deben atender al interés superior del niño. Además, deben asegurar al niño la protección y el cuidado necesario para su bienestar, lo que no aconteció en la especie, puesto que al no haber atendido debidamente la queja por acoso escolar en perjuicio del menor [REDACTED] es claro que no cumplieron con su deber de salvaguardar el interés superior del niño.



PODERE JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
COLEGIADO EN MATERIA
DEL CUARTO CIRCUITO
DE NÚMERO 10, NUEVO LEÓN

Es de advertirse que, las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, transgredieron con su conducta los artículos 3, 4, 21, y 32 A y B de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, pues no cumplió con sus respectivas obligaciones, por no haber dictado las medidas preventivas durante el desarrollo de la queja con la finalidad de que cesara la violación a los derechos del menor afectado.

También soslayó las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, dirigidas a procurarles, primordialmente los cuidados y asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos.

Fueron omisas las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, de proteger al menor contra actos u omisiones que le afectaron su salud física y mental, su normal desarrollo y su derecho a la educación.

Las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, transgredieron en perjuicio del menor la Ley General de Educación en sus artículos 7, fracción VI, y 42, toda vez que no se cumplió con el fin previsto en la ley que es promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad y la no violencia de cualquier tipo, así como el respeto a los derechos humanos.

Vulneraron las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, que en la impartición de educación para menores de edad se deben tomar las medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para salvaguardar su integridad física, psicológica y social, lo que no sucedió en la especie, pues nunca se protegió al menor del acoso escolar de que fue objeto.

Las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, incumplieron



PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL
MONTERREY, I



107

con la Ley de Educación del Estado, en su artículo 109, fracción I, ya que no cumplió con lo dispuesto por el artículo 3° de la Constitución Política de del Estado, que consagra el derecho a la educación, en la Ley General y en las demás disposiciones aplicables.

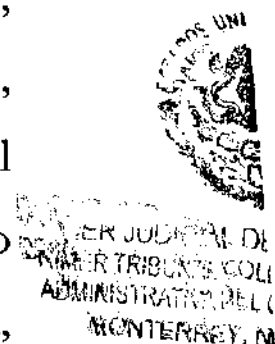
De igual manera, las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, debió de sancionar al [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], porque no valoró adecuadamente las pruebas que obran en la queja administrativa, de donde se desprenden que de manera arbitraria, unilateral y sin fundamento legal, el Director del Colegio, el Consejo Directivo y el Comité de Admisión, decidieron no admitir al menor [REDACTED] [REDACTED] al siguiente ciclo escolar, sin que la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León y hubiera actuado en consecuencia.

Lo anterior se acredita con los elementos de prueba, siguientes:

1. El acta levantada ante el Director Jurídico de la Secretaría de Educación, el cuatro de noviembre de dos mil nueve, en donde [REDACTED] [REDACTED] presentó una queja en contra del [REDACTED] [REDACTED], de la profesora

[REDACTED] quien se desempeña como Consejera Escolar de la Primaria, en donde manifestó que su menor hijo [REDACTED], que cursa el 6° grado de primaria, que desde hace treinta días su menor hijo y otros alumnos han sido objeto de acoso escolar por violación a su derecho a la no discriminación y a la dignidad, el cual consiste en maltrato psicológico, verbal y físico producido por los compañeros de escuela de forma reiterada en perjuicio de su menor hijo, siendo principalmente el agresor, un alumno de nombre [REDACTED], quien cursa en el mismo plantel el 6° grado, aconteciendo los hechos durante el recreo, en el período de espera del transporte escolar, en el trayecto del traslado a la casa, y a las afueras de la escuela, situación que en reiteradas ocasiones había hecho del conocimiento de la escuela y de las maestras, sin que hayan atendido y dado solución a su problemática. (foja 63 del cuaderno de pruebas).

2. Escrito de nueve de marzo de dos mil doce, presentado por [REDACTED], ante el Director Jurídico de la Secretaría de Educación, en donde hace del conocimiento que no ha habido respuesta de la queja presentada el cuatro de noviembre de dos mil nueve.





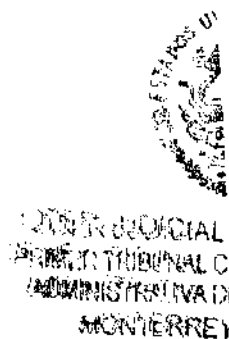
Señaló además al margen de los hechos del acta administrativa, se le hizo saber al Titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, diversas irregularidades en las que participo [REDACTED] [REDACTED] que son competencia de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, como lo es los sueldos, bonos o compensaciones que recibía, pero en especial lo referente a las becas que se le otorgaban por la Institución educativa.

Informó también que fue impedido por el Director del Colegio particular [REDACTED], que se inscribiera su hijo en el período escolar 2010- 2011, caso contrario a la señora [REDACTED], a pesar de que no existió motivo alguno, sólo su hijo no fue aceptado al período escolar referido fojas 162 a 165 del cuaderno de pruebas.

3. Acta administrativa de veinte de abril de dos mil doce, ante el Director Jurídico de la Secretaría de Educación, en donde comparece [REDACTED] [REDACTED] y solicita se gire cédula citatoria a [REDACTED] [REDACTED], quien funge como director de la escuela [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], para que aclare la queja presentada y remita copia certificada del expediente escolar de sus hijos [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED], para que se le reintegre la cantidad de doce mil dólares, que en su momento pago a la escuela por concepto de aportación escolar, en virtud de no haber sido aceptados desde el ciclo escolar 2009-2010. (foja 104 del cuaderno de pruebas).

4. Acta circunstanciada de veintiséis de abril de dos mil doce, celebrada ante el Director Jurídico de la Secretaría de Educación, donde comparece [REDACTED] y [REDACTED] [REDACTED], en donde el primero manifestó que comparece en su carácter de [REDACTED] [REDACTED], y al respecto se encontraba enterado de la problemática, que plantea el señor [REDACTED], con motivo del Bullying de que fue objeto su hijo por parte de los alumnos [REDACTED] [REDACTED], puesto que durante un año estuvo atendiendo de manera personal, que inclusive existió la intervención de un Padre de la Iglesia Católica, y que una vez que se atendió el asunto, fueron el compareciente, el Consejo Directivo y el Comité de Admisión, quienes decidieron no volver a admitir como alumno al [REDACTED] [REDACTED] (foja 107 y 108 del cuaderno de pruebas).





109

5. Escrito de veintiséis de septiembre de dos mil doce, dirigido a la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, por [REDACTED], en su carácter de representante legal de [REDACTED], en donde informa que el veinticinco de agosto de dos mil doce, se llegó a un acuerdo satisfactorio con el señor [REDACTED] y su esposa y un finiquito total con la institución, en consecuencia dicha denuncia ha quedado resuelta. (foja 226 y 227 del cuaderno de pruebas).

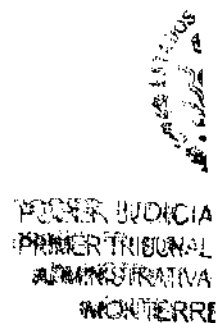
6. Acta de cinco de octubre de dos mil doce, ante el Director de la Secretaría de Educación, en donde solicita al Director del Colegio, se sirva remitir en el término de cinco días hábiles, copia certificada de las constancias que acrediten lo expuesto en el escrito de veintiséis de septiembre de dos mil doce, por el representante legal del colegio e informen las medidas implementadas para prevenir y atender los casos de acoso escolar por violación al derecho a la no discriminación en el colegio, acompañando los documentos que amparen su dicho. (foja 240 del cuaderno de pruebas).

7. Escrito de veinticinco de octubre de dos mil doce, presentado por [REDACTED], al

Director Jurídico de la Secretaría de Educación, en relación al escrito presentando por el Colegio particular, representado por [REDACTED] [REDACTED] reitera que el veinticinco de agosto de dos mil doce, se llegó a un arreglo conciliatorio con el colegio, en el cual se reintegró las aportaciones (separación de un lugar en la institución) de sus dos hijos, pero no es una indemnización es un reembolso de las aportaciones por mal manejo de la queja que presentó en la Escuela, con esto se reconoce que se atendió mal el caso de Bullying. (foja 249 del cuaderno de pruebas).

Pruebas las anteriores que tiene valor probatorio pleno acorde con lo establecido por los artículos 129, 197, 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles por aplicación supletoria de la Ley de Amparo en términos del artículo 2º de la misma Ley, y que no fueron valoradas adecuadamente por la autoridad responsable.

Con la denuncia presentada por [REDACTED] [REDACTED], en contra del [REDACTED] [REDACTED], en donde manifestó que su hijo fue objeto de acoso escolar por violación a su derecho a la no discriminación y a la dignidad, por alumnos de la escuela en forma





110

reiterada, consistente en maltrato psicológico, verbal y físico al dejarle de hablar, siendo objeto de burlas, diciendo que era chismoso, que actuaba como niña, queja que fue presentada el cuatro de noviembre del dos mil nueve, ante la Secretaría de Educación, situación que no fue atendida con la oportunidad debida, y que ocasiono que el menor siguiera siendo objeto de maltrato.

Lo que propició que el menor fuera excluido de la escuela, situación que hizo saber el padre del menor, a la autoridad responsable, mediante escrito presentado en marzo de dos mil doce, en donde informó que la escuela particular no había dado respuesta a la queja presentada, y que incluso fue relegado o segregado por la propia escuela su menor hijo ya que se le impidió que se le inscribiera en el siguiente ciclo escolar 2010 a 2011, sin justificación alguna.

Circunstancia que inclusive fue reconocida por la escuela, toda vez que en el acta circunstanciada de veintiséis de abril de dos mil doce, el Director del [REDACTED]

[REDACTED] en donde manifestó que el Consejo Directivo y el Comité de Admisión decidieron no volver admitir como alumno al menor

de manera unilateral y sin justificación alguna, lo que constituye una confesión en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2º de la Ley de la Materia.

De donde se obtiene que la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, incurrió en las conductas de acción y omisión, que repercutieron en la violación a los derechos fundamentales del menor, consistentes en la educación, no discriminación y a la dignidad de la persona.

1. En efecto, la Secretaría de Educación del Estado tuvo conocimiento de la denuncia presentada por el padre del menor, desde el cuatro de noviembre de dos mil nueve, y de que el menor era objeto de acoso escolar por violación a su derecho a la no discriminación y a la dignidad, por alumnos de la escuela en forma reiterada, consistente en maltrato psicológico, verbal y físico al dejarle de hablar, siendo objeto de burlas, diciendo que era chismoso, que actuaba como niña, sin embargo dicha autoridad fue omisa, pues por su negligencia y descuido, no atendió adecuadamente la queja y no protegió al menor del



PODER JUDICIAL DE L
PRIMER TRIBUNAL COLEC
MINISTERIO DE LA CU
NUEVO LEÓN, NU



maltrato psicológico, verbal y físico a través de las burlas de sus compañeros.

2. También la Secretaría de Educación del Estado, actuó con descuido y negligencia propiciando que el menor continuara siendo objeto de burlas y maltrato psicológico por los compañeros del colegio particular, tan es así que las autoridades del colegio particular le negaron el ingreso al menor al siguiente ciclo escolar dos mil diez dos mil once.

3. Igualmente dicha Secretaría al ser omisa en la atención del problema escolar que se le planteó propició que el menor tuviera ideas de lastimarse físicamente, inclusive como lo refiere el padre del menor de quitarse la vida, a consecuencia del miedo que sufría al raíz del maltrato perpetrado en su perjuicio.

4. Igualmente la Secretaría no atendió adecuadamente la queja administrativa dando una solución a la problemática que estaba sufriendo el menor, pues en lugar de dar una respuesta satisfactoria a la queja, lo único que hizo fue retardar injustamente el procedimiento y la resolución, pues cabe recordar que la queja se presentó el cuatro de noviembre de dos mil nueve, y no fue sino hasta el veinte de mayo de dos mil trece, cuando la Secretaría

de Educación del Estado, resolvió la queja administrativa, y sin valorar debidamente el material probatorio que obra en autos, resolvió de una manera genérica y sin fundamento ni razón que el [REDACTED]

[REDACTED] no era responsable, contrario a lo aquí demostrado.

En cuanto al Director Jurídico de la Secretaría de Educación del Estado, incurrió en las siguientes acciones y omisiones, que repercutieron en la violación a los derechos humanos del menor agraviado.

1. Actuó con negligencia y descuido en la queja presentada por el padre del menor por acoso escolar del que fue objeto su hijo por alumnos de la escuela en forma reiterada, consistente en maltrato psicológico, verbal y físico al dejarle de hablar, siendo objeto de burlas, por no atender adecuadamente la queja administrativa que fue presentada ante él, pues no obstante que fue el encargado de integrarla, lo único que hizo fue prevenir al colegio particular, pero sin actuar de una manera contundente y responsable para evitar el maltrato psicológico y verbal de que era objeto el menor, por parte de sus compañeros en el Colegio Particular.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PODER JUDICIAL
SUPLEN TRIBUNAL C
ADMINISTRATIVA I
MONTERRE



112

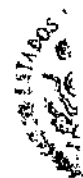
2. Actuó con descuido en la queja presentada por el padre del menor por acoso escolar, pues no obstante en que en diversas ocasiones el padre del menor le hizo de su conocimiento que la queja no había sido atendida, no tomó las medidas preventivas necesarias, para evitar que el menor siguiera siendo objeto de maltrato.

3. Actuó de manera irresponsable y negligente, en la queja que presentó el padre del menor por acoso escolar, pues debió de haber integrado debidamente el expediente recabando todas las pruebas que fueran necesarias para el esclarecimiento de los hechos y sobre todo para brindarle al menor la protección y seguridad que necesitaba, por parte de la Secretaría de Educación que es la encargada de resolver el problema.

4. Actuó de manera irresponsable y negligente, en la queja que presentó el padre del menor por acoso escolar del que fue objeto su hijo, en razón de que no era suficiente que se enviaran oficios al colegio particular para que atendiera la queja, sino que debió de haber implementado los mecanismos adecuados para que el menor fuera reintegrado al centro escolar y evitar el maltrato de que fue objeto, de una manera real y efectiva.

5. Actuó de manera irresponsable, con descuido y negligencia, en la queja que presentó el por el padre del menor por acoso escolar, toda vez que no obstante que la queja se presentó el cuatro de noviembre de dos mil nueve, la resolución se dictó el veinte de mayo de dos mil trece, retardando injustamente la solución al problema, lo que ocasionó que se vulneraran los derechos humanos del menor.

Por tanto, las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado violaron los artículos 3º y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, puntos A y E, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que garantizan que los niños y adolescentes tienen derecho a una educación libre de violencia en el centro escolar, como expresión o resultado del derecho a la educación, a la salud, al respeto a su dignidad humana y al principio del interés superior de la niñez, al no atender adecuadamente la queja actuaron con negligencia y descuido e irresponsabilidad al no dar solución a la problemática que enfrentaba el menor, lo que propició que el menor sufriera daños emocionales inclusive con deseos de quitarse la vida.



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTERRE



113

Igualmente, no adoptaron las medidas adecuadas para proteger al menor y evitar el maltrato psicológico y emocional de que era objeto por parte de los compañeros de la escuela y después por el mismo plantel educativo, quienes lo segregaron al no permitirle su ingreso al ciclo escolar dos mil diez dos mil once. Además, tardaron más de tres años, en que las autoridades responsables emitieran una resolución.

En efecto tanto en la Constitución Federal como en la Ley que los derechos de los niños, implica que en los centros escolares públicos o privados no se ejerza en contra de niños y adolescentes violencia física, sexual, psicoemocional o verbal, ya sea directa o indirectamente, o a través de las tecnologías de la información y comunicación, generada por otros alumnos, docentes o personal directivo.

Como consecuencia de lo anterior, todos los órganos del Estado tienen la obligación ineludible de promover, respetar, proteger y garantizar ese derecho a través de las acciones que sean necesarias para reconocerlo, atenderlo, erradicarlo y prevenirlo, con la debida diligencia, esto es, con respuestas eficientes, eficaces, oportunas y responsables, aspectos

que no fueron observados por la autoridad responsable.

Es de advertirse que, las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, transgredieron con su conducta los artículos 3, 4, 21, y 32 A, de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, pues no se cumplió con el objetivo de asegurarle al menor un desarrollo pleno e integral, porque no obstante que el padre del menor presentó una queja por acoso escolar de que fue objeto su hijo, actuando con apatía y desinterés en la solución del problema, al grado de que la propia escuela de forma arbitraria decidió ya no inscribirlo al siguiente ciclo escolar, causándole al menor daños emocionales irreparables, con lo cual se vulneraron los principios rectores de protección del interés superior del niño, al ser privado del derecho humano a la educación.

Soslayaron el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a una educación y a que se respete su dignidad, y se les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3º Constitucional y se le proporcione la atención educativa que por su edad, madurez y circunstancias especiales requieren para su



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTERRE



114

pleno desarrollo, al no atenderse adecuadamente por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación, la queja que presentó el padre del menor todas vez que no realizaron las medidas adecuadas y apropiadas para evitar el maltrato psicológico y verbal de que era objeto el menor, sino que al contrario retardaron injustamente la solución al problema, vulnerando los derechos humanos del menor.

Vulneraron las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, que en la impartición de la educación para menores de edad se deben tomar las medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para salvaguardar su integridad física, psicológica y social, lo que no sucedió en la especie, pues nunca se protegió al menor del acoso escolar de que fue objeto.

En esa tesitura las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado, incurrieron en conductas de acción y omisión, pues no obstante de ser la encargada para su solución este tipo de conflictos entre la escuela y el padre del menor no actuó de manera diligentemente, responsable y adecuadamente pues si bien es cierto, se llevó a cabo un procedimiento para atender la queja, también es verdad, que no actuó de manera contundente para

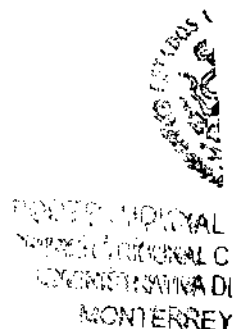
solucionar el problema del menor, pues lo único que hizo fue alargar más el procedimiento, para después concluir sin fundar y motivar su resolución en determinar que el colegio no era responsable, cuando del material probatorio analizado adminiculadamente es evidente la responsabilidad del colegio y de las autoridades de la secretaria de educación.

Ahora bien, en cuanto a las conductas de acción y omisión cometidas por la tercero perjudicada.

Debe tomarse en cuenta que la que inició el problema fue la institución educativa, porque no siguió los protocolos de actuación en un caso de acoso escolar, por el maltrato y la discriminación de que fue objeto el menor en el plantel educativo.

El plantel educativo [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], es responsable por no haber atendido adecuadamente la queja que presentó el padre del menor [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], por acoso escolar y maltrato psicológico que sufrió el menor verbal y físico por parte de dos alumnos de la Institución educativa, y no haber hecho nada para corregir esa situación

Además, de manera unilateral el Director de la Escuela, el Consejo Directivo y el Comité de Admisión del colegio, decidieron no volver aceptar al





siguiente ciclo al menor [REDACTED]

[REDACTED] y, como consecuencia, el padre del menor se vio obligado a no inscribir a su hijo al siguiente ciclo escolar.

Conducta por la cual debió de haber sido atendida y sancionada por la Secretaría de Educación del Estado, pues debido a su pasividad y negligencia se originó que el daño psicológico que por maltrato estaba siendo afectado el menor continuara, sin evitar y prevenir esa conducta y no fue atendido y corregido adecuadamente por la responsable, pues existen pruebas fehacientes al respecto que no fueron analizadas por la autoridad responsable, que revelan que la institución educativa no hizo nada para corregir, remedir y proteger tanto al menor afectado como a los menores agresores.

No es óbice para la anterior determinación, el evento de que el padre del menor [REDACTED] haya llegado a un acuerdo con respecto al reembolso, por concepto de aportaciones escolares, con el Colegio Particular, toda vez que ello no implica que haya consentido la violación a los derechos fundamentales de que fueron objeto sus menores hijos, sino que demuestra que se trató de evadir el problema.

Además, es de tomarse en cuenta la conducta negligente y evasiva de la institución educativa, quienes lejos de solucionar el problema decidieron no aceptar al menor en el siguiente ciclo escolar, por lo que era evidente que el padre del menor no le quedaba otra opción de recuperar por lo menos, los gastos económicos de inscripción que había aportado, lo cual no puede decirse que estuvo de acuerdo con la postura del colegio; al contrario fue precisamente lo que detonó su acción legal hasta esta instancia que aquí se resuelve.

En esa tesitura, la resolución de veinte de mayo de dos mil trece, emitida por la autoridad responsable en la que resolvió el procedimiento administrativo instruido en contra del

que determinó no sancionar al colegio particular, transgredió los derechos fundamentales del menor

, por violación al derecho a su dignidad, a la educación y la no discriminación en virtud del maltrato psicológico, verbal y físico, ya que le dejaron de hablar, fue excluido del grupo y de la escuela, se burlaban diciendo que actuaba como niña, conductas que fueron infringidas por compañeros de



PODER JUDICIAL D
FEDERACION COL
ADMINISTRATIVO



116

Amparo en Revisión

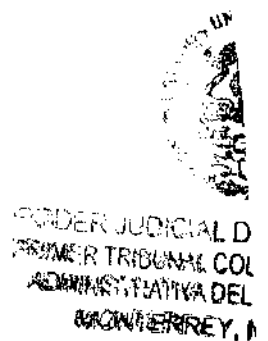
la [REDACTED]
[REDACTED] aunado a que de manera unilateral el Director del Colegio, el Consejo Directivo y el Comité de Admisión, decidieron no admitir como alumno al menor [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] al siguiente ciclo escolar, y como consecuencia, el padre del menor se vio obligado a no inscribir a su hijo, al siguiente año escolar, aspecto que a pesar de que tuvo conocimiento la autoridad responsable por reconocimiento expreso del director del plantel educativo involucrado y de estar debidamente probada la violación a los derechos humanos del menor, no hizo nada al respecto, por lo que se trasgredió en su perjuicio el derecho a la Educación, a la dignidad y no discriminación contenidos en los artículos 1º, 3º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En lo que se refiere a la queja presentada en contra de [REDACTED], en su carácter de ex funcionaria de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, a quien se le atribuye conductas irregulares respecto a becas que se le otorgaban en la Institución Educativa denunciada, no hay elementos de prueba que permitan establecer que

la referida [REDACTED] en su carácter de empleada de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, se le hayan otorgado becas de manera arbitraria o fraudulenta, pues al respecto no hay elementos de juicio que permitan establecer que la involucrada llevo a cabo los hechos que se le atribuyen en la queja presentada por [REDACTED], en perjuicio de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, por ende, su conducta al no estar demostrada no debe ser reprochable.

De igual forma de las constancias probatorias que obran en autos, no se advierte la existencia de un vínculo entre la ex funcionaria [REDACTED] con el colegio particular en la conducta de bullying, atribuida por el padre del menor quejoso [REDACTED] pues no hay un dato de prueba que así lo revele, ni tampoco que de forma personal haya intervenido o permitido el acoso escolar de que fue objeto el menor J [REDACTED] entonces, ante la sola imputación es insuficiente para atribuirle alguna responsabilidad con motivo de la queja presentada por el padre del menor quejoso.

Consecuentemente, al advertirse que los conceptos de violación resultaron fundados, y que se





transgredió en perjuicio del menor agraviado el derecho humano a la no discriminación, derecho a la dignidad humana y a la educación contenido en los artículos 1º, 3º y 4º de la Constitución General de la República, este órgano colegiado como garante de los derechos fundamentales, estima procedente conceder al quejoso [REDACTED], quien comparece en representación de su menor hijo [REDACTED] [REDACTED] el amparo y protección de la Justicia Federal.

DÉCIMO CUARTO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se concede a Jaime González Páez, por sus propios derechos y en representación de su menor hijo [REDACTED] [REDACTED] amparo y protección de la Justicia Federal, acorde con la legislación de la materia los efectos de la concesión del amparo son, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo restituir al quejoso en el pleno goce de su derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implica una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

En esas condiciones, es de destacarse que cuando el padre del menor presentó la queja por acoso escolar ante las autoridades educativas fue en noviembre de dos mil nueve, el menor [REDACTED] [REDACTED], contaba con doce años y cursaba el sexto grado de primaria, mientras que cuando presentó la demanda de amparo, el menor contaba con quince años ocho meses, por tanto, ya no podría restituirse en el goce de su derecho violado, sin embargo, puede determinarse una indemnización compensatoria por el daño sufrido por el menor, acorde con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 63.1, Ley General de Víctimas, artículos 1,2, fracción I y II, 7 fracciones II y VII, 26 y 27, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1º y 57, fracción I, 75, fracción I y 76, fracción I de la Ley General de Educación, preceptos que dicen:

**Convención Americana sobre
Derechos Humanos.**

"Artículo 63.-

**"1. Cuando decida que hubo violación de un
"derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte
"dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su
"derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello
"fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la
"medida o situación que ha configurado la vulneración de esos**



SECRETARÍA DE JUSTICIA Y
FUERZAS ARMADAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y
FUERZAS ARMADAS



118

"derechos y el pago de una justa indemnización a la parte
"lesionada.

Ley General de Víctimas.

"Artículo 1. La presente Ley general es de orden
"público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional,
"en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17,
"y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
"Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado
"Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

"En las normas que protejan a víctimas en las leyes
"expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca
"a la persona.

"(REFORMADO, D.O.F. 3 DE MAYO DE 2013)

"La presente Ley obliga, en sus respectivas
"competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y
"de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus
"oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o
"privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar
"ayuda, asistencia o reparación integral.

"(REFORMADO, D.O.F. 3 DE MAYO DE 2013)

"La reparación integral comprende las medidas
"de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y
"garantías de no repetición, en sus dimensiones individual,
"colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas
"medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en
"cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante
"cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus
"derechos, así como las circunstancias y características del
"hecho victimizante."

"Artículo 2. El objeto de esta Ley es:

"(REFORMADA, D.O.F. 3 DE MAYO DE 2013)



POD JAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

"hecho punible cometido o de la violación de derechos
 "humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de
 "cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios,
 "sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean
 "consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;

"IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la
 "dignidad de las víctimas;

"V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho
 "punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a
 "ocurrir;

"VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación
 "colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los
 "grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido
 "afectadas por la violación de los derechos individuales de los
 "miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto
 "colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a
 "la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca
 "la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la
 "protección y la promoción de los derechos en las comunidades,
 "grupos y pueblos afectados.

"Las medidas colectivas que deberán implementarse
 "tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos
 "victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el
 "tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones
 "y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de
 "la protección y promoción de los derechos humanos en las
 "comunidades y colectivos afectados."

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos
 "todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución,

"las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y
"con las condiciones que ella misma establece.

"(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE
"2001)

"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos
"Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio
"nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección
"de las leyes.

"(REFORMADO, D.O.F. 4 DE DICIEMBRE DE
"2006)

"Queda prohibida toda discriminación motivada
"por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
"discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
"la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o
"cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
"por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
"personas."

Ley General de Educación

"Artículo 57.- Los particulares que impartan
"educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial
"de estudios deberán:

"(REFORMADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE
"2013)

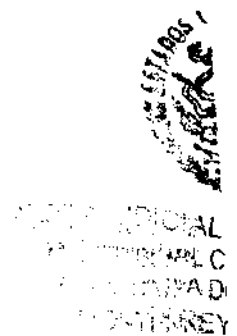
"I.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la
"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la
"presente Ley y demás disposiciones aplicables;

"[...]"

"Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan
"servicios educativos:

"I.- Incumplir cualesquiera de las obligaciones
"previstas en el artículo 57;

"[...]"





PODERANAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

120

"Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:

"I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia, o

"[...]"

En el orden internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco Vs Estados Unidos Mexicanos, en la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), estableció:

"327. Es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente[313]. Esa obligación se regula por el Derecho Internacional[314]. En sus decisiones al respecto, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la Convención Americana. En el presente capítulo, el Tribunal examinará las pretensiones que, en la materia, señalaron la Comisión Interamericana y los representantes con el objeto de disponer las medidas tendientes a reparar los daños ocasionados a las víctimas."

"C5. Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional

"351. Los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso a través del jefe de Estado. Al respecto, el Estado indicó que "[e]n consulta con los familiares de la víctima, realizaría un acto público de reconocimiento de [...] responsabilidad en relación con las violaciones

"que determine [la Corte]." Asimismo, indicó que se ofrecería una "disculpa a los familiares de la víctima."

De los preceptos anteriores se puede inferir que cuando resuelva que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Es decir, se garantiza la restitución integral de los derechos del menor afectado, que comprende la reparación integral consistente en las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.



COLEGIO JUDICIAL D
PRIMER TRIBUNAL COI
ADMINISTRATIVA DEL
MONTERREY, I



La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos.

La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos.

La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos.

En el entendido de, que una víctima no solamente comprende en materia penal y derivada de una conducta delictuosa, sino que acorde con la Ley General de Víctimas, comprende reconocer y garantizar no solamente el derecho de las víctimas de un delito, sino también cualquier violación a los derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los

demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos.

Es aplicable al caso, la tesis aislada P. LXVII/2010, con número de registro 163164, que al respecto sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Constitucional, página 28, que dice:

**"DERECHOS HUMANOS. SU VIOLACIÓN
"GENERA UN DEBER DE REPARACIÓN ADECUADA EN
"FAVOR DE LA VÍCTIMA O DE SUS FAMILIARES, A
"CARGO DE LOS PODERES PÚBLICOS COMPETENTES.**

"Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares,
"tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, la cual
"debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a
"restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de
"satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante
"los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no
"es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación
"jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto
"constitucionalmente como de los instrumentos internacionales
"ratificados por México y de los criterios de organismos
"internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de
"que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel
"fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de
"las violaciones y al daño sufrido."



PODERE JUDICIAL
FEDERAL
SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y ENERGÍA
MONTERREY



122

Amparo en Revisión

En términos de la Ley General de Educación, los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Las infracciones ~~se~~ sancionarán, entre otras, con multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia.

Por tanto, para efectos de la reparación del daño, se deben dar los lineamientos a la autoridad responsable que sirvan de base para vincularla con la Institución Educativa ahora tercera perjudicada sobre la forma en que deberá cumplir.

Es preciso destacar que el daño ocasionado al menor es derivado de la desatención en el cumplimiento de la normatividad aplicable que debe cumplir la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, para vigilar la educación de los menores

y por ese incumplimiento, es que se debe de emitir una compensación indemnizatoria.

En razón de que, no se está en condiciones de restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados, al transgredirse en perjuicio del menor el derecho fundamental a la dignidad y a la educación, toda vez que el instituto permitió y no corrigió en los otros menores que propiciaron la agresión, y la conducta crítica de rechazo causando un daño psicológico al menor, el que sin duda debe ser reparado, así como la conducta del colegio de excluir al menor de la escuela de manera unilateral que no fue corregida por la Secretaría de Educación.

En esa tesitura el efecto del amparo es para que:

1. Se deje insubsistente la resolución de veinte de mayo de dos mil trece, emitida por el Secretario de Educación del Estado de Nuevo León y se emita una nueva resolución, que sustituya a la anterior en donde acorde a los lineamientos establecidos en esta ejecutoria determine sancionar al

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], por las conductas consistentes en haber actuado con negligencia y

15/1/2014

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESTADO DE NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN DE
MONTESERIO



123

POLICIA FEDERAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

descuido en la queja que presentó el padre del menor por acoso escolar de que era objeto su menor hijo por alumnos del plantel educativo, en forma reiterada, consistente en maltrato psicológico, verbal y físico al dejarle de hablar, siendo objeto de burlas, y segregado, por tanto, no atendió adecuadamente la queja administrativa dando una solución al problema como se destacan en esta ejecutoria, debiendo considerar dicha autoridad que el grado de responsabilidad en que incurrió el colegio particular, fue sumamente grave, por las consecuencias generadas, toda vez efectivamente hubo una conducta de maltrato en perjuicio del menor por parte de sus compañeros y de la institución educativa que no fue corregida, que transgredió el derecho fundamental de no discriminación, la dignidad del menor y el derecho a la educación, por no inscribir, al menor al siguiente ciclo escolar; y como consecuencia, imponga las sanciones siguientes:

a) Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, de la Ley General de Educación, que establece una multa equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica, le imponga a la institución educativa, la sanción económica que le

FEDERACIÓN
JO EN MATERIA
TO CIRCUITO
O LEÓN

corresponda, partiendo de la base que su conducta debe ser calificada como grave.

b) Que las autoridades responsables de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, impongan al colegio particular [REDACTED]

[REDACTED] a favor del menor quejoso una medida de reparación que brinde una atención psicológica adecuada por personal e instituciones estatales especializadas en la atención de víctimas de acoso escolar de hechos como los ocurridos en el presente caso; siempre y cuando los padres del menor y éste, manifiesten su conformidad para recibir dicha atención, partiendo de la base que su conducta debe ser calificada como grave, lo anterior con fundamento en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1º y 27 de la Ley General de Víctimas.

c) Que las autoridades responsables de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, impongan al colegio particular [REDACTED]

[REDACTED], a favor del menor, una indemnización compensatoria por daño material ocasionado. Es decir, por los gastos relacionados con la asistencia psicológica que pudo haber recibido o esté recibiendo, partiendo de la base



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTECERTE



PODERE JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión

que su conducta debe ser calificada como grave, lo anterior con fundamento en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1º y 27 de la Ley General de Víctimas.

d) Que las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, impongan al

[REDACTED]

[REDACTED] a favor del menor por el daño moral que sufrió por ser víctima de maltrato psicológico y discriminación, una indemnización compensatoria que repare el daño, sufrimiento y las aflicciones que causaron la vulneración a los derechos fundamentales del impetrante del amparo, partiendo de la base que su conducta debe ser calificada como grave, lo anterior con fundamento en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1º y 27 de la Ley General de Víctimas.



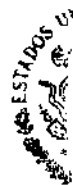
PODERE JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PROLEGADO EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

La cuantía de reparación por el daño material y moral, se deberá establecer en un incidente de ejecución que las autoridades de Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, deberán abrir y verificar su cumplimiento. En la inteligencia de que el juez de Distrito vigilará su debido cumplimiento.

e) Que las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, obliguen al

[REDACTED]
[REDACTED], llevar a cabo cursos de capacitación para prevenir y eliminar cualquier forma de violencia escolar para prevenir y erradicar la discriminación y la violación a los derechos humanos, para los maestros, alumnos y padres de familia de la institución académica, en la inteligencia de que las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, debe vigilar, controlar y dará seguimiento a que se cumpla con esta medida. Lo anterior con fundamento en el artículo 27 de la Ley General de Víctimas.

2. Que las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, y el colegio particular en los casos subsecuentes de acoso escolar por violación al derecho fundamental a la no discriminación y a la dignidad del menor, como en la especie, ajusten su conducta a los protocolos de actuación que se encuentran establecidos, tanto en las normas federales como locales y de carácter internacional, para proteger el interés superior del menor y evitar que casos como el que ahora se resuelve se vuelvan a repetir. Lo anterior con fundamento en el artículo 27 de la Ley General de Víctimas.



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTERREY



3. Que la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León le imponga al colegio particular la obligación de llevar un acto público en la propia institución de reconocimiento de responsabilidad y se ofrezca una disculpa pública al menor y a sus padres por los daños irreparables causados; siempre y cuando los padres del menor y éste se manifiesten de acuerdo. Es importante establecer que dicha disculpa pública, debe llevarse en el colegio, dignificando a las personas ofendidas y resaltando los principios de protección que constitucionalmente debe cumplirse conforme a la Ley General de Educación, la disculpa debe hacerse en el plantel escolar, porque fue en ese lugar donde se generó la conducta de maltrato escolar, además partiendo de la base de que es un problema de política pública, y constituye obligación hacer conciencia tanto en los profesores como en alumnos y en los padres de familia, de las consecuencias, en ocasiones irreparables, que sufren los menores que son víctimas de maltrato a fin de que no se vuelvan a repetir. Al acto público deberá convocarse a las víctimas y estar presente las autoridades, con la precisión de que la convocatoria deberá hacerse con el tiempo suficiente entre la notificación y la ceremonia que, además, será



DE LA FEDERACIÓN
LEGADO EN MATERIA
EL CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

solemne. En la comunicación la autoridad deberá correr traslado del programa y del contenido exacto a los quejosos a fin de que tengan la certeza del propósito y no puedan ser objeto de una ofensa mayor ni de justificación a lo que ya se determinó. Lo anterior con fundamento en el artículo 27 de la Ley General de Víctimas.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 183, 184, 185, 186 y 188 de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve:

PRIMERO. Se **revoca** la resolución recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión **ampara y protege** a [REDACTED], por sus propios derechos y en representación de su menor hijo [REDACTED], en contra el acto que reclamó precisado en el resultando primero de la presente ejecutoria, para el efecto indicado en el considerando anterior.

Notifíquese.

A S Í, por unanimidad de votos, lo resolvió el **Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito**, entonces integrado por los magistrados **Antonio Ceja Ochoa**, en su calidad de presidente interino y ponente, con



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVA
MONTERREY



124

Amparo en Revisión

POD JICIAL DE LA FEDERACIÓN

fundamento en lo establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en sustitución del magistrado Sergio Javier Coss Ramos; Sergio Eduardo Alvarado Puente y la licenciada Juana María Espinosa Buentello, secretaria en funciones de magistrada, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la referida Ley Orgánica. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 188, párrafo segundo de la Ley de Amparo, firman para constancia el magistrado Sergio Javier Coss Ramos (presidente), así como los magistrados que intervinieron en el presente asunto, Antonio Ceja Ochoa (ponente) y Sergio Eduardo Alvarado Puente, conjuntamente con la licenciada Robertha Soraya de la Cruz Vega, secretaria de Acuerdos. Haciendo constar que los días diecisiete y veintiuno de noviembre de dos mil catorce, fueron inhábiles, por lo que no corrió término para el engrose Doy fe.

DE LA FEDERACIÓN
LEGISLADO EN MEXICO
EL CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEO

MAGISTRADO PRESIDENTE

SERGIO JAVIER COSS RAMOS

MAGISTRADO PONENTE

ANTONIO CEJA OCHOA

MAGISTRADO

SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

ROBERTHA SORAYA DE LA CRUZ VEGA

PODE.
PRIMER
ADMIN.
N

Esta foja corresponde a la parte final de la ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión número 131/2014, interpuesto por JAIME GONZÁLEZ PÁEZ, por sus propios derechos y en representación de su menor hijo JAIME ALBERTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ; en la que se revocó la resolución impugnada y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos indicados en el propio fallo.

Cotejó: Friscila Ponce Castillo
PPC/pgg

La secretaria de Acuerdos hace constar que el presente asunto judicial se firmó en 12 DIC 2014 y en esta misma fecha, se recibieron en esta Secretaría, los autos y la sentencia anterior, que fue aprobada en sesión de este Tribunal Colegiado en fecha 07 NOV 2014 y se pasan al Actuario para su notificación
Doy Fe.

15 DIC 2014

a las nueve horas, notifico el proveído anterior a las partes por medio de lista que fijo en estrados de este Tribunal de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Amparo en vigor. Doy Fe.

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: RespuestaAcuerdo.pdf
Secuencia: 2304389

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	CELIA LUZ GARZA GARCÍA	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GAGC690102MNLRRLO8			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6600000000000000000000000009163	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	27/11/2018T01:16:21Z / 26/11/2018T19:16:21-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	09 24 9b 6a 06 8b 8d 7e e0 2e 87 7e 26 07 cc b3 34 50 f8 d3 b7 92 31 cf fc 79 d0 b5 a6 e4 89 81 11 84 45 77 72 44 d0 99 0e 35 fe fe 3f 5a f3 e3 85 1c 16 39 e8 83 61 cc 21 42 68 82 f0 b6 48 a2 1b 0d b7 da 7e 7b 50 53 8f 52 a1 a2 a9 3e 80 d9 37 93 28 51 99 2f 27 3c 2e a3 57 d8 85 9c 95 a3 d1 17 7f e8 a4 3c 93 02 6d 56 54 6f c9 b7 a7 a0 53 63 93 94 e9 d6 28 ac a1 d4 ad 3f 06 77 51 d6 81 9d 84 41 ae 08 09 3f fd 82 6e cd e1 34 72 82 5f d7 39 e8 bf aa 27 b5 d1 8d d4 29 ff 20 c9 32 a3 14 a4 3c d4 80 6f 0a c0 c1 f1 51 b4 c9 a7 0e 85 41 5f 51 62 0d 90 d7 94 7f 23 47 d6 b3 f9 f7 b8 48 93 a4 d0 22 98 bd 60 4e d1 b2 32 a1 19 b7 d7 13 e7 5c 51 91 8c cb 22 15 81 b9 2f 5e a0 09 41 2b 25 f6 0a c9 5b 93 fb 1d 6a 59 d0 9b 8f c5 a4 a3 71 02 bf c8 4a ca 15 8e fd ea 30 fd b8 d4			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	27/11/2018T01:15:21Z / 26/11/2018T19:15:21-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a660000000000000000000000000009163			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	27/11/2018T01:16:21Z / 26/11/2018T19:16:21-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2307276			
	Datos estampillados:	60CEE87B861F8881221547BE31BFBCDB5FA8B29D			